

# Marginalización de la agricultura campesina e indígena

Dinámicas locales, seguridad  
y soberanía alimentaria

Gonzalo Colque, Miguel Urioste  
y Jose Luis Eyzaguirre





# **Marginalización de la agricultura campesina e indígena**

**Dinámicas locales, seguridad  
y soberanía alimentaria**



# **Marginalización de la agricultura campesina e indígena**

**Dinámicas locales, seguridad  
y soberanía alimentaria**

Gonzalo Colque

Miguel Urioste

Jose Luis Eyzaguirre



TIERRA cuenta con el apoyo institucional de:

Pan Para el Mundo - Servicio Protestante para el Desarrollo (PPM-SPD)  
Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo (ICCO)

Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de una subvención del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) en el marco del proyecto "Seguridad alimentaria, tierra y territorio en Bolivia".

Colque, Gonzalo; Urioste, Miguel; Eyzaguirre, Jose Luis  
Marginalización de la agricultura campesina e indígena: Dinámicas  
locales, seguridad y soberanía alimentaria  
La Paz: TIERRA, 2015.

DL: 4-1-999-15

ISBN: 978-99974-821-3-6

AGRICULTURA CAMPESINA E INDÍGENA / AGRICULTURA  
FAMILIAR / DESCAMPESINIZACIÓN / SEGURIDAD  
ALIMENTARIA / SOBERANÍA ALIMENTARIA /  
MARGINALIZACIÓN / AGROINDUSTRIA / TIERRA /  
TERRITORIO / INDÍGENAS / CAMPESINOS / BOLIVIA

© TIERRA, marzo de 2015

Editor: TIERRA

Calle Hermanos Manchego N° 2566

La Paz – Bolivia

Tel: (591) 2 243 2263

Fax: (591) 2 211 1216

Email: [tierra@ftierra.org](mailto:tierra@ftierra.org);

Sitio web: [www.ftierra.org](http://www.ftierra.org)

Cuidado y edición: Floriana Soria Galvarro y Rubén Martínez

Fotografía de tapa: Fernando Soria A.

Diseño y diagramación: TIERRA

Impresión: Creativa Producciones

Impreso en Bolivia

# Índice

Presentación .....	1
Introducción .....	5
<b>Capítulo 1</b>	
<b>Estado de situación de la agricultura campesina e indígena ....</b>	<b>15</b>
Introducción.....	15
1. Principales rasgos de la agricultura campesina indígena .....	17
1.1 Cambios demográficos y urbanización .....	18
1.2 Caracterización geográfica de la población .....	20
1.3 Caracterización socioeconómica y pobreza en el medio rural .....	22
2. Cambios en la estructura agraria .....	26
2.1 La Reforma Agraria: punto de partida para la visibilización de la agricultura campesina e indígena .....	26
2.2 Número de unidades productivas agropecuarias.....	28
3. La agricultura campesina e indígena dentro de las recientes transformaciones agrarias .....	30
3.1 Diversidad de agriculturas campesinas e indígenas .....	32
3.2 La agricultura campesina e indígena según regiones .....	36
4. Exportación e importación de alimentos .....	38
4.1 Exportaciones agroalimentarias .....	38
4.2 Importación de alimentos y desplazamientos de agriculturas campesinas .....	40
Conclusión .....	41

## Capítulo 2

### Cambios en las dinámicas y estrategias locales

<b>de la agricultura campesina indígena</b> .....	45
Introducción.....	45
1. Principales rasgos y transformaciones en la agricultura de base campesina.....	48
1.1 Cambios en los patrones de consumo de alimentos.....	50
1.2 Sostenidos flujos migratorios y desplazamientos espaciales .....	52
1.3 Expansión del mercado con efectos diferenciados .....	54
1.4 Políticas públicas contradictorias .....	57
1.5 Crecientes impactos ambientales. ....	60
1.6 Disminución del aporte de los campesinos a la provisión de alimentos. ....	61
2. Tipología de agricultores familiares: ideas preliminares.....	65
2.1 Los pequeños productores de <i>commodities</i> subordinados al agronegocio .....	65
2.2 Los pequeños productores orientados preferentemente al mercado interno.....	70
2.3 Los productores de subsistencia.....	73
3. Necesidad de políticas diferenciadas .....	77
3.1 Para los productores de <i>commodities</i> . ....	77
3.2 Para los agricultores familiares especializados. ....	78
3.3 Para los los campesinos de subsistencia y pueblos indígenas .....	78

## Capítulo 3

### El papel de la agricultura campesina e indígena para la seguridad y soberanía alimentaria .....

1. El nuevo contexto político-económico .....	82
1.1 El contexto global de la crisis alimentaria.....	85
1.2 Dependencia alimentaria del comercio exterior .....	86
1.3 Políticas de mitigación y gasto social en el sector rural ...	88
2. Campesinos y su condición de productores primarios .....	90
2.1 Pequeños sojeros, cocaleros y agricultores de subsistencia .....	91
2.2 Los obstáculos para el procesamiento de alimentos.....	93

2.3	Articulación al mercado.....	95
3.	Campeños y su condición de consumidores de alimentos procesados .....	96
3.1	El peso creciente de los alimentos procesados en la canasta alimenticia rural .....	98
3.2	Origen de los alimentos procesados .....	101
3.3	¿Aumentar la capacidad adquisitiva de campesinos e indígenas? .....	105
4.	Posibilidades y límites para la seguridad y soberanía alimentaria de base campesina e indígena .....	107
	Conclusión .....	112

## **Capítulo 4**

### **Conclusiones y recomendaciones .....**

1.	La sociedad rural de campesinos e indígenas.....	115
2.	Urbanización y migración.....	117
3.	Seguridad y soberanía alimentaria .....	119
4.	¿Fin de la agricultura campesina e indígena? .....	122
5.	Recomendaciones .....	125
5.1	La necesidad de reorientar la agenda agropecuaria nacional .....	125
5.2	Dinámicas diferenciadas, políticas diferenciadas .....	126
5.3	Un papel productivo explícito para la agricultura campesina e indígena .....	127
5.4	Cooperación a escala regional.....	128
5.5	Políticas de nutrición y alimentación saludable.....	129

	<b>Bibliografía.....</b>	<b>131</b>
--	--------------------------	------------

	<b>Anexos.....</b>	<b>137</b>
--	--------------------	------------

	<b>Sobre los autores .....</b>	<b>147</b>
--	--------------------------------	------------

## **Lista de cuadros**

Cuadro 1. Población por área geográfica (2001-2012).....	21
Cuadro 2. Perfil de la pobreza urbana y rural 2012 .....	23
Cuadro 3. Evolución de las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) y superficie cultivada .....	29
Cuadro 4. Evolución de la superficie cultivada, producción y rendimiento entre 1990 y 2010.....	31
Cuadro 5. Superficie y producción de cultivos por tipo de agricultura (2010) .....	35
Cuadro 6. Valor de las exportaciones agroalimentarias en dólares .....	39
Cuadro 7. Importación de alimentos en Bolivia (2005-2014) .....	41

## **Lista de gráficos**

### **Capítulo 1**

Gráfico 1. Evolución de la población urbano-rural en Bolivia (1950-2014) .....	19
Gráfico 2. Niveles de pobreza por región productiva y origen étnico .....	25
Gráfico 3. Evolución de la superficie y producción agrícola por macro regiones 1990-2010.....	37

### **Capítulo 2**

Gráfico 1. Producción Agrícola TM .....	61
---	----

# Abreviaciones

ADEPCOCA	Asociación Departamental de Productores de Coca
ADM SAO SA	Archer Daniels Midland Company
AFS	Agriculture and Food Security
ANAPO	Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo
BDP	Banco de Desarrollo Productivo
CAPPO	Confederación Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente
CIDOB	Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia
CNA	Censo Nacional Agropecuario
CNMCIQB-BS	Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”
CONAMAQ	Consejo Nacional de Ayllus y Marqas del Qullasuyu
CPE	Constitución Política del Estado
CSCIB	Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia
CSUTCB	Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
DICOCA	Desarrollo Integral con Coca
EMAPA	Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos
ENA	Encuesta Nacional Agropecuaria
FAN	Fundación Amigos de la Naturaleza
FDPPIOYCC	Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas
FENCA	Federación Nacional de Cooperativas Arroceras
FINO	Industrias de Aceites S. A.
IAA	Indicador de Acceso a Alimentos
IDRC	Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
INE	Instituto Nacional de Estadística
INRA	Instituto Nacional de Reforma Agraria

IOL	Industrias Oleaginosas S.A.
IPC	Índice de Precios al Consumidor
MDRyT	Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
OECA	Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia
PASA	Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria
PIB	Producto Interno Bruto
PMA	Programa Mundial de Alimentos
PROAGRO	Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable
RIN	Reservas Internacionales Netas
TCO	Tierra Comunitaria de Origen
TGN	Tesoro General de la Nación
TIERRA	Taller de Iniciativas en Estudios Rurales y Reforma Agraria
TM	Toneladas Métricas
UDAPE	Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas
UNAGRO SA	Unión Agroindustrial de Cañeros S. A.
UPA	Unidad Productiva Agropecuaria

# Presentación

A menudo la sociedad rural de pequeños agricultores familiares es imaginada como si fuera un entorno sosegado con altos grados de autonomía y capacidad de autoabastecimiento. Sus formas comunitarias incluso han sido fuente de inspiración para quienes buscan respuestas al desarrollismo en crisis o se interesan en alternativas poscapitalistas. Este libro más bien muestra que las dinámicas contemporáneas han permeado con fuerza el mundo rural y afectado sus habilidades para alcanzar –por sí mismos– seguridad y soberanía alimentaria.

Muchos sectores del agro podrían ser considerados o auto identificarse como agricultores familiares. El riesgo es que al incluir con poca rigurosidad una amplia gama de sectores podemos perder de vista cuál es nuestra unidad de análisis. Por eso hemos optado por utilizar el término de ‘agricultura campesina e indígena’ para referirnos a aquellas unidades productivas agropecuarias operadas por familias que están débil pero crecientemente conectadas al mercado de productos agrícolas y precariamente al mercado laboral. En términos de Shanin (1990, 5) consiste en pequeños productores del agro que apoyados por equipos de trabajo simples y a base de fuerza de trabajo familiar producen principalmente para su propio consumo y a su vez están subordinados a poderes externos.

En Bolivia esta conceptualización explica la realidad de una heterogeneidad de sectores: campesinos parcelarios de las tierras altas, pequeños ganaderos tradicionales, originarios de *ayllus* y *markas*, indígenas de tierras bajas, campesinos cruceños, colonizadores andinos, entre otros. Casi todos, sino todos, tienen en común su reivindicación como pueblos de origen precolonial. En la Constitución

Política del Estado (CPE) se ha adoptado el término de “naciones y pueblos indígena originario campesinos” para reconocer a favor de todos ellos un amplio y único catálogo de derechos. Entonces, sabiendo que existe un complejo mosaico étnico y distintos grados de desarrollo económico de estas unidades familiares, hablamos de ‘agricultores campesinos e indígenas’ para destacar su rol económico (al indicar ‘campesinos’) y condición étnica (al añadir ‘indígenas’) pero sin desconocer la importancia de denominativos específicos y particularidades regionales.

Con estas aclaraciones, la Fundación TIERRA pretende contribuir a los estudios sobre los cambios agrarios que afectan a los sectores rurales empobrecidos y las implicaciones que tienen para la seguridad y soberanía alimentaria. Consideramos que son temas prioritarios en tiempos de cambios globales y en el contexto boliviano. Todos sabemos que la crisis alimentaria y la necesidad de producir más alimentos pero con menores costos sociales y ambientales están redefiniendo las políticas agrarias y nuevas condiciones para el mercado internacional de alimentos. A nivel nacional, el aporte de la agricultura al Producto Interno Bruto (PIB) ha crecido en los últimos años, sin embargo, también se ensancha la brecha entre pequeños y grandes productores, algo que obliga a prestar atención a las políticas de equidad y crecimiento con redistribución.

Esta investigación ha sido posible gracias al apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) mediante su programa de Agricultura y Seguridad Alimentaria. Esta contribución hizo posible la generación de información de primera mano y evidencias recogidas en terreno para así aproximarnos a algunas respuestas a temas centrales de las cuestiones agrarias y alimentarias de hoy en día. También nuestro agradecimiento especial a los productores campesinos e indígenas quienes nos han brindado no solo información sino apoyo y confianza especialmente en la etapa de trabajo de campo en los municipios de Cuatro Cañadas (Santa Cruz), Yanacachi (La Paz-Los Yungas), TCO Macharetí (Chuquisaca), Villa Serrano (Chuquisaca), Rurrenabaque (Beni), Comarapa (Santa Cruz) y Tiwanaku (La Paz).

Esperamos sumarnos con este trabajo a las contribuciones y esfuerzos que diferentes organizaciones internacionales, actores estatales y no estatales están desarrollando para mejorar las condiciones de vida de quienes operan las pequeñas unidades productivas agropecuarias.

Para concluir, invitamos al lector a explorar el contenido de esta publicación.

## **TIERRA**

*La Paz, marzo de 2015*



# Introducción

Este libro pudo haberse llamado “Estancamiento de la agricultura campesina e indígena” o “Transformaciones en la agricultura campesina e indígena”, pero optamos por el concepto de “marginalización” porque refleja mejor lo que a nuestro juicio está ocurriendo desde hace mucho tiempo en Bolivia: la confluencia de una serie de factores acaban relegando al campesinado como clase social y agente económico relevante para la seguridad y soberanía alimentaria.

Hasta hace unas décadas, la población rural ocupaba su fuerza de trabajo casi de forma exclusiva en actividades productivas agropecuarias. Esto ya no es así desde hace varios años. En las sociedades modernas fuera de Bolivia, los agricultores abandonaron el campo porque las innovaciones tecnológicas –la revolución verde– crearon condiciones óptimas para el aumento de la producción y productividad agrícola, aunque esto tuviera notables efectos indeseados en el medio ambiente. Al mismo tiempo, los campesinos encontraron ocupaciones alternativas en el sector industrial y de servicios de las ciudades. Este no es el caso boliviano. Al contrario, el abandono parcial del agro ocurre precisamente porque no se han producido mejoras significativas en los rendimientos agrícolas, lo cual ocasiona un estancamiento estructural en la producción agropecuaria y la persistencia de altos índices de pobreza extrema. Los pobladores rurales dejan el campo porque el retorno monetario –el ingreso familiar– que generan las actividades agrícolas es muy bajo comparado con otras posibilidades de empleo. En consecuencia, el aporte de la agricultura campesina e indígena disminuye en términos de participación en el Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario nacional.

En los últimos años, los sustantivos incrementos en los presupuestos de inversión pública para el sector agropecuario no han podido revertir la preocupante situación de campesinos e indígenas. La proporción de la inversión sectorial continúa siendo tan marginal como antes dentro del conjunto de la inversión pública. Si bien tanto el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, como las obras públicas contabilizadas en otras partidas presupuestarias (sistemas de riego, caminos vecinales, electrificación rural, seguro agrario) se han multiplicado por tres en comparación con los montos asignados antes de 2006 (Informe Presidencial 2013), estos cambios han seguido la lógica expansiva del gasto público y se han dado en la misma proporción del aumento de los ingresos del Tesoro General de la Nación (TGN) por concepto de las exportaciones de gas y minerales. Esto significa que en las últimas décadas no hubo una efectiva priorización de la inversión pública para cambiar las condiciones productivas en el agro de modo que hagan posible un desarrollo rural sostenible en términos ambientales y sociales. Asimismo, las políticas sectoriales agropecuarias continuaron subordinadas a la política macroeconómica de estabilización y control de la inflación de la canasta básica de alimentos.

Una de las consecuencias del estancamiento de la agricultura campesina e indígena y de los cambios en los hábitos de consumo es que el valor de las importaciones de alimentos y materias primas agropecuarias ha crecido tres veces en la última década (UDAPE 2014). Como es lógico, el aumento de estas importaciones no es apreciado por los actores estatales como un cambio favorable pero ocurre en respuesta al crecimiento acelerado de la demanda por consumo, estimulada por los mayores ingresos de la población y la inhabilidad del aparato productivo interno –en este caso las economías campesinas– para reaccionar a la misma velocidad aumentando su oferta de alimentos. De alguna manera, la economía boliviana estaría acercándose peligrosamente a lo que –en la jerga de los economistas– se conoce como la “enfermedad holandesa”. Cuando los ingresos por exportaciones de materias primas crecen significativamente, es más fácil importar alimentos antes que producirlos.

La economía boliviana ha crecido a un ritmo un poco mayor al 5 por ciento anual en términos de PIB durante la última década. No

ha ocurrido lo mismo con el aporte de la agricultura campesina que está apenas alrededor de 2,19 por ciento anual, cifra muy cercana al crecimiento vegetativo de la población de 1,74 en el período 2001–2012 (UDAPE 2014).

El problema que enfrenta la agricultura campesina e indígena no es un fenómeno secundario, más aun en una sociedad como la nuestra de profunda autopercepción étnica indígena asociada todavía a una alta ruralidad. El acelerado crecimiento de las ciudades, sobre todo de Santa Cruz y El Alto, genera nuevos problemas y desafíos especialmente si seguimos siendo un país en vías de desarrollo con pocos rubros productivos y bajo grado de desarrollo económico. La reducción de la población rural y de la producción campesina y el creciente empleo de la fuerza de trabajo en precarias actividades extraprediales e informales en las ciudades, antes que ser una solución de la modernidad, se convierten en obstáculos que impiden un desarrollo más horizontal e inclusivo del sector agropecuario y de la economía en general. Hacen falta mayores esfuerzos para mejorar las condiciones de vida del campo, por ejemplo, democratizar todavía más el acceso a los servicios de salud, vivienda, educación, comunicaciones, transporte, esparcimiento y otros. El acceso a servicios básicos de calidad haría la vida rural un poco menos dura. En las actuales condiciones, dedicarse a la agricultura familiar a tiempo completo sigue siendo una actividad de altísimo riesgo y muy poco atractiva, es casi una fatalidad de la que muchos –especialmente los jóvenes– intentan escapar saliendo del campo.

### **Propósito de la publicación**

Este texto se centra en el análisis de algunos factores claves que explican la marginalización de la agricultura campesina e indígena y cómo la misma afecta a la seguridad y soberanía alimentaria de los pobladores rurales. Guiados por este propósito mayor el trabajo también busca contribuir al análisis sobre los cambios socioeconómicos en las áreas rurales, la tendencia creciente a la especialización productiva de algunas familias, la expansión de las relaciones mercantiles en el campo, los cambios en la dieta alimenticia rural y la mayor presencia

de alimentos procesados en la canasta básica de alimentos. También se intenta identificar y valorar por qué los campesinos e indígenas, muchos aun atrapados en la extrema pobreza, acuden a estrategias de diversificación productiva y de empleos (multiactividad y multi-residencia) y cuál es la importancia de los bonos sociales y remesas familiares para mejorar las condiciones de vida del campo.

La ‘descampesinización’ como concepto y hecho empírico que ha sido debatido ampliamente (sin un consenso definitivo pues tiene sus defensores y detractores), en el contexto actual cobra una renovada importancia para entender la cada vez menor trascendencia de los agricultores campesinos e indígenas. Las propuestas de “Vivir Bien”, derechos de la “Madre Tierra”, “Soberanía Alimentaria” –que han modelado aspectos centrales de la Constitución Política del Estado (CPE 2009) y de sucesivos planes de gobierno (2006 al 2014)– han sido esfuerzos válidos hasta cierto punto para construir un nuevo imaginario de ‘recampesinización’ y ‘campesinización urbana’ que ayude a revertir la delicada situación de los excluidos. Sin embargo, todo parece indicar que la constitucionalización de estos nuevos paradigmas y el retorno del Estado al agro no ha tenido hasta ahora los alcances suficientes para regular el modelo agropecuario, vigente desde los años ochenta del siglo pasado, cada vez más orientado hacia un modelo agroexportador de materias primas de origen agropecuario.

Es un modelo agrario que forma parte del nuevo paradigma de la globalización donde el agronegocio ha cambiado la naturaleza de esta actividad en el Cono Sur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y en menor medida en Bolivia. En este contexto mayor, la agricultura a gran escala no convive ni se complementa con los modos de vida y trabajo de las familias campesinas e indígenas. Al contrario, también en Bolivia emergen con fuerza procesos de subordinación que quitan protagonismo social y económico a los pequeños productores parcelarios.

Si bien la tendencia a la disminución de las poblaciones rurales en relación con las poblaciones urbanas es un fenómeno planetario, en

el caso de Bolivia los migrantes y los propios pobladores rurales están atrapados en sistemas altamente precarios de auto empleo informal. Esto se traduce en un declive permanente de la oferta alimenticia de origen campesino o, lo que es lo mismo, los campesinos ya no son principales proveedores de alimentos. Por todo eso el multiempleo y la multiresidencia son dos factores claves que explican la nueva ruralidad en América Latina y en Bolivia. ¿Puede todavía nuestro país aspirar a construir un modelo productivo distinto?, ¿puede Bolivia acercarse a un tipo de seguridad y soberanía alimentaria donde los campesinos e indígenas tengan un rol al menos visible sino protagónico? En este libro también se exploran algunas posibles respuestas y condiciones bajo las cuales se podría replantear los programas agropecuarios vigentes.

## Consideraciones metodológicas

Este texto se sustenta en varios documentos de trabajo que fueron producidos utilizando información primaria recolectada en campo durante el periodo 2012–2013. Concretamente se trata de un conjunto de trabajos que tenían en común el objetivo de generar conocimientos y capacidades de investigación sobre seguridad alimentaria desde un enfoque integral, privilegiando el abordaje de las políticas de tierras, políticas agrarias y experiencias específicas en comunidades campesinas e indígenas. Esta iniciativa fue apoyada por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) mediante su programa de Agricultura y Seguridad Alimentaria para contribuir a varios esfuerzos en distintas partes del mundo por examinar en diferentes contextos la hipótesis de que la agricultura a pequeña escala es un elemento clave para la reducción de la pobreza y seguridad alimentaria.

A nivel de información primaria, se realizaron estudios de caso en cinco municipios: Cuatro Cañadas (Santa Cruz), Yanacachi (La Paz–Los Yungas), Macharetí (Chuquisaca), Villa Serrano (Chuquisaca) y Rurrenabaque (Beni)<sup>1</sup>. Los resultados de cada uno de estos estudios

---

1 Además, existen otros dos estudios de caso pertenecientes a los municipios de Tiwanaku (La Paz) y Comarapa (Santa Cruz). Los resultados de estos dos

han sido publicados previamente y tienen énfasis en aportar evidencias sobre la situación alimentaria de los hogares campesinos e indígenas en términos de consumo y acceso a alimentos. Uno de los resultados de estos trabajos concretos fue que los hogares rurales de las zonas estudiadas no presentan altas tasas de inseguridad alimentaria, un hallazgo de investigación contrario a nuestros supuestos iniciales. Por tanto una pregunta analítica que surge es ¿Por qué es mejor la seguridad en contextos de baja producción y productividad? Como veremos en los siguientes capítulos, la situación actual no es definitiva sino más bien frágil y dependiente de factores externos.

La información levantada en campo se ha combinado con información secundaria y literatura reciente en materia agraria, estudios sobre el campesinado y sus transformaciones. La cualificación de preguntas y respuestas básicamente ha sido posible mediante talleres de discusión entre los investigadores involucrados combinando material proveniente de las lecturas con trabajo de campo, la observación directa, las entrevistas en profundidad y las encuestas a hogares rurales en los municipios mencionados. Al entrelazar información primaria específica e información secundaria de carácter nacional hemos pretendido formular generalizaciones y conclusiones que profundizan aspectos centrales de los hallazgos encontrados en el trabajo de campo. De cualquier modo, reconocemos que esta forma de proceder tiene sus limitaciones por lo que este texto más bien debe ser considerado como un complemento analítico a los otros estudios que versan sobre los temas referidos<sup>2</sup>.

---

trabajos se presentan en una publicación separada por la particularidad de ser casos exitosos de donde podrían extraerse lecciones concretas para dinamizar la agricultura campesina e indígena a nivel local.

- 2 Específicamente, los estudios publicados están reunidos en el trabajo *¿Comer de nuestra tierra? estudios de caso sobre tierra y producción de alimentos en Bolivia* (2013) y en la Revista *Cuestión Agraria N° 1* sobre Seguridad y soberanía alimentaria entre campesinos e indígenas (2014), ambos publicados por Fundación TIERRA.

## Estructura del texto

Este trabajo está organizado en tres capítulos centrales, además de esta introducción y la última sección de conclusiones y recomendaciones.

El primer capítulo se basa en series estadísticas de las últimas dos décadas ensayando cortes, agrupaciones y clasificaciones de las principales variables (superficies, rendimientos, valor bruto de la producción) con el propósito de caracterizar las unidades productivas agropecuarias (UPA) en general y aquellas que son de base campesina e indígena en particular. Se hace una caracterización demográfica y socioeconómica de los pobladores rurales. Se revisa las principales categorías de agricultores campesinos e indígenas según tamaño de tierras cultivadas, tipos de cultivos y destino de la producción, entre otros. También se presenta datos sobre el comportamiento del comercio exterior de alimentos.

El segundo capítulo está dedicado a la caracterización de los principales cambios y dinámicas que afectan a la agricultura campesina e indígena. Hace un análisis de los cambios en el contexto, en las condiciones de vida, de trabajo y del consumo de alimentos de las familias de campesinos. También estudia el papel del Estado y de algunas políticas públicas para estimular el agro especialmente durante la última década. En una segunda parte propone para el debate una tipología actualizada de la agricultura campesina e indígena: los agricultores de subsistencia, los mercantiles y los productores de *commodities*. Hace recomendaciones de políticas públicas para cada uno de estos tipos de UPA.

El tercer capítulo se concentra en un debate sobre los conceptos y la realidad de la seguridad y soberanía alimentaria y el papel que juegan los agricultores campesinos e indígenas en su doble condición de productores y consumidores. Analiza por qué la agricultura campesina, a diferencia de la agricultura familiar, está circunscrita mayormente al sector primario y no logra acumular capacidades para transformar los alimentos. Este capítulo revisa el retorno del

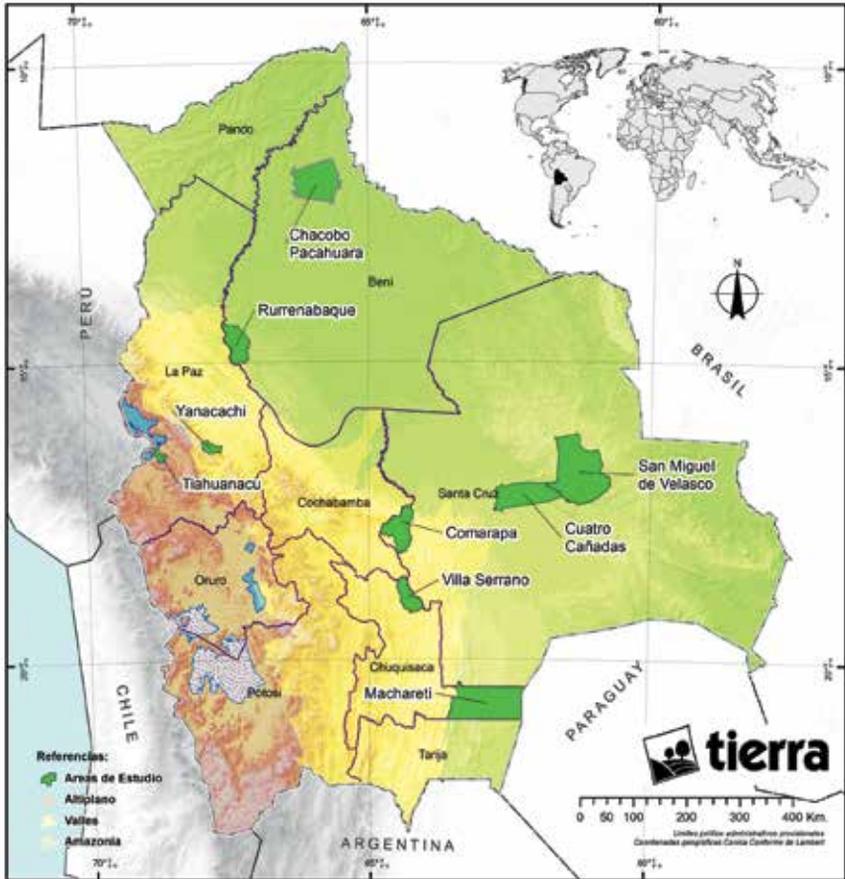
Estado al agro mediante empresas públicas y señala algunas de sus potencialidades y limitaciones. Estudia las transformaciones en el consumo de alimentos de las familias campesinas y el origen de sus alimentos y cómo ahora la dieta alimenticia rural tiende hacia la estandarización en base a productos mayormente comprados de la industria alimenticia. Este capítulo concluye revisando las posibilidades y límites para la seguridad y soberanía alimentaria de base campesina indígena.

Finalmente la última sección, además de recapitular los principales temas abordados, esboza algunas conclusiones y recomendaciones generales. Las conclusiones están organizadas en torno a los siguientes temas: la sociedad rural de campesinos e indígenas, urbanización y migración, seguridad y soberanía alimentaria y sobre la cuestión siempre polémica de la desaparición o no de la agricultura campesina e indígena.

Las recomendaciones extractadas privilegian el tratamiento de los siguientes puntos: la necesidad de priorizar la agenda agropecuaria nacional; las dinámicas diferenciadas y políticas diferenciadas; la necesidad de otorgar un papel productivo explícito a la agricultura familiar, cooperación a escala regional y políticas de nutrición y alimentación saludable. Las conclusiones y recomendaciones tienen el ánimo de contribuir a dinamizar el debate sobre estos temas y aportar a la construcción de ideas renovadas.

# Mapa 1

## Mapa de Bolivia ubicando las áreas de estudio



Fuente: elaborado por Efraín Tinta.



# Capítulo 1

## Estado de situación de la agricultura campesina e indígena

### Introducción

Es una realidad que el sector agropecuario boliviano ha tenido una expansión importante por el auge de las materias primas y la subida de los precios internacionales. También es evidente que la mayor parte de este crecimiento está destinado a las exportaciones y solo una parte menor contribuye a la seguridad alimentaria nacional. En estas circunstancias, la agricultura campesina e indígena ha ido perdiendo visibilidad e importancia frente a las extensas y crecientes superficies de tierras cultivadas y volúmenes de producción generados por la agroindustria. Pero también es cierto que pierde importancia por dinámicas internas que se han traducido principalmente en el paulatino abandono del campo por parte de su población, la cual busca mejores oportunidades económicas en los centros urbanos y en otros países.

La imagen de la población rural en Bolivia está asociada íntimamente con una agricultura a pequeña escala y de baja productividad, con poca participación en el mercado de alimentos y con recurrentes altas tasas de pobreza entre campesinos parcelarios, campesinos ganaderos de las zonas de pastoreo extensivo de tierras altas o indígenas en territorios comunales de las tierras bajas.

No obstante la reciente reducción de la pobreza en el país, este cambio no ha afectado por igual al campo y la ciudad, este fenómeno continúa focalizado geográficamente en las áreas rurales. Mientras que en el área urbana la pobreza alcanza al 31,2 por ciento de la

población, en el área rural el 71,5 por ciento de la población aún vive en condiciones de pobreza y se concentra en altiplano y valles por su mayor densidad, pero también en los pueblos indígenas de tierras bajas la incidencia de la pobreza involucra a gran parte de sus habitantes.

Si bien en entre los años 2008 y 2013 ha existido un crecimiento notable en los cultivos de quinua en el altiplano, la producción del sector campesino indígena no muestra tendencias de crecimiento. En los últimos 20 años los productos agrícolas no industriales (la mayor parte de origen campesino) han tenido un aporte casi constante y marginal al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, alrededor del 2 por ciento. El más alto el año 1997 con el 2,9 por ciento y el más bajo en 2011 con el 1,7 por ciento.

Por otra parte, los mercados están cada vez más abastecidos de alimentos elaborados de origen externo e incluso alimentos básicos de origen campesino de países vecinos como los tubérculos, hortalizas y frutas provenientes de Perú, Chile y Argentina. Esto se verifica por el crecimiento de las importaciones en los rubros alimenticios que sumados al contrabando implican que los patrones de consumo de la población van cambiando hacia productos foráneos, desplazando a los productos tradicionales del campo. Esto no es exclusivo de pobladores de áreas urbanas ya que los propios campesinos van disminuyendo su producción diversificada y consecuentemente su consumo, por lo tanto, las fuentes de suministro de su alimentación en su mayor parte también son externas.

Este capítulo tiene como propósito explicar las actuales dinámicas rurales y la significación de la agricultura familiar en el contexto agrícola nacional. Para ello abordamos cuatro temas, a) los principales rasgos de la agricultura campesina indígena; b) los cambios en la estructura agraria; c) la agricultura campesina e indígena dentro de las recientes transformaciones agrarias; y finalmente d) el comercio exterior de alimentos.

## 1. Principales rasgos de la agricultura campesina indígena

Establecer una caracterización de la agricultura campesina e indígena es una tarea compleja. Si bien en líneas generales se conoce donde está situada, las características de su población, los productos que cultivan, cuáles son sus relaciones con el mercado y otros elementos; la labor se hace difícil al momento de tratar de diferenciar este sector de los demás con cierta precisión estadística y establecer sus tipologías, dinámicas y transformaciones recientes. Sin duda, una de las principales limitaciones es la falta de información actualizada y desagregada para hacer estimaciones y proyecciones confiables. La última información de carácter nacional data del Censo Nacional Agropecuario de 1984. Aunque tiene deficiencias en la cobertura geográfica, este Censo sigue siendo la única referencia directa para el sector agropecuario. El año 2013 se realizó un nuevo Censo Nacional Agropecuario (CNA) para actualizar la información estadística del sector, sin embargo, hasta la fecha no existe información oficial disponible.

La agricultura campesina e indígena en Bolivia normalmente ha estado asociada a los productores del agro de valles y altiplano, pero los cambios demográficos y espaciales en la producción agropecuaria han sido sustanciales en los últimos años. Hechos concretos como la creación de zonas de colonización en las tierras bajas y en el norte paceño, así como el acelerado crecimiento de la agroindustria en el oriente, muestran que el escenario rural es ahora diferente, extendido y más heterogéneo.

En términos generales, entendemos por agricultura campesina e indígena aquél sector de las sociedades rurales que está compuesto por unidades familiares que cultivan la tierra y crían animales para producir alimentos, obtienen bienes fundamentales para su propio consumo y venden algunos excedentes. Es decir, son unidades familiares de producción y consumo. Sin embargo, esta definición más bien clásica no es suficiente para entender la heterogeneidad y los cambios que se están produciendo como consecuencia de nuevas estrategias de vida como la 'doble residencia', ingresos no agrícolas, agricultura por contrato en zonas de colonización o acceso comunal a la tierra entre los indígenas de tierras bajas. Este tema será descrito en el capítulo segundo.

Entonces, la agricultura campesina e indígena comprenderá a campesinos y originarios de valles y altiplano, así como familias indígenas de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) de la Amazonia, El Chaco, Chiquitanía, familias de comunidades campesinas en zonas de colonización y otros. En todo caso, la agricultura campesina e indígena se diferencia de la agricultura empresarial o capitalista por ser unidades de producción operadas a escala familiar, sin empleo sistemático de mano de obra remunerada, explotación de pequeñas propiedades agropecuarias e integración de forma subordinada a la agricultura empresarial y a gran escala.

### **1.1 Cambios demográficos y urbanización**

La Reforma Agraria de 1953 fue un hecho trascendental para la constitución de la agricultura familiar de base campesina e indígena. Es a partir de este suceso que las unidades de producción familiar rurales cobraron mayor visibilidad y se establecieron a partir de las políticas de redistribución de tierras. A principios de 1950 se dio este importante cambio en la estructura de la propiedad de la tierra como resultado de la ocupación de casi todas las haciendas en las regiones del altiplano y valles. Ante la repartición de facto de las tierras, el gobierno proclamó en Ucureña el decreto que legalizó la liberalización de la fuerza de trabajo rural-indígena y dio inicio al reparto formal de las tierras. A partir de 1953, en el occidente andino y particularmente en el altiplano ocurrió una profunda transformación de los sistemas de tenencia de la tierra que ha afectado los procesos productivos, la sociedad rural y las estructuras agrarias en su conjunto (Urioste, Barragán y Colque 2007).

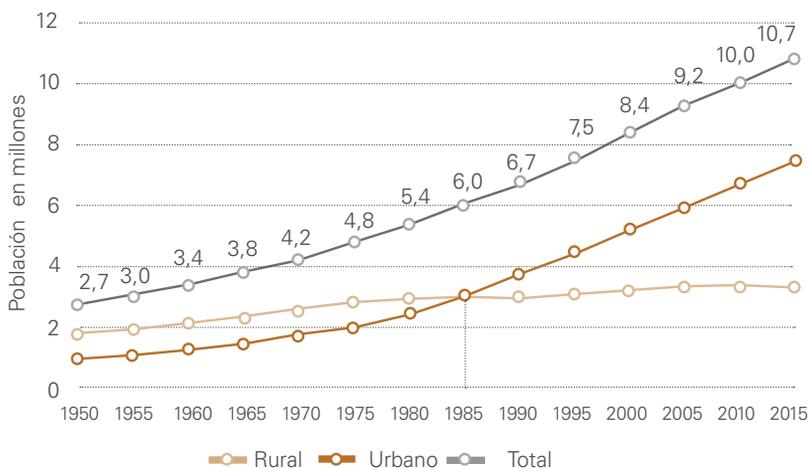
Si bien la Reforma Agraria fue un hecho irreversible en la conquista de los derechos sobre la tierra para las familias indígenas del occidente, también fue evidente su abandono por parte del Estado en sus aspectos económico-productivos. Este hecho junto a la liberación de la fuerza de trabajo produjo una dinámica migratoria acentuada entre campo y ciudad, particularmente en los últimos 30 años.

En 1950 Bolivia se caracterizaba ser por ser un país eminentemente rural. El 73,8 por ciento de la población habitaba en áreas rurales concentradas en los valles y altiplano. Sin embargo, esta situación se invirtió en 60 años ya que para el año 2012 solo el 32,5 por ciento de los bolivianos residía en el campo.

Los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2012 (INE 2014) ratifican el bajo nivel de crecimiento de la población rural que alcanza solo el 5 por ciento, es decir, de 3.109.095 de personas en 2001 a 3.270.894 para el 2012. Para el mismo periodo intercensal la población urbana creció de 5.165.230 a 6.788.962 de habitantes, un 31 por ciento (2,9 por ciento anual), es decir, siete veces más con respecto al crecimiento rural.

Entonces se puede sugerir que existe un estancamiento en el crecimiento de la población rural, pero se debe entender también que pueden estar ocultas otras realidades como la ‘doble residencia’ del campesino e indígena o el nucleamiento de comunidades en pequeños poblados de más de 2 mil habitantes clasificados como urbanos.

**Gráfico 1**  
**Evolución de la población urbano-rural en Bolivia (1950-2014)**



Fuente: elaboración propia en base a CELADE 2014.

El crecimiento casi nulo de la población rural muestra que el sector campesino e indígena atraviesa problemas estructurales. La falta de oportunidades laborales, los riesgos agropecuarios, la falta de infraestructura productiva y limitados sistemas de comercialización de los productos agrícolas, hacen de las zonas rurales un ámbito poco atractivo para las nuevas generaciones que buscan oportunidades de mejorar su economía y acceder a otras formas de trabajo no agrícolas.

## 1.2 Caracterización geográfica de la población

En Bolivia, en términos generales, se consideran dos grandes regiones, las tierras altas y las tierras bajas. Las tierras altas o región occidental del país está conformada básicamente por dos ecoregiones (altiplano y valles), aunque en su interior se pueden distinguir muchos más pisos ecológicos, por ello, existe también una diversidad de campesinos indígenas ligados a la agricultura familiar. En términos de extensión, el altiplano y valles representan el 37 por ciento del territorio nacional y demográficamente concentran el 70 por ciento de la población –urbana y rural–. En el área rural de tierras altas habitan 2.680.978 personas, que representan el 82 por ciento de la población rural boliviana mostrando su predominancia demográfica respecto a las tierras bajas.

Por otra parte, la mayor extensión territorial de Bolivia –63 por ciento– se encuentra en las tierras bajas o llanos denominadas también genéricamente como el oriente, caracterizado por condiciones medio ambientales diferentes al occidente, como es la presencia de mayor vegetación y humedad. En el oriente también se deben distinguir una variedad de ecosistemas con características propias (Amazonía, El Chaco, Chiquitania, llanuras, etc.). Además ha cobrado mayor dinamismo por las políticas de integración a su favor y por las relativas mejores condiciones productivas. Para el 2012 se registraron en esta región 3.028.012 de personas (área urbana y rural) representando el 30 por ciento de la población nacional, un cambio importante en los últimos 60 años, puesto que para el año 1950 solo representaban el 12 por ciento de la población nacional. El área rural de las tierras bajas se caracteriza también por la presencia de una diversidad de poblaciones indígenas minoritarias

-33 etnias- y de campesinos colonizadores provenientes del altiplano y valles. Para el año 2012 el 18 por ciento de la población rural nacional, es decir, 589.916 personas habitaban en los llanos. A pesar del crecimiento poblacional en los llanos, el altiplano y valles continúa teniendo un peso demográfico importante en la realidad boliviana.

**Cuadro 1**  
**Población por área geográfica (2001-2012)**

	Año	Altiplano	Valles	Llanos	Total general
Número de municipios	2001	80	172	75	327
	2012	86	178	75	339
Población total	2001	1.523.266	4.421.016	2.330.043	8.274.325
	2012	1.908.528	5.123.316	3.028.012	10.059.856
	<b>Variación</b>	<b>25,3%</b>	<b>15,9%</b>	<b>30,0%</b>	<b>21,6%</b>
Población urbana	2001	942.202	2.423.469	1.799.559	5.165.230
	2012	1.287.594	3.063.272	2.438.096	6.788.962
	<b>Variación</b>	<b>36,7%</b>	<b>26,4%</b>	<b>35,5%</b>	<b>31,4%</b>
Población rural	2001	581.064	1.997.547	530.484	3.109.095
	2012	620.934	2.060.044	589.916	3.270.894
	<b>Variación</b>	<b>6,9%</b>	<b>3,1%</b>	<b>11,2%</b>	<b>5,2%</b>
Representatividad rural	2001	18,7%	64,2%	17,1%	100,0%
	2012	19,0%	62,9%	18,1%	100,0%

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE 2014.

Los cambios demográficos según las tres principales regiones –altiplano, valles y llanos– en el periodo intercensal 2001 y 2012 no muestran cambios importantes en la estructura de representatividad regional y rural; si bien hubo un crecimiento vegetativo no se verifican cambios sustanciales. Para 2012 el altiplano representó el 19 por ciento de la población rural, apenas un cambio de 0,3 puntos porcentuales respecto a 2001. Los valles concentraban el 62,9 por ciento de la población rural (2012), esto significa un cambio de 1,3 puntos porcentuales menos respecto a 2001. Los llanos tuvieron un ligero crecimiento del 17,1 al 18,1 por ciento en el periodo intercensal. El cambio demográfico más importante y común en todas las regiones es el crecimiento de pequeñas urbanizaciones con limitados servicios básicos primarios, generando cinturones de pobreza que se constituyen también en problemas para los municipios urbanos (Cuadro 1).

Cabe recalcar que para este análisis se clasificaron las regiones de acuerdo a la predominancia del tipo de ecoregión a nivel de cada unidad territorial municipal, es decir la agrupación no necesariamente obedece a la frecuente clasificación que considera, por ejemplo, como altiplano la totalidad de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. El departamento de La Paz tiene municipios clasificados como altiplano, valles y otros como parte de la región de los llanos. Similar situación se puede observar en el departamento de Cochabamba (ver Anexo 1).

Según la clasificación explicada, el altiplano cubre 86 municipios, los valles 178 y los llanos 75 municipios. En relación al año 2001 se crearon 12 nuevas secciones municipales fundamentalmente en el área rural, seis en el altiplano y seis en los valles.

### **1.3 Caracterización socioeconómica y pobreza en el medio rural**

De acuerdo a estimaciones del INE y con base en los resultados del Censo 2012, el 44,9 por ciento de la población en Bolivia es pobre, el 29,9 por ciento está en el umbral de la pobreza y solo el 25,2 por ciento tendría las necesidades básicas satisfechas. Si bien estos datos muestran una disminución de los niveles de pobreza en Bolivia entre 2001 y 2012, del 58,6 al 44,9 por ciento respectivamente, la pobreza todavía se encuentra focalizada en el medio rural. En tanto que en el área urbana el 32,1 por ciento de la población es pobre, en el área rural alcanza al 71,5 por ciento (Cuadro 2). Pese a los progresos señalados en la satisfacción de necesidades básicas, importantes brechas en materia de desarrollo subsisten entre las zonas urbanas y las zonas rurales de Bolivia. Estas asimetrías explican en gran medida las altas tasas de migración campo-ciudad y la urbanización precaria de las periferias de las principales ciudades.

Los sectores más deprimidos del país continúan ubicándose en las áreas rurales del altiplano donde el 79,4 por ciento de su población es pobre, en los valles tienen similar situación el 71,8 por ciento,

ambos territorios coinciden con las regiones de mayor presencia de agricultura campesina e indígena. En los llanos la pobreza afecta al 62,1 por ciento de su población.

**Cuadro 2**  
**Perfil de la pobreza urbana y rural 2012**

Año	Descripción	Altiplano	Valles	Llanos	Total general
	<i>Población Bolivia</i>	1.523.266	4.421.016	2.330.043	8.274.325
	<i>Población pobre Bolivia</i>	1.156.485	2.735.441	1.016.219	4.908.144
	<b>En porcentaje</b>	<b>75,9%</b>	<b>61,9%</b>	<b>43,6%</b>	<b>58,6%</b>
2001	<i>Población urbana</i>	942.202	2.423.469	1.799.559	5.165.230
	<i>Población urbana pobre</i>	608.439	1.055.999	627.922	2.292.360
	<b>En porcentaje</b>	<b>64,6%</b>	<b>43,6%</b>	<b>34,9%</b>	<b>44,4%</b>
	<i>Población rural</i>	581.064	1.997.547	530.484	3.109.095
	<i>Población rural pobre</i>	548.046	1.679.442	388.297	2.615.784
	<b>En porcentaje</b>	<b>94,3%</b>	<b>84,1%</b>	<b>73,2%</b>	<b>84,1%</b>
		<i>Población Bolivia</i>	1.908.528	5.123.316	3.028.012
	<i>Población pobre Bolivia</i>	974.233	2.385.387	1.160.503	4.520.123
	<b>En porcentaje</b>	<b>51,0%</b>	<b>46,6%</b>	<b>38,3%</b>	<b>44,9%</b>
2012	<i>Población urbana</i>	1.287.594	3.063.272	2.438.096	6.788.962
	<i>Población urbana pobre</i>	481.435	906.409	794.047	2.181.892
	<b>En porcentaje</b>	<b>37,4%</b>	<b>29,6%</b>	<b>32,6%</b>	<b>32,1%</b>
	<i>Población rural</i>	620.934	2.060.044	589.916	3.270.894
	<i>Población rural pobre</i>	492.798	1.478.977	366.455	2.338.231
	<b>En porcentaje</b>	<b>79,4%</b>	<b>71,8%</b>	<b>62,1%</b>	<b>71,5%</b>

Fuente: elaboración propia en base a INE 2014.

Las condiciones agroproductivas del altiplano y valles son una limitante que determina los niveles de pobreza en el área rural boliviana, sin embargo, la dificultad en el acceso a mercados también influye en una mayor o menor tasa de pobreza por regiones. Mientras las familias del occidente destinan al mercado algunos productos como la leche, carne y papa, una parte importante de la producción está destinada al autoconsumo. En los llanos las agriculturas familiares de campesinos y colonizadores tienen una mayor relación con la producción agrícola para el mercado y la agroindustria.

Otra de las variables asociadas con la pobreza es el origen étnico. Si consideramos esta variable los indicadores de pobreza están otra vez directamente relacionados con las poblaciones indígenas. Según el INE (2014) en promedio el 70 por ciento de los indígenas son pobres, el 20 por ciento estaría en el umbral de la pobreza y solo un 10 por ciento tendría las necesidades básicas satisfechas. Si asociamos con la variable de autoidentificación veremos que el 66 por ciento de los quechuas son pobres y el 65 por ciento en el caso de los aymaras.

En las tierras bajas, las altas tasas de pobreza también están asociadas de forma estrecha con los indígenas de la Amazonía, El Chaco, Chiquitania y Amazonía. Tienen sus propias particularidades con actividades económicas centradas en la recolección, caza y pesca. Como medios de vida complementarios desarrollan formas de agricultura familiar a pequeña escala (chacos). Si bien los pueblos indígenas de la Amazonía gozan de mejores condiciones ambientales y mejor acceso a recursos naturales, son los que están expuestos a tasas de vulnerabilidad más altas ya que el 79 por ciento de su población vive en condiciones de pobreza. La situación es similar para los indígenas del chaco (guaraní, wenhayek, tapiete), donde el 70 por ciento es pobre y el 20 por ciento está en el umbral de la pobreza. Los chiquitanos y otros pueblos de Santa Cruz tienen una mejor situación pero no es significativamente distinta debido a que el 60 por ciento de su población aún vive en la pobreza, un 30 por ciento está en el umbral y solo un 10 por ciento tiene necesidades básicas satisfechas.

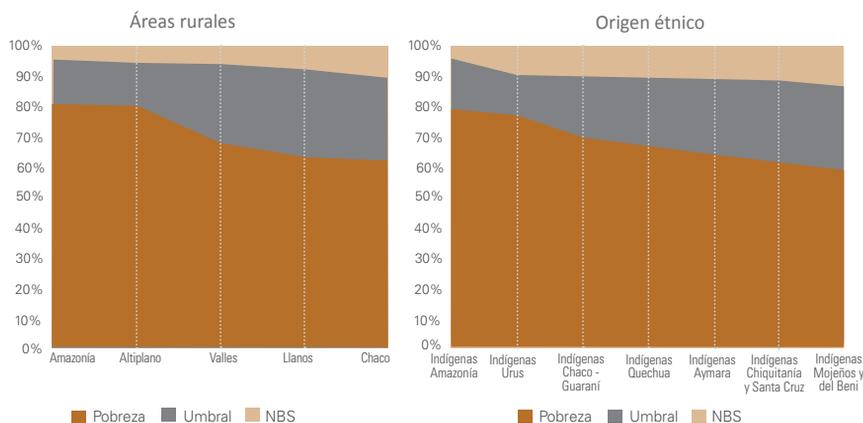
Finalmente los indígenas de los pueblos del Beni como los mojeños, trinitarios y otros, se encuentran en una situación similar porque la mayor parte de su población (58 por ciento) aún vive en la pobreza, el 28 por ciento se encuentra en los umbrales de pobreza y solo el 14 por ciento tiene sus necesidades básicas satisfechas.

Los indígenas de tierras bajas tienen características similares a los de tierras altas en cuanto a sus formas de vida, el acceso comunal a territorios y ciertos hábitos y costumbres más o menos compartidos.

Pero algunos pueblos indígenas tienen sus particularidades, algo que puede constituirse en un obstáculo para las políticas públicas y para la efectividad en las acciones de apoyo al desarrollo. Por ejemplo, los indígenas guaraníes están mucho más próximos a la agricultura familiar como medio de subsistencia en comparación a los chácobo que más bien tienen por base económica actividades ligadas a la recolección, caza y pesca.

El Gráfico 2 muestra que la situación de pobreza es el común denominador entre los agricultores campesinos e indígenas de toda Bolivia tanto por su origen étnico como porque son familias que viven en el campo.

**Gráfico 2**  
**Niveles de pobreza por región productiva y origen étnico**



Fuente: elaboración propia en base a datos del INE 2014.

En resumen se puede evidenciar que la pobreza persiste en las áreas rurales y entre las comunidades indígenas, tanto en oriente como en occidente. En el occidente obedece a factores estructurales como el contexto geográfico de alta montaña, con heladas y sequías persistentes, que limitan las capacidades y competencias productivas. El déficit de tecnología, equipamiento, capital de inversión y operaciones son elementos adicionales que condicionan y dificultan

el acceso a mercados y precios justos. Adicionalmente, los pueblos indígenas de tierras bajas se encuentran en situación de minoría y vulnerabilidad en un contexto regional dominado por empresas agropecuarias y grandes propietarios de tierras.

## **2. Cambios en la estructura agraria**

Los datos más relevantes de los cambios en el sector se presentan en la estructura económica agraria y para entender la actual conformación de las agriculturas campesinas e indígenas debemos considerar el periodo previo a la Reforma Agraria. El régimen republicano de hacienda que duró casi un siglo (79 años) fue resistido por los aymaras y quechuas, quienes se negaron a renunciar a las tierras de sus comunidades que les habían sido expropiadas. Los intentos de recuperación de la tierra incluían acciones judiciales, levantamientos y resistencia a elevar la productividad agrícola. La muerte de numerosos indígenas en la Guerra del Chaco, el creciente descontento de los años 1940 y las rebeliones indígenas, son algunos hechos que propiciaron la ley de reforma agraria para dar fin al régimen de servidumbre (Urioste y Kay 2005).

### **2.1 La Reforma Agraria: punto de partida para la visibilización de la agricultura campesina e indígena**

En 1950, poco tiempo antes de la Revolución de 1952, existía un total de 86.377 unidades productivas agropecuarias (UPA) de las cuales las haciendas (terratenientes) basadas en el trabajo servil representaban el 65 por ciento, mientras que la producción en las comunidades y unidades libres del régimen hacendal solo el 35 por ciento. La mayor parte de las UPA se encontraba en los departamentos de Cochabamba, La Paz, Chuquisaca y Potosí, lo que representaba el 90 por ciento de la superficie cultivada en Bolivia (Paz y Zeballos 2003).

Como se ha mencionado, la Reforma Agraria devolvió tierras a los pongos o trabajadores de las haciendas mayormente en forma de propiedades parcelarias. La ley reconocía jurídicamente el 'solar campesino' como espacio vital para la construcción de la vivienda

de la familia, los corrales para el ganado y los almacenes para el equipo agrícola. El solar campesino formaba el núcleo de la agricultura familiar y se propagó rápidamente en la región andina de Bolivia, a través de procesos complejos de fragmentación de derechos de propiedad de la tierra, la mano de obra y la incorporación parcial al mercado (Urioste y Kay 2005).

La Reforma Agraria por su orientación redistributiva provocó un aumento significativo de las UPA pero en medio de una ausencia notoria de políticas públicas simultáneas para apoyar su desarrollo y del área rural en general. Esta carencia condujo al fracaso del proceso en términos de alcanzar una mejora significativa y sostenida en los ingresos de las familias campesinas. Esta transformación de la sociedad rural también trajo consigo la formación del ‘campesinado’ boliviano en base a los ex trabajadores de las haciendas, todos ellos considerados hasta entonces como los indios de Bolivia que, en el contexto de planes de modernización y asimilación, pasaron a ser reconocidos y considerados campesinos trabajadores del agro.

En los años siguientes y hacia mediados de los sesenta, las tierras bajas fueron abiertas a proyectos de desarrollo nacional a través de programas de colonización para promover migraciones de campesinos del occidente hacia el oriente. Para ello el gobierno dispuso planes de dotación de tierras individuales de entre 20 y 50 hectáreas. En los años setenta surgieron procesos de colonización llamados migraciones campesinas ‘espontáneas’ al margen de los planes de colonización y, según algunos estudios, fueron más exitosas que los patrocinados por el Estado (Ibíd.). Todo esto permitió una mayor expansión de formas de agricultura campesina a pequeña escala.

Para el año 1984, las UPA alcanzaban a 314.600, según el segundo Censo Nacional Agropecuario (INE 2015). Sin embargo esta cifra no incluía unidades productivas de varias provincias del altiplano paceño y el Chapare de Cochabamba. Las estimaciones posteriores y en función a la población rural de las zonas faltantes,

permitieron establecer que habrían existido alrededor de 500.000 UPA a mediados de los años ochenta del siglo pasado. Esto significa que las unidades productivas se habrían multiplicado por cerca de seis veces entre 1950 y 1984, la mayor parte de ellas eran unidades familiares de tipo campesino. También el agro sufrió cambios importantes en cuanto a la distribución de la superficie en producción que a nivel de Bolivia alcanzaba un millón de hectáreas con un 65 por ciento de las mismas localizadas en las zonas tradicionales de altiplano y valles. El restante 35 por ciento de UPA estaban ubicadas en el oriente boliviano, fundamentalmente en Santa Cruz.

La introducción de la soya a mediados de la década de 1980 provocó la transformación más radical de la agricultura boliviana. Las oportunidades comerciales comenzaron en 1985 cuando el Estado boliviano adoptó el modelo de libre mercado, bajo el argumento de que –ante la crisis de la minería– la producción agrícola primaria para la exportación era una importante alternativa económica para el crecimiento económico del país (Colque 2014). Este proceso paulatinamente absorbió las agriculturas campesinas de las zonas de colonización cruceña que pasaron de la producción diversificada para el consumo directo, a la producción de oleaginosas para la agroindustria o el complejo sojero.

## **2.2 Número de unidades productivas agropecuarias**

Para el año 2013 de acuerdo con los informes preliminares del Censo Nacional Agropecuario (INE 2014b) se establece que en Bolivia existen 872.641 UPA, ocupando una superficie cultivada de 2.747.480 hectáreas. Aunque los datos solo establecen una desagregación departamental, se puede evidenciar que la mayor parte de éstas UPA corresponden a la agricultura familiar campesina y para ello basta constatar que el 80 por ciento se registra en las regiones de altiplano y valles. Según estos datos a nivel general el promedio de cultivos por UPA en estas zonas es de 2,36 hectáreas (Cuadro 3).

### Cuadro 3

#### Evolución de las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) y superficie cultivada

Año	1950			1984 <sup>2</sup>			2013		
Región <sup>1</sup>	Superficie ha	Número de UPA	Promedio UPA/ha	Superficie ha	Número de UPA	Promedio UPA/ha	Superficie ha	Número de UPA	Promedio UPA/ha
<i>Altiplano</i>	348.636	24.274	14,4	192.390	105.825	1,8	577.476	432.521	1,3
<i>Valles</i>	234.009	49.494	4,7	328.900	153.422	2,1	466.409	296.729	1,6
<i>Llanos</i>	71.613	12.609	5,7	338.437	55.353	6,1	1.703.595	143.391	11,9
<b>Bolivia</b>	<b>654.258</b>	<b>86.377</b>	<b>7,6</b>	<b>859.727</b>	<b>314.600</b>	<b>2,7</b>	<b>2.747.480</b>	<b>872.641</b>	<b>3,1</b>

<sup>1</sup> Es una división convencional de acuerdo a la predominancia de las ecoregiones en los departamentos, que no necesariamente refleja una estricta división agroproductiva.

<sup>2</sup> En 1984 no se registraron datos en el altiplano del departamento de La Paz y del Chapare de Cochabamba. De acuerdo a estimación de la población rural en este periodo se establecen alrededor de 500.000 UPA.

Fuente: INE, 2014b.

Aunque la mayor parte de las UPA de las tierras bajas son grandes propiedades, en esta región también existen agricultores familiares de base campesina. Tomando en cuenta información adicional, es posible señalar que los colonizadores de Santa Cruz y Beni integrarían a 25.000 unidades mientras que las unidades productivas agropecuarias en territorios indígenas de tierras bajas estarían compuestos por 20.000 familias. En suma y de forma preliminar, es posible señalar que a nivel Bolivia alrededor de 774.250 UPA tendrían características de pequeñas unidades agropecuarias de base campesina e indígena, esto representa el 88,7 por ciento del total de UPA. El restante 11,3 por ciento (98.391) serían unidades medianas y grandes de tipo empresarial.

Esta predominancia numérica de la agricultura campesina e indígena contrasta notablemente con su baja importancia en términos de superficie cultivada. Mientras la superficie cultivada en el altiplano y valles representa el 38 por ciento del total nacional, en estas dos regiones están situadas el 83,5 por ciento de UPA. Y al contrario, en el oriente, particularmente en Santa Cruz, la superficie cultivada es de 62 por ciento del total del país, la misma que es utilizada por el 16,4 por ciento del total de unidades productivas agropecuarias del país. Estos datos oficiales

obtenidos del CNA 2013, publicados por el INE en el mes de febrero de 2015, dan una aproximación actualizada que permite evidenciar la predominancia de la agricultura empresarial y de los cultivos comerciales en el sector agrícola del oriente del país.

### **3. La agricultura campesina e indígena dentro de las recientes transformaciones agrarias**

Para entender las recientes transformaciones agrarias y el papel de la agricultura campesina e indígena, en un primer punto examinamos la evolución del sector agrícola en general en un periodo de 20 años, desde 1990 hasta 2010. Seguidamente tratamos de establecer la relevancia de la agricultura campesina e indígena.

Es un hecho establecido que el sector agrícola en Bolivia está dominado por la agroindustria que ha desplazado a sectores tradicionales de la agricultura a pequeña escala a lo largo de los últimos 30 años. Las oportunidades comerciales para la agroindustria comenzaron en 1985 como parte de las nuevas políticas económicas para superar la caída de los precios de los minerales y la hiperinflación. Todo esto coincidió con los precios altos que propiciaron el crecimiento de las exportaciones de los productos agrícolas.

Para el año 1990, la superficie cultivada en Bolivia alcanzaba a 1.251.501 hectáreas, de las cuales el 46,1 por ciento correspondía a cereales y el 20,7 por ciento a oleaginosas y cultivos industriales. En contraste, los productos de origen campesino como los tubérculos y hortalizas tenían una participación de solo el 13, 4 por ciento y 5,9 por ciento respectivamente.

Para el año 2010 la superficie cultivada subió a 2.815.093 hectáreas, ello representa una variación porcentual de 125 respecto a 1990 y significa una evolución del sector agrícola en general con una ampliación de la frontera agrícola a un ritmo anual de 4,1 por ciento (78.000 ha por año), expansión que responde principalmente a la dinámica de la agricultura empresarial cruceña que creció en los últimos 20 años a razón de 61.000 ha/año (Cuadro 4).

**Cuadro 4**  
**Evolución de la superficie cultivada, producción y rendimiento**  
**entre 1990 y 2010**

Grupo	Oleaginosas industriales	Cereales	Tubérculos Raíces	Hortalizas	Frutales	Forrajes	Estimulantes	Total general	
<i>Superficie (ha)</i>	1990	258.794	577.209	167.781	65.955	74.249	80.015	27.498	1.251.501
		20,7%	46,1%	13,4%	5,3%	5,9%	6,4%	2,2%	100,0%
	2010	1.348.397	882.191	209.834	128.603	109.068	98.558	38.442	2.815.093
		47,9%	31,3%	7,5%	4,6%	3,9%	3,5%	1,4%	100,0%
	<b>Variación</b>	<b>421%</b>	<b>53%</b>	<b>25%</b>	<b>95%</b>	<b>47%</b>	<b>23%</b>	<b>40%</b>	<b>125%</b>
<i>Producción (TM)</i>	1990	3.403.790	686.495	934.591	176.386	612.745	247.389	22.487	6.083.883
		55,9%	11,3%	15,4%	2,9%	10,1%	4,1%	0,4%	100,0%
	2010	8.143.604	1.836.892	1.230.700	312.577	905.653	335.501	33.570	12.798.497
		63,6%	14,4%	9,6%	2,4%	7,1%	2,6%	0,3%	100,0%
	<b>Variación</b>	<b>139%</b>	<b>168%</b>	<b>32%</b>	<b>77%</b>	<b>48%</b>	<b>36%</b>	<b>49%</b>	<b>110%</b>
<i>Rendimiento (TM/ha)</i>	1990	13,2	1,2	5,6	2,7	8,3	3,1	0,8	4,9
	2010	6,0	2,1	5,9	2,4	8,3	3,4	0,9	4,5
	<b>Variación</b>	<b>-54,1%</b>	<b>75,1%</b>	<b>5,3%</b>	<b>-9,1%</b>	<b>0,6%</b>	<b>10,1%</b>	<b>6,8%</b>	<b>-6,5%</b>

Fuente: Elaboración propia en base a CAO 2012 e INE y MDRYT 2009.

Entre 1990 y 2010 destaca el abrupto crecimiento del rubro oleaginoso e industrial que cuadruplicó su área sembrada en solo 20 años (425 por ciento). Dentro de este rubro, la soya sin duda cobra mayor importancia con un crecimiento anual a una tasa de 10 por ciento, esto es aproximadamente 50 mil hectáreas por año. Estos cambios y tendencias han hecho que la soya se convierta en el principal cultivo de Bolivia, ocupando una tercera parte de la superficie cultivada a nivel nacional. Según algunas estimaciones, solo el 2 por ciento de los productores controlarían más de la mitad del área cultivada de soya mientras que la mayoría de los pequeños productores (78 por ciento) solo tendrían control sobre el 28 por ciento de la superficie cultivada. Asimismo, se estima que de las 1.821.153 hectáreas deforestadas en el periodo 1990 - 2010, el 53,7 por ciento corresponde a la agricultura mecanizada de Santa Cruz (Castañón 2014).

En este escenario los cultivos de origen familiar campesino han disminuido drásticamente su participación. Por ejemplo, el rubro de tubérculos solo representa el 13 por ciento del volumen a pesar de que tuvo un crecimiento de 25 por ciento en superficie. El rubro de estimulantes es el grupo que menor crecimiento tuvo, 1,4 por ciento.

El panorama de los volúmenes de producción plantea un escenario similar en cuanto a la supremacía del rubro de oleaginosas y cultivos industriales. En 1990 representaba el 55 por ciento de la oferta productiva y para el año 2010 subió a 63,6 por ciento, mientras que la participación de tubérculos bajó del 13, 4 por ciento a 9 por ciento en todo el país.

No obstante el crecimiento significativo de la superficie agrícola, llama la atención que sea bastante menor el ritmo de crecimiento de los volúmenes de producción agropecuaria en general. Mientras que en Bolivia la superficie cultivada creció en 421 por ciento, el volumen de producción creció solo en 139 por ciento. Esto se refleja en una notable baja en los rendimientos en promedio de la agropecuaria nacional, de 13,9 TM/ha en 1990 a 6,9 TM/ha para el año 2010. No se observan mejoras significativas en la productividad agrícola sino que una parte importante del crecimiento del sector agrario ocurre a costa de la expansión de la frontera agrícola que, además, está estrechamente asociado a la creciente tala de bosques a un promedio de 200.000 hectáreas por año, que es tres veces mayor que el crecimiento de la frontera agrícola (Müller, Pacheco y Montero 2014).

### **3.1. Diversidad de agriculturas campesinas e indígenas**

Como hemos visto, la agricultura campesina e indígena tiene importancia numérica y demográfica pero en términos productivos y de tierras cultivadas su participación es baja y tiende a disminuir. Al interior de este sector que hemos llamado agricultura campesina e indígena, existen ciertas diferencias y categorías que se pueden identificar según el tamaño de la unidad y el acceso a la tierra, los grados de relación con el mercado, su ubicación geográfica, los sistemas agroproductivos, entre otros elementos. Aunque este punto

es objeto de discusión detenida en el capítulo que sigue, aquí vamos a adelantar la caracterización de al menos dos segmentos en función de tipos de cultivos, tamaño de superficie cultivada por cada unidad productiva y en base a la información de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2008 (INE y MDRYT 2009).

En primer lugar está la agricultura de campesinos e indígenas orientada a la subsistencia y autoabastecimiento. Son agricultores que cultivan a pequeña escala (de 0 a 1,5 hectáreas de tierras por unidad familiar), en múltiples parcelas y a base de fuerza de trabajo familiar y eventualmente trabajo adicional a través de mecanismos sociales de colaboración entre campesinos. Esta agricultura es desarrollada principalmente por campesinos que habitan las regiones del occidente del país donde se concentra la mayor parte de la población quechua y aymara. También es el sector donde la pobreza es más acentuada como se explicó líneas arriba. Se caracteriza por utilizar tecnología tradicional, producción de alimentos de volúmenes reducidos y dirigida mayormente al mercado local y para el consumo de subsistencia (Medeiros 2009).

La agricultura de subsistencia también es practicada por los indígenas de tierras bajas que mediante sistemas manuales de roza-que-que-tumba habilitan nuevos “chacos” o pequeñas parcelas donde cultivan arroz, yuca, plátano y algunas plantas frutales.

Según los datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (2008), la superficie total que cubriría la agricultura de subsistencia alcanzaría las 758 mil hectáreas, representando el 27 por ciento del total de la superficie cultivada del país. Asimismo, en términos de volumen la producción alcanzaría a 2.846.428 TM, lo que equivale al 22 por ciento del volumen total producido en Bolivia. El número de unidades productivas involucradas en este segmento es aproximadamente de 780 mil.

La papa es uno de los productos emblemáticos de la agricultura campesina e indígena de occidente pero las tasas de participación no son muy alentadoras. Este cultivo representa apenas el 6 por

ciento de la superficie nacional y el 7,6 por ciento de la producción total y está concentrada principalmente en las zonas de altiplano y valles.

En segundo lugar estaría el segmento de la agricultura campesina e indígena de tipo mercantil. Nos referimos a aquellas unidades que tienen una superficie cultivada entre 1,5 y 50 hectáreas. Dado que la fuerza laboral familiar es insuficiente, a menudo estas propiedades son trabajadas en base a maquinaria agrícola y la mayor parte de la producción tiene fines mercantiles.

En este segmento predominan los cultivos de arroz, quinua, sorgo, algunas frutas como la piña, el banano y hortalizas. El cacao, el café y las uvas, si bien pueden tener superficies menores a las 1,5 hectáreas, su producción final se destina en su mayor parte al mercado. Por su parte, la quinua –un producto tradicional y de consumo interno– en los últimos años se ha convertido en un cultivo mercantil para la exportación. También podemos incluir en este grupo cultivos como el sésamo, sorgo y algodón que tienen una fuerte orientación a la industria y hasta podrían considerarse como parte de la producción a gran escala, de acuerdo a los datos disponibles, aunque cerca del 90 por ciento de este tipo de cultivos se realizan en superficies menores a 50 hectáreas.

En términos de superficie se puede estimar que la agricultura familiar mercantil ocupa alrededor de 746.631 ha, lo que representa el 26 por ciento de la superficie total a escala nacional. En cuanto a volúmenes, la producción alcanza 1.832.290 TM lo que representa el 14 por ciento de la producción agrícola nacional (Cuadro 5).

Siguiendo los datos y estimaciones de la ENA (2008), los productores mercantiles integrarían el 7 por ciento de todas las UPA y estarían mayormente situados en las zonas de colonización. Extrapolando este dato con el número total de UPA identificadas en el CNA del año 2013, se puede señalar que existirían alrededor de 61.000 unidades productivas agropecuarias con características de agricultura campesina e indígena de tipo mercantil.

**Cuadro 5**  
**Superficie y producción de cultivos por tipo de agricultura (2010)**

Tipo	Cultivos	Superficie		Producción	
		ha	Porcentaje	TM	Porcentaje
Agricultura de subsistencia	<i>Papa</i>	180.416	6,4	975.418	7,6
	<i>Trigo</i>	176.458	6,3	255.356	2,0
	<i>Forrajes</i>	98.558	3,5	335.501	2,6
	<i>Cebada en grano</i>	56.620	2,0	47.604	0,4
	<i>Frijol</i>	56.522	2,0	67.670	0,5
	<i>Cítricos</i>	40.810	1,4	300.904	2,4
	<i>Plátanos</i>	36.495	1,3	338.901	2,6
	<i>Haba</i>	33.575	1,2	58.609	0,5
	<i>Yuca</i>	29.418	1,0	255.282	2,0
	<i>Hortalizas</i>	15.006	0,5	22.720	0,2
	<i>Maní</i>	12.432	0,4	13.439	0,1
	<i>Cebolla</i>	9.360	0,3	81.048	0,6
	<i>Frutas</i>	5.926	0,2	33.636	0,3
	<i>Tomate</i>	5.062	0,2	53.062	0,4
<i>Ajo</i>	1.539	0,1	7.278	0,1	
	<b>Subtotal</b>	<b>758.197</b>	<b>26,9</b>	<b>2.846.428</b>	<b>22,2</b>
Agricultura familiar mercantil	<i>Maíz en grano</i>	314.292	11,2	718.014	5,6
	<i>Arroz con cáscara</i>	193.843	6,9	449.482	3,5
	<i>Sorgo</i>	87.032	3,1	335.536	2,6
	<i>Quinua</i>	53.946	1,9	30.900	0,2
	<i>Café</i>	29.815	1,1	28.918	0,2
	<i>Sésamo</i>	25.000	0,9	10.000	0,1
	<i>Bananos</i>	17.492	0,6	158.178	1,2
	<i>Cacao</i>	8.627	0,3	4.652	0,0
	<i>Hortalizas</i>	7.539	0,3	22.190	0,2
	<i>Uva</i>	4.262	0,2	25.048	0,2
	<i>Frutas</i>	4.083	0,1	48.986	0,4
<i>Algodón</i>	700	0,0	386	0,0	
	<b>Subtotal</b>	<b>746.631</b>	<b>26,5</b>	<b>1.832.290</b>	<b>14,3</b>
Agricultura empresarial	<i>Soya (soja)</i>	922.115	32,8	1.917.150	15,0
	<i>Girasol</i>	235.434	8,4	310.841	2,4
	<i>Caña de azúcar</i>	152.716	5,4	5.891.788	46,0
	<b>Subtotal</b>	<b>1.310.265</b>	<b>46,5</b>	<b>8.119.779</b>	<b>63,4</b>
	<b>Total general</b>	<b>2.815.093</b>	<b>100,0</b>	<b>12.798.497</b>	<b>100,0</b>

Fuente: elaboración propia en base a INE 2008 y CAO 2012.

### 3.2. La agricultura campesina e indígena según regiones

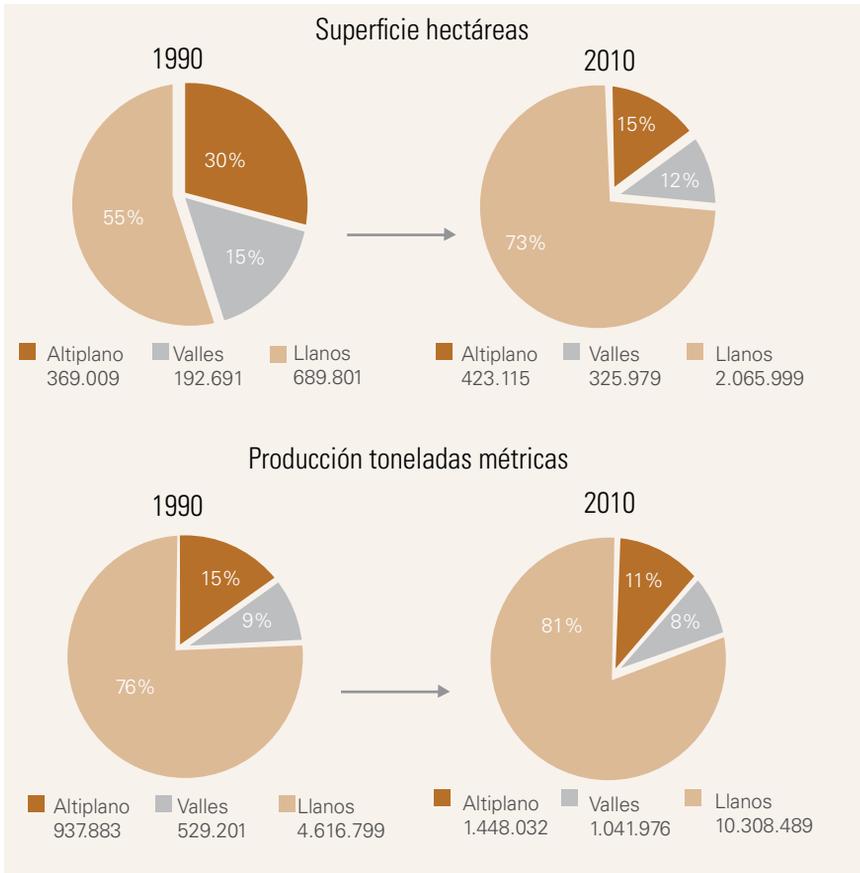
Según los datos presentados en este capítulo, podemos concluir que la agricultura boliviana tiende a concentrarse en el oriente boliviano y particularmente en Santa Cruz. Esto significa que el agro de tierras altas pierde peso en cuanto a participación ya sea en términos de superficie cultivada o volúmenes de producción, tanto en cifras absolutas como relativas. Por ejemplo, los cultivos del altiplano representaban el 30 por ciento de la superficie cultivada en el año 1990 pero su aporte disminuyó hasta 15 por ciento para el año 2010. Si bien existe un ligero crecimiento de la frontera agrícola andina explicado mayormente por la expansión de la quinua en la región del Salar, está claro que el altiplano tiende a perder protagonismo en la agricultura y por tanto disminuye su rol de proveedor de alimentos. La evolución en cuanto a la producción también muestra esta tendencia ya que para el año 2010 la participación del altiplano solo alcanzaría al 11 por ciento de la producción agrícola nacional (Gráfico 3).

Los cultivos de la región de valles interandinos (incluyendo los Yungas) tienen un comportamiento que no cambia sustancialmente en el tiempo. Aunque en esta región los cultivos tienen un leve crecimiento en extensión o superficie y volúmenes de producción, su representatividad en el contexto agrícola parece mantenerse alrededor del 15 por ciento de la superficie cultivada en todo el país y alrededor del 9 por ciento en términos de producción, durante las dos últimas décadas.

En resumen, la agricultura campesina tradicional de los valles y altiplano va perdiendo su peso porcentual porque la tendencia en su crecimiento es mucho más lenta en relación al sector agropecuario empresarial. Esto ocurre a pesar de políticas sectoriales (agropecuarias) recientes que son proactivas en favor de la agricultura campesina e indígena (seguro agrícola, tractorización, derechos propietarios actualizados sobre la tierra, agroquímicos, compras estatales y otros subsidios). Estos programas no son suficientes para contrarrestar políticas públicas macroeconómicas de carácter estructural

que condicionan la expansión del gasto en consumo de alimentos vía importaciones.

**Gráfico 3**  
**Evolución de la superficie y producción agrícola por macro regiones 1990-2010**



Fuente: elaboración propia en base a CAO 2012.

## 4. Exportación e importación de alimentos

La producción agroindustrial está destinada mayormente a la exportación y solo una parte al consumo nacional. El mercado interno es pequeño por el relativo escaso número de habitantes en Bolivia (10 millones). Pero las exportaciones sobre todo responden a la demanda global por materias primas agrícolas y de países emergentes como China, India o Brasil.

Según varias fuentes, las importaciones de alimentos al menos se habrían triplicado en los últimos 10 años. Los volúmenes de importación se incrementaron a una tasa más bien cercana a la mitad del cambio en valor. Esto significa que los productos importados se internan a precios cada vez más elevados.

Lo señalado muestra que el comercio exterior en el sector agrario se caracteriza por la exportación de productos primarios o semiprocesados al exterior que se utilizan como insumos para la industria de alimentos e industria en general de los países que tienen mayor grado de desarrollo. En contrapartida, Bolivia importa cada vez mayores volúmenes de alimentos procesados o de consumo final a precios también crecientes.

### 4.1 Exportaciones agroalimentarias

Las exportaciones están dominadas por productos agroindustriales como la soya, girasol, azúcar y derivados que en conjunto y a lo largo de los últimos años (2006-2013) han copado el 68 por ciento del total de las exportaciones agroalimentarias. La exportación de estos productos ha crecido a una tasa anual de 20 por ciento. Las exportaciones también están compuestas por productos provenientes de la pequeña agricultura o agricultura campesina e indígena de tipo mercantil. Los principales productos son el cacao, café y quinua. En el mismo periodo (2006-2013) estos productos han representado el 29 por ciento del total de exportaciones del sector agropecuario. Existe un grupo menor de

productos de origen industrial como los fideos y otros preparados alimenticios que representan tan solo el 3 por ciento del valor total de las exportaciones agroalimentarias.

La quinua es un producto excepcional que proviene de la agricultura campesina e indígena. En el periodo 2003-2013 tuvo un crecimiento espectacular en cuanto a exportaciones: en valor creció 26 veces y en volumen 9 veces. Los precios internacionales se incrementaron de forma sostenida alcanzando 2.300 dólares americanos por tonelada, esto significa que tiene un valor tres veces mayor que la soya. Este crecimiento ha generado cambios sustanciales en la vida de los productores, incluyendo conflictos al interior y entre comunidades por el acceso a la tierra. La frontera agrícola para la producción de quinua se amplió significativamente (de 45 a 132 mil hectáreas entre 2005 y 2013) pero también ocasiona problemas ambientales por desertificación de los suelos así como por la reducción de los periodos de descanso de los terrenos cultivados.

En el Cuadro 6 se muestra el incremento del valor de las exportaciones de productos agrícolas según sectores para el periodo 2006-2013.

**Cuadro 6**  
**Valor de las xportaciones agroalimentarias en dólares**

Origen	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Agroindustria</i>	214.856	290.569	451.945	446.868	408.996	392.689	615.874	845.506
<i>Agricultura mercantil</i>	108.282	118.651	143.512	151.113	192.598	265.843	276.100	333.827
<i>Otros alimentos</i>	11.332	14.214	12.018	12.564	22.816	22.385	31.739	50.777
<b>Total</b>	<b>334.470</b>	<b>423.433</b>	<b>607.475</b>	<b>610.545</b>	<b>624.411</b>	<b>680.917</b>	<b>923.712</b>	<b>1.230.110</b>

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE 2015.

## 4.2 Importación de alimentos y desplazamientos de agriculturas campesinas

Las crecientes importaciones de alimentos en parte se deben al déficit persistente en la producción nacional de algunos productos de primera importancia como el trigo, pero su crecimiento también obedece a procesos de desplazamiento de la producción nacional por alimentos importados así como el aumento en el consumo de alimentos procesados o industrializados por la población boliviana. No se deben perder de vista las importaciones vía contrabando de al menos 30 alimentos frescos que compiten con la producción de la agricultura familiar campesina indígena (cebolla, papa, tomate, frutas, etc.) y otros productos elaborados (aceite, enlatados, bebidas, etc.) que ingresan por distintos puntos fronterizos del país.

Las importaciones del rubro ‘alimentos y bebidas’ se triplicaron desde los 227 a 741 millones de dólares entre 2005 y 2014, esto quiere decir que mientras en 2005 se importaba a razón de 22 dólares por persona para 2014 esta relación se incrementó tres veces más a razón de 70 dólares por persona (INE 2015).

Si analizamos las importaciones considerado únicamente los ítems del Cuadro 7 directamente relacionados con alimentación –excluyendo alcohol y otros– los datos muestran que en términos de valor las importaciones se han incrementado en un 219 por ciento en un periodo de diez años, de 227 millones de dólares el año 2005 a 723 millones de dólares para el año 2014. Los rubros en cuestión representan alrededor del 9 por ciento del total de las importaciones de Bolivia.

Como se aprecia en el Cuadro 7, se registró un incremento de volumen del 27 por ciento, por tanto, el mayor valor se explica principalmente por la elevación de los precios de los productos antes que por el aumento en la cantidad importada.

Es notable que los alimentos elaborados –productos alimenticios imperoederos para el consumo directo– que normalmente se venden

en los supermercados y almacenes, tienen niveles de crecimiento muy importantes, 298 por ciento entre 2005 y 2014; en este último año representaron el 60 por ciento de las importaciones de alimentos y su valor alcanzó a 430 millones de dólares. Este dato revela cambios importantes en los patrones de consumo en la población boliviana, entendiendo que alguna parte de la población ha mejorado sus ingresos y tiende a incorporar otros alimentos en su dieta.

**Cuadro 7**  
**Importación de alimentos en Bolivia (2005-2014)**

Descripción	Valor CIF			Peso		
	Millones de dólares			Millones de Toneladas		
	2005	2014	Variación	2005	2014	Variación
<i>Alimentos elaborados</i>	108,0	430,2	298,2%	223,2	373,4	67,3%
<i>Cereales</i>	39,6	154,9	291,2%	216,8	307,7	42,0%
<i>Alimento de origen vegetal</i>	41,7	42,2	1,0%	174,4	102,2	-41,4%
<i>Azúcares</i>	12,4	36,0	189,7%	18,7	21,4	14,2%
<i>Leche</i>	18,4	27,5	49,7%	13,1	11,7	-10,5%
<i>Aceites</i>	2,8	14,2	400,2%	4,6	11,1	138,3%
<i>Carnes y pescados</i>	1,9	12,7	571,7%	6,8	8,7	27,8%
<i>Animales vivos</i>	2,1	5,7	171,0%	0,1	0,2	137,4%
<b>Total</b>	<b>227,0</b>	<b>723,3</b>	<b>218,7%</b>	<b>657,7</b>	<b>836,4</b>	<b>27,2%</b>

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE 2015.

El rubro de cereales (trigo, harina de trigo además de maíz, otros cereales y sus derivados) es el segundo en importancia en términos de valor sobre el total de importaciones. En el periodo 2005-2014 tuvo un incremento de 291 por ciento y para el año 2014 alcanzó en valor 155 millones de dólares.

## Conclusión

En este primer capítulo hemos presentado los principales rasgos de la agricultura campesina e indígena en Bolivia dentro del contexto global de la agropecuaria nacional. El propósito ha sido establecer

un marco general de referencia para la discusión e interpretación de las dinámicas locales, diferenciaciones internas y el rol que desempeñan para la seguridad y soberanía alimentaria.

Hemos visto que la población rural involucrada en la agricultura campesina e indígena todavía representa un tercio de la población boliviana, aunque seguirá disminuyendo en porcentaje respecto del total de la población nacional. Esto en términos absolutos alcanza a 3.271 millones de personas. El crecimiento poblacional es muy bajo en este sector desde hace tres décadas. Son pequeños agricultores parcelarios, ganaderos a pequeña escala y algunas comunidades indígenas que aún viven de la recolección y aprovechamiento de los recursos del bosque. Aunque algunos se sienten más cómodos con la definición de campesinos y originarios, toda esta población tiene en común su origen indígena. Los indicadores socioeconómicos y de pobreza evidencian que si bien hubo avances positivos e importantes en la vida rural, aún es el sector donde se concentra la pobreza y marginalidad y esto es más notorio si se compara con las zonas urbanas.

En términos de estructura agraria también hemos evidenciado el crecimiento permanente de las unidades productivas agropecuarias. Esto ocurre desde una situación inicial a partir de la Reforma Agraria de 1953, cuando se censaron menos de 80 mil UPA y todas concentradas en tierras altas (altiplano y valles), hasta la situación más reciente de la emergencia de unidades productivas de importancia en las tierras bajas y particularmente en Santa Cruz. Por supuesto, no son unidades productivas homogéneas en términos de tamaño, tierras cultivadas, ni en la producción y rendimientos, sino que el sector agrario boliviano es fundamentalmente dual, pero no de dos fuerzas equiparables o equivalentes. Lo más llamativo es que dentro de lo que hemos denominado agricultura campesina e indígena también existen procesos de diferenciación interna de modo que nuestra percepción de un mundo rural homogéneo está en duda. Este tema es motivo de discusión en el capítulo que sigue.

Por último, hemos destacado algunos datos y tendencias en el comercio exterior de productos agropecuarios. Los datos confirman

una de las características del agro boliviano y su inserción en el mercado global: nuestra condición de productores de materias primas agrícolas de exportación e importadores crecientes de alimentos procesados, cereales e incluso alimentos de origen campesino e indígena. Las exportaciones dependen por supuesto de precios internacionales crecientes pero también volátiles, mientras que la mayor importación de alimentos significa una mayor inseguridad alimentaria y deterioro de la capacidad productiva del sector agrario nacional.



## Capítulo 2

# Cambios en las dinámicas y estrategias locales de la agricultura campesina indígena

### Introducción

Como hemos analizado detalladamente en el capítulo anterior, en Bolivia, en los últimos años, pero particularmente durante la última década han ocurrido importantes transformaciones en la agricultura familiar de base campesina. Por un lado, todavía subsisten numerosos agricultores dedicados a producir variados pero insuficientes alimentos para su consumo, son los más pobres, habitan las regiones más alejadas y emigran temporalmente para desempeñar actividades no agrícolas que complementen sus magros ingresos. Son agricultores a medio tiempo. Por otro lado –aunque todavía son la minoría– cada vez más agricultores familiares se están especializando, dejando atrás su tradicional característica de campesinos de subsistencia y se están convirtiendo en pequeños productores de mercancías – alimentos. Algunos, los productores más consolidados, producen *commodities* para exportación y se articulan con el agronegocio planetario (Fundación TIERRA 2013).

El campesinado que décadas atrás era una clase social homogénea, unida y movilizada por la reivindicación histórica de recuperar sus tierras y autogobierno local, hoy está sobrellevando importantes transformaciones en el plano económico aunque dentro de los márgenes limitados y determinados por el peculiar y atrasado capitalismo extractivista. La gran mayoría de los campesinos de altiplano, valles y llanos tienen una propiedad privada consolidada sobre sus parcelas muchas veces en el marco de la propiedad colectiva de sus comunidades, pero las decisiones económicas y de uso del suelo (producción de alimentos) no son comunitarias, sino familiares.

Antes el sindicato o el *ayllu* era la institución de representación y organización política y socioeconómica central, pero ahora las decisiones colectivas sobre qué y cómo producir están siendo desplazadas por iniciativas más bien de tipo individual o grupal (pequeñas asociaciones o cooperativas, emprendimientos de familias extendidas). Esto ocurre simultáneamente a un lento nucleamiento poblacional en pueblos o ciudades intermedias donde es posible acceder a algunos servicios (salud, educación, transporte) y desempeñar algunas actividades extraprediales (no agropecuarias) que generan ingresos monetarios adicionales (comercio, talleres artesanales, pequeñas pensiones o restaurantes, choferes). La “multiresidencia” y la “pluriactividad” son una característica generalizada de la población rural. Solo los productores de *commodities* o de cultivos especializados rentables, son agricultores a tiempo completo. El resto, la mayoría de los campesinos, son agricultores a medio tiempo y muchos de ellos viven atrapados en la pobreza (Ibíd.).

Estas diferencias entre campesinos han surgido como efecto de la generalizada expansión de las relaciones mercantiles en casi todo el territorio nacional, pero provocando cambios en distintos grados según los contextos geográficos, ambientales y espaciales de cada territorio específico, su potencial productivo, su cercanía o lejanía con los mercados, su acceso o no a sistemas de riego, la productividad de los suelos y las características del clima. Así el impacto llega a todos los rincones pero no afecta de igual manera a todos. Por eso es que ahora en Bolivia no se puede hablar del campesinado como un sector homogéneo.

En base a información primaria de cinco estudios de caso<sup>1</sup>, observación e información secundaria, en esta sección se analiza los distintos tipos de producción campesina y comportamientos económicos

---

1 Los años 2012 y 2013 la Fundación TIERRA estudió los comportamientos de diversos tipos de unidades de producción agropecuaria en cinco municipios ubicados en altiplano, valles, llanos y yungas. El estudio no pretendía ninguna representatividad estadística, aunque sí observar tendencias en los comportamientos de las unidades familiares en relación a sus hábitos de consumo de alimentos, el origen de los mismos y sus relaciones con el mercado.

de cada grupo de pequeños productores rurales agropecuarios. Es decir, se busca descomponer lo que todavía se conoce como agricultura familiar de base campesina. Se resaltan las racionalidades y potencialidades cambiantes de los distintos tipos de productores familiares en las últimas décadas, en función de su mayor o menor inserción en las relaciones mercantiles, determinadas por su dotación de factores productivos especialmente tierra y agua, la distancia a los mercados y centros de consumo, pero especialmente por el nivel de precios que rige en cada situación y contexto. En este capítulo se debate sobre los contenidos conceptuales y los efectos materiales de los procesos de descampesinización y mercantilización (Bernstein 2010)<sup>2</sup>, dominantes en el área rural de Bolivia en las últimas décadas, en un contexto de creciente hegemonía del agronegocio en las regiones de tierras bajas del oriente, que –junto a otros factores– ha inhibido las capacidades y potencialidades de producción de alimentos de las economías campesinas.

A pesar de la puesta en marcha de algunas políticas públicas de desarrollo rural y de seguridad jurídica en el acceso a la tierra, los campesinos y agricultores familiares están siendo desplazados del escenario como los principales productores de alimentos, algo que ocurría hasta mediados de los años 80 del siglo pasado<sup>3</sup>. Se discute sobre los conceptos de campesino (clase), indígena (etnia), agricultura familiar (escala productiva), y seguridad y soberanía alimentaria en tiempos de cambio en el agro boliviano. Son épocas en que miles de campesinos abandonan el campo pero sin la certeza de engrosar las filas de la clase obrera o del proletariado. Los migran-

- 
- 2 Henry Bernstein es conocido por sus aportes desde el marxismo al estudio de los complejos procesos de descampesinización de grandes mayorías rurales en todo el mundo, como efecto de los acelerados procesos de mercantilización de las economías campesinas, dentro de los marcos del capitalismo globalizado.
  - 3 El DS 21060 (de estabilización monetaria) promulgado el año 1985, entre otras cosas, dispuso la libre importación de alimentos. Desde entonces la economía boliviana es una de las más ‘abiertas’ de la región y la internación de alimentos desde casi todos los países vecinos (vía importaciones y contrabando), compete con la producción interna. Al mismo tiempo, los índices de rendimientos y de productividad agrícola de Bolivia continúan siendo los más bajos de América Latina.

tes constituyen la base de un vasto y difuso sector informal de autoempleados urbano-rurales en condiciones muy precarias e inciertas.

En la última década (2006–2014), los extraordinarios ingresos públicos por las exportaciones del gas –que multiplicaron por tres las rentas nacionales– habrían conducido a una distribución ‘consumista’ y no verdaderamente productiva de esos recursos, desalentando así la actividad agropecuaria de las familias rurales. En el mismo periodo de tiempo, en un contexto de extraordinarios ingresos fiscales, transferencias sociales al área rural, y debido al aumento notable de la capacidad de gasto de las familias de todo el país, se han producido fuertes presiones inflacionarias especialmente en la canasta básica de alimentos. Estas presiones han logrado ser frenadas a costa de crecientes importaciones de alimentos, que compiten ventajosamente en precios y calidad y desplazan la producción nacional.

Así, paradójicamente, el significativo aumento de dinero circulando en el país incluida el área rural –comparativamente con décadas anteriores– estaría conduciendo a un efecto no deseado pero no por ello menos real: el debilitamiento del aporte de la agricultura campesina a la seguridad alimentaria, contrariamente a lo buscado por las políticas públicas que la promueven. En efecto, en el campo ha aumentado el nivel de consumo de alimentos (y otros bienes y servicios) pero no ha crecido en la misma proporción la producción de alimentos (Fundación TIERRA 2013). Dadas las múltiples necesidades insatisfechas de las poblaciones rurales, muchos campesinos pobres habrían priorizado aumentos en su consumo inmediato (propensión al consumo de los pobres) mediante la compra de alimentos (y otros bienes), antes que mayores inversiones productivas agropecuarias en sus predios.

## **1. Principales rasgos y transformaciones en la agricultura de base campesina**

Son varios los estudios, antiguos y recientes, que revelan el creciente protagonismo político de los pueblos indígenas en la construcción

de un nuevo imaginario social de la Bolivia plurinacional, especialmente en el plano simbólico, al extremo de que ahora se habla de su manipulación política y fetichización. Aunque con diferentes aproximaciones y desde distintas trincheras políticas, varios autores (Ayo 2014, Cortez 2014, Mansilla 2014, Rivera 2014, Spedding 2011) coinciden en señalar que en la última década desde el gobierno se ha construido un discurso que usa las identidades y reivindicaciones de los indígenas para legitimar políticas públicas y acciones estatales que en muchos casos son contrarias a las reivindicaciones de autogobierno de esos pueblos plasmadas en la CPE (2009). Sin embargo, son pocos los trabajos de investigación que en Bolivia han puesto énfasis en el conocimiento más o menos actualizado sobre las transformaciones económicas que están ocurriendo entre los actores de la agricultura boliviana de base campesina (Ormachea 2009, Pérez 2008, Prudencio 2009 y 2013). Esto es así en parte porque uno de los impedimentos para abordar el análisis de los cambios recientes es la falta de estadísticas confiables no solo del sector agrario, sino en general del conjunto de las variables económicas nacionales. La información del Censo Nacional Agropecuario (CNA) del año 1984 sigue siendo la única disponible. Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística (INE) realizó el Censo Nacional Agropecuario 2013 pero a más de un año de su realización, no ha concluido el procesamiento y entrega de datos finales. Estas limitaciones complican la tarea de construir asertos más o menos claros sobre las dinámicas económicas de las familias del campo, por ejemplo, para verificar en qué grado la actividad agropecuaria de base campesina está estancada o declina desde hace varios años, como hemos analizado en el capítulo anterior<sup>4</sup>.

---

4 Varias consideraciones incluidas en este capítulo deben ser entendidas como conclusiones preliminares que aún requieren estudios de mayor alcance. Se trata de una mirada crítica y reflexiva que pretende poner en debate nuestras propias visiones idílicas respecto del rol histórico de los campesinos en la producción de alimentos para el conjunto de la sociedad en Bolivia. Así como se puede hablar de una comunidad imaginada, también se puede hablar de la construcción teórica del campesinado como la clase social y el tipo de agricultor que –después de la Reforma Agraria de 1953– garantizaría la producción de alimentos para la sociedad, negando la creciente hegemonía de la agricultura empresarial de escala del oriente, que –basada en las exportaciones– ha logrado, en apenas tres décadas y en un contexto neoliberal acompañado de diversos subsidios ampliamente favorables,

A pesar de estas limitaciones, a partir de la revisión de estudios parciales sobre los cambios ocurridos en los últimos treinta años, es posible señalar que la ruralidad agropecuaria de Bolivia estaría caracterizada por los siguientes factores:

### 1.1 Cambios en los patrones de consumo de alimentos

Posiblemente la constatación más importante es que estamos presenciando una creciente homogenización de la dieta alimenticia rural a base de alimentos comprados de la agroindustria en casi todas las latitudes y tipos de agricultores familiares, ya sean campesinos, colonizadores o indígenas –de altiplano, valles o llanos amazónicos– todos ellos compran muchos de los alimentos (no los producen) que consumen cotidianamente, que además, provienen mayormente de la agroindustria del oriente que durante la última década habría conquistado los mercados nacionales, incluidos los rurales<sup>5</sup>.

---

cubrir la mayor parte de las necesidades de alimentación de la población. Esto no quiere decir que la agricultura familiar no tenga un enorme potencial para generar empleo, alimentos y sobre todo de hacerlo dentro de un modelo mucho más amigable ambiental y socialmente, sino que durante décadas se han aplicado políticas públicas anticampesinas que han acabado privilegiando el fortalecimiento del modelo empresarial de gran escala, para decirlo de alguna manera. Sin embargo, luego de casi un decenio de gestión gubernamental declaradamente pro indígena y pro campesino (2006–2014), las renovadas políticas públicas de desarrollo rural todavía no han tenido el efecto deseado de revertir esa tendencia, el campesinado ha continuado debilitándose como clase social y el aporte de los agricultores familiares tampoco ha aumentado significativamente. Al contrario, dentro de un contexto de creciente globalización y bajo la directa influencia de la expansión del agronegocio brasileiro, la agropecuaria boliviana del oriente basada en la empresa a gran escala ha continuado creciendo y ha desplazado a la agricultura familiar de base campesina de su rol imaginado de principal proveedor de alimentos. No se trata de volver a antiguos debates ideológicos sobre el rol histórico de los campesinos, sino principalmente, de tener la capacidad de leer la realidad como es, antes que interpretarla como quisiéramos que sea. Nuestra tarea es analizar por qué ocurre este estancamiento productivo de base campesina y entender las consecuencias. A partir de ello, nos corresponde también estudiar con mayor profundidad y detenimiento los verdaderos alcances y potencialidades de esa agricultura campesina.

5 Colque (2014, 14, 23) afirma que “el papel de la pequeña agricultura para la seguridad y soberanía alimentaria se está reconfigurando y de forma

Al mismo tiempo se expanden rápidamente los supermercados en las ciudades, que sin embargo no logran aún desplazar los tradicionales mercados o tambos de alimentos de origen campesino. A pesar de ello, en estos tambos y mercados tradicionales la agroindustria he encontrado la manera de colocar sus productos (arroz, fideo, harinas, aceites, refrescos, azúcar, pollos) lo cual influye en cambios recientes en la dieta rural<sup>6</sup>.

De esta manera Bolivia no sería más la excepción en la región latinoamericana en el sentido de que fuera un país en el que se mantienen, perviven o subsisten formas de organización socioeconómica y de consumo de alimentos propios de comunidades y sociedades tradicionales precolombinas basadas en el Vivir Bien<sup>7</sup>. A la luz del

---

visible debido a las recientes y rápidas transformaciones agrarias orientadas a la consolidación de un modelo de agricultura comercial a gran escala que principalmente produce materia prima de exportación y secundariamente alimentos para el mercado nacional"...“ante esta realidad nacional, es problemático sostener que los pequeños propietarios –objeto de nuestro estudio– cumplen una función social preponderante en calidad de productores de alimentos para su propia seguridad alimentaria y menos aún para la seguridad alimentaria nacional”.

- 6 Según información recolectada del sector agro empresarial, pese al rápido crecimiento en la facturación de los supermercados durante la última década, Bolivia continúa siendo el país con menos proporción de oferta alimenticia proveniente de supermercados en relación con el consumo total de alimentos. Mientras en países vecinos como Perú, Ecuador o Colombia la proporción del mercado de alimentos que se comercializa por esa vía bordearía entre el 60 y 70 por ciento, en Bolivia esa cifra no llegaría al 15 por ciento. Es decir que en nuestro país un 85 por ciento de los alimentos consumidos se comercializan todavía de manera habitual en mercados tradicionales. Del total de alimentos que comercializan los supermercados, aquellos que provienen de la agricultura familiar no llegarían ni al 3 por ciento, y se concentran en frutas, verduras y hortalizas, además de papa y yuca. La mitad de estos alimentos son productos procesados y enlatados, la mayoría provenientes del exterior. En nuestro país hay todavía una muy débil capacidad de transformación agroindustrial de alimentos, aunque se observan notables avances en embutidos, quesos, yogures, mermeladas, vinos, singanis y cervezas de muy alta calidad.
- 7 El Vivir Bien es una filosofía de vida que proclama la armonía con la naturaleza, el cuidado del medio ambiente, la solidaridad comunitaria y la cooperación mutua, el apego a valores proclamados por los portavoces de los pueblos

avance significativo de la economía de mercado en los últimos años en Bolivia, ese paradigma parece estar –por el contrario– cada vez más lejano de la realidad, aunque no por ello dejaría de ser una aspiración a alcanzar<sup>8</sup>.

## 1.2 Sostenidos flujos migratorios y desplazamientos espaciales

Como se ha mostrado en el capítulo anterior, desde hace varias décadas hay una sostenida migración campo-ciudad que ha conducido a un estancamiento de la densidad poblacional rural –y en algunos lugares una disminución– y a drásticos cambios poblacionales por regiones y tipos de actividad<sup>9</sup>. Tan acelerado es este proceso en la región alto andina, que los poblados rurales se disputan entre ellos para afiliar más personas a sus comunidades e incluso se prestan niños para registrarlos en las escuelas y compensar (ocultar) así su disminución poblacional para no perder plazas (ítems) del Ministerio de Educación, ni las rentas públicas de asignación local según el número de habitantes, como la coparticipación tributaria per cápita en los municipios. Los líderes comunales son muy conscientes de ello, saben que –en muchos casos– sus comunidades se están debilitando por falta de población activa, estable y productiva. Por eso aumentan multas y castigos para

---

indígenas originarios, antes que el consumismo materialista resultante del desarrollo capitalista extractivista (*Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien – Lineamientos Estratégicos*. Obtenido de <http://www.planificacion.gob.bo/sites/folders/documentos/plan.pdf>).

- 8 Urioste (2014, 74) destaca que “los campesinos estarían cada vez más condicionados por un contexto global a producir comida *gourmet* para las poblaciones urbanas acomodadas o ricas y la agroindustria estaría capturando vastos mercados –internos y externos, urbanos y rurales– a los cuales provee crecientes cantidades de materias primas agrícolas y alimentos (...) la tendencia generalizada ahora en el área rural de Bolivia es producir cada vez más mercancías (...) es un nuevo rasgo que caracteriza la agricultura familiar campesina de Bolivia a inicios del siglo XXI”.
- 9 La variable de ajuste para mantener más o menos equilibrada la relación hombre–tierra en las comunidades del altiplano, es la expulsión migratoria (Urioste, Barragán y Colque 2007).

que los residentes paguen cada vez más por su pertenencia a la comunidad ya sea en trabajo, en especies o en dinero. Esta acelerada reducción demográfica rural es paralela a un envejecimiento y feminización de la población del campo, así como induce a una creciente multiactividad y a la práctica de la agricultura a medio tiempo (Colque y Soria Galvarro 2013). Cuando pueden, los campesinos buscan especializarse en cultivos rentables y así va disminuyendo la tradicional diversificación que caracterizó a la economía agropecuaria campesina.

Es cada vez más común la multiresidencia de la población originariamente rural. Aumenta el número de ex campesinos que viven en las ciudades pero mantienen derechos propietarios sobre la tierra y que –mediante el desempeño de cargos– refuerzan relaciones con sus comunidades, son los llamados residentes. Aunque es muy habitual la fragmentación jurídica de los derechos de propiedad de las tierras de las tradicionales unidades productivas, sin embargo, encuentran mecanismos de ajuste para reconstruir tamaños relativamente óptimos de sus predios mediante acuerdos familiares de uso de la tierra a cargo de algún pariente (Urioste, Barragán y Colque 2007). Lo anterior ocurre a pesar de que se han producido algunos cambios como la actualización y fortalecimiento jurídico de los derechos de propiedad privada (familiar) sobre su tierra, mediante el saneamiento de títulos de sus parcelas dentro de las comunidades, además del acceso a servicios que se reflejan, por ejemplo, en notables mejoras en los sistemas de transporte y en la red de caminos interdepartamentales que ha crecido aceleradamente en la última década.

En la región de tierras bajas, especialmente en varias de las provincias que rodean la ciudad de Santa Cruz, los hijos de los pequeños productores de soya y de agricultores familiares rentables, que hace una o dos generaciones migraron de los Andes, ya no viven en el campo. Se han desplazado a la ciudad de Santa Cruz o a poblaciones intermedias vinculadas a la expansión de la frontera agrícola como Mineros, Montero, Warnes o núcleos como San Julián, Yapacaní y Cuatro Cañadas. Dentro del departamento de

Santa Cruz hay un desplazamiento de población rural hacia las ciudades. En estas poblaciones dinámicas muchos pequeños agricultores capitalizados (poseen costosas maquinarias y equipos) están alquilando más tierras de sus vecinos (Castañón 2014)<sup>10</sup>.

### 1.3 Expansión del mercado con efectos diferenciados

El vínculo directo de la economía campesina con el mercado fue efecto de la Reforma Agraria de 1953. Desde entonces, pero especialmente a lo largo de las tres últimas décadas se han consolidado algunas cadenas productivas especializadas relativamente exitosas, en ciertos casos vinculadas a mercados externos, que muchas veces nacieron apoyadas por organizaciones de cooperación desde hace muchos años (ONG y otras). Generalmente la integración de estos emprendimientos es vertical, desde el productor al consumidor, pasando por procesos de siembra, cosecha, acopio, selección, almacenamiento, transformación y venta. También se percibe un aumento en el uso de agroquímicos (fertilizantes y pesticidas) y maquinaria (tractores), aunque dificultada por el fraccionamiento de parcelas y la accidentada topografía. Los productores especializados han constituido Organizaciones Económicas campesinas (OECA), se han convertido en agricultores familiares mercantilizados, rentables y que generan utilidades y acumulan ingresos, aunque en muy distintos grados. La expansión de los servicios de las agencias de micro finanzas (ONG financieras ahora reguladas por el Estado bajo

---

10 Castañón (2014, 50, 51, 52) revela que “el paso de una agricultura de roza y quema a otra de tipo agroindustrial ha derivado en un acceso a la tierra considerablemente más desigual (entre los campesinos colonizadores interculturales de Cuatro Cañadas). Mientras algunas familias acceden a más de 200 hectáreas, un tercio de la población carece de tierras. Así mismo, el uso del suelo se ha intensificado y homogeneizado pues en la actualidad queda menos del 10 por ciento de monte alto en esas comunidades y cerca del 90 por ciento de los productores campesinos priorizan la soya... (de modo que) la consolidación del agronegocio sojero como modelo productivo hegemónico en la región pone en entredicho la contribución de estos productores campesinos a la soberanía alimentaria del país... y los suelos fértiles de esta región son puestos al servicio de un proceso de acumulación de capital mediado por intereses corporativos foráneos”.

la nueva ley de bancos de 2013) han contribuido significativamente a la expansión de los complejos productivos (Marconi 2014).

Más allá del discurso oficial y popular condenatorio, la cuestión indígena se adapta crecientemente al mercado. La cuestión indígena, entendida como la construcción de nuevas identidades étnicas a partir del acomodo de la práctica de los usos y costumbres ancestrales a la modernidad capitalista, conduce a que la cultura, los valores sociales y la organización territorial local –tan fuertes especialmente en el altiplano aymara– se articule, aunque con dificultades y diferenciaciones, a esta mercantilización y globalización. Lo propio ocurre en los valles de Cochabamba y de Santa Cruz y en el norte amazónico. Si bien lentos y dispares, los cambios ocurridos en tan pocos años son notables en la esfera económica en el mundo rural boliviano, expresados en el despegue de una agricultura familiar especializada, todavía minoritaria, que conduce a una sostenida individualización y mercantilización que no parece estar destruyendo la auto identificación indígena, aunque sí debilitando cierto espíritu comunitarista en muchas colectividades tradicionales<sup>11</sup>. Hoy los indígenas rurales de altiplano y valles cuando viajan a las ciudades ya no tratan de mimetizarse y de pasar desapercibidos, sino que visten sus mejores galas, polleras, ponchos y mantas, sombreros y símbolos de autoridad, a la par que muestran cierto bienestar recientemente adquirido en una combinación de actividades agropecuarias con empleos y actividades informales, todo en medio de una creciente movilidad geográfica y espacial.

---

11 Pérez (2014) alerta sin embargo que “los productores interculturales de Rurrenabaque están satisfaciendo con creces las expectativas del Estado boliviano respecto a su contribución a esa dimensión del desarrollo, especialmente a través de la producción no tradicional, que refuerza la disponibilidad nacional de alimentos, pero también mediante sus propias condiciones de seguridad alimentaria, que aporta a la mejora de los índices nacionales”...“sin embargo, se cierne el riesgo de que la compra de alimentos (incluyendo los que pueden ser producidos solventemente en la zona) se convierta en un expediente normal y generalizado del acceso alimentario de los productores interculturales, generando condiciones de vulnerabilidad. Y lo más controversial, que Rurrenabaque se convierta en una zona nominal de productores agrarios”.

Obviamente las comunidades campesinas se adaptan, se transforman, se acomodan a los cambios del contexto mayor y en algunos casos se debilitan y fragmentan. La creciente autoestima étnica indígena, políticamente conquistada mediante su participación corporativa en un gobierno hegemónico, es fruto del proceso de inclusión y de apropiación del Estado–Nación por parte de los pueblos indígenas logrado durante la última década de gestión del presidente Evo Morales (2006–2014).

Muchos pobladores del campo –al especializarse y acumular rentas– se han descampesinado (como clase) pero no se han desindigenizado (como etnia). Al contrario, una parte de los agricultores del altiplano ya no son campesinos en el sentido estricto de la palabra, pero son agricultores de origen indígena que han logrado mayores ingresos mediante su especialización y también por el desempeño simultáneo de otras actividades no agrícolas (Urioste 2013). Seguramente por la inercia pero especialmente por la escasa disposición de los estudiosos e intelectuales para apreciar estos cambios que están a la vista, se los seguirá llamando campesinos (y muchos de ellos seguirán llamándose campesinos), aunque su naturaleza de clase y su vocación productiva, así como sus estilos de vida se hayan transformado. Son indígenas que han dejado de ser pobres y excluidos, muchos son productores de mercancías y tienen rentas y ganancias, y –gracias a sus esfuerzos y a su austeridad– algunos de sus hijos estudian en las universidades y aspiran a formar parte de las clases medias. Viven entre el campo y la ciudad. En todo caso ya no son los campesinos de la Reforma Agraria de 1953<sup>12</sup>.

Por otra parte, como efecto de los altos precios de los minerales y metales en la pasada década (2016-2013), una proporción muy alta de campesinos agricultores se convirtieron en trabajadores mineros explotando parajes, yacimientos, vetas o lechos de ríos con contenidos especialmente de oro, plata y polimetálicos, en algunos casos

---

12 Los yungueños o chapareños ya no se llaman a sí mismos campesinos, sino cocaleros; los productores de quinua se autodefinen como quinueros; los pequeños cultivadores de soya se llaman productores.

dentro de las jurisdicciones de sus propias comunidades o municipios (Fundación TIERRA 2013). En el pasado reciente, los altos precios indujeron a estos campesinos a dedicarse a la minería artesanal, inicialmente en condiciones laborales sumamente precarias, casi siempre con técnicas muy rudimentarias y altamente contaminantes debido al uso indiscriminado del mercurio. Así se fueron consolidando muchas cooperativas mineras, un sector en expansión de nuevas burguesías. Para dedicarse a la minería –mucho más rentable que la agricultura familiar– los campesinos abandonaron sus predios o los dejaron bajo el cuidado de sus esposas o parientes. Directivos de los cooperativistas afirman que más de un 70 por ciento de los más de 100 mil trabajadores afiliados a las cooperativas mineras eran antes campesinos. A fines del año 2014, cayeron los precios de los minerales y las cooperativas comenzaron a quebrar pero es poco probable que los ex campesinos retornen a sus anteriores actividades agrícolas, porque se han acostumbrado a un nivel de ingresos y un ritmo de consumo que la agricultura familiar tradicional no les puede dar. Es incierto el futuro de este tipo de minería como también es incierto el futuro de estos ex campesinos trabajadores mineros.

#### **1.4 Políticas públicas contradictorias**

Posiblemente la política pública pro campesina más destacada en la última década ha sido el esfuerzo fiscal para lograr un aumento significativo de la superficie bajo riego. La superficie total bajo riego en Bolivia está cercana de las 330.000 hectáreas, que corresponde más o menos a un 35 por ciento de las superficies sembradas en valles y altiplano. A pesar de que durante la última década se ha avanzado a un promedio de 15.000 hectáreas por año, en general los impactos de los programas de riego en los incrementos productivos todavía son muy bajos; en consecuencia, todavía no se ha logrado el cambio de la matriz de la agricultura a secano, aún persistente en Bolivia (PROAGRO 2010). Los recursos financieros del programa presidencial ‘Mi Agua’ se han destinado mayormente a instalaciones de agua potable (Informe Presidencial 2014). En las comunidades se han priorizado los tinglados, canchas de fútbol y construcción de oficinas para sedes

sindicales. Esta es una notable limitante estructural que impide mayores crecimientos en la productividad y en los rendimientos. Mientras tanto, los países vecinos poseen mejor productividad y rendimientos en casi todos los cultivos porque han desarrollado eficientes sistemas de regadíos mediante significativas inversiones públicas.

El conjunto de políticas públicas pro campesinas: riego, seguro agrario, compras estatales y miles de pequeños proyectos productivos, queda ensombrecido (sino anulado) ante la persistente política macroeconómica anti inflacionaria basada en la libre importación de comestibles, paralela al rígido control de los precios de los alimentos en los mercados internos. Esto desalienta a los productores rurales, especialmente a aquellos que tienen muy pequeños márgenes de ganancia, los hace salir –los desplaza– de la actividad agropecuaria. Con algunas excepciones, esto estaría ocurriendo ininterrumpidamente desde el programa de estabilización monetaria iniciado el año 1985 (DS 21060) hasta nuestros días (2015).

Para contener la inflación monetaria de la canasta básica de alimentos, en el año 2013 se ha subsidiado los precios de venta al consumidor de varios productos de origen agropecuario (azúcar, pollo, leche y pan) a razón de más de cien dólares anuales por cada familia<sup>13</sup>. Se está subsidiando a los consumidores de alimentos pero no se hace lo mismo con los productores agrícolas familiares, por lo menos no en la misma proporción.

La capacidad de respuesta de los productores agropecuarios de base campesina ante incrementos en la demanda de alimentos es muy lenta. Al no haber ocurrido una respuesta desde las economías campesinas para aumentar simultáneamente la oferta de alimentos ante el crecimiento sostenido en la demanda, habría llevado al Estado–Gobierno a triplicar las importaciones de alimentos en una década, de 217,9 millones de dólares el año 2006 a 655,3 millones de dólares el año 2013 (Informe Presidencial 2013). Esas nuevas importaciones y el contrabando de alimentos especialmente de los países

---

13 *Informe de la Gestión 2013 del Presidente Evo Morales Ayma al pueblo boliviano.*

vecinos –atraídas por el bajo precio del dólar y por la baja productividad agrícola de Bolivia– se suman a las políticas de control de precios que se traduce en un contundente desaliento a los pequeños productores rurales desde hace décadas. Se trataría de un círculo vicioso; para mantener controlada la tasa de inflación el gobierno necesita aumentar la oferta y lo logra mediante las importaciones de alimentos. Los campesinos, para producir más necesitan estímulos de precios. El resultado evidente es una forzada estabilización de precios con estancamiento de la economía campesina simultánea a la contracción del aparato productivo agropecuario familiar. Solo escapan de este círculo vicioso los que logran exportar exitosamente, como los sojeros o quinueros<sup>14</sup>.

Una parte importante de los incrementos de las importaciones y del contrabando de alimentos hacia el país acaban siendo consumidos también por los propios campesinos y agricultores familiares. No solo en las ciudades se consumen alimentos importados, también en el campo (sardinas, atunes y carnes enlatadas, mortadelas y fiambres, bebidas y refrescos, fideos y galletas, papas, cebollas y manzanas...entre otros). Los mayores ingresos familiares de los campesinos obtenidos de remesas y bonos, así como de su especialización productiva de mercancías y del multi-empleo, serían principalmente destinados a diversificar su consumo de alimentos, tanto nacionales como importados, así como otros gastos que pueden considerarse suntuarios<sup>15</sup>.

---

14 El caso de los cocaleros merece un análisis aparte, ya que la sostenida demanda de hoja de coca estimula una producción estable, pero no por mayor demanda para el consumo tradicional del acullico, sino para la producción de droga (Urioste 2014).

15 En el valle de Cochabamba son emblemáticas las casas chalets construidas –en medio de las pobres y tradicionales comunidades campesinas– con recursos de las remesas de los familiares que viven en el extranjero. Estas viviendas no son funcionales a la actividad productiva agropecuaria, pero denotan un efecto demostración del consumo suntuario de algunas familias de migrantes que copian estilos de vida de otras latitudes, para mostrar su nuevo estatus. Algo parecido ocurriría con los cada vez más vistosos edificios en El Alto de la ciudad de La Paz.

La evidente mejoría de los ingresos y de las condiciones de vida de los pobladores del campo no es el resultado de sostenidos incrementos en la productividad y en aumentos en la oferta de alimentos de origen campesino, sino fundamentalmente de las remesas, bonos y subsidios transferidos al campo durante los últimos años, así como de otras actividades económicas familiares no agropecuarias. En el campo se observa una disminución de la extrema pobreza y una relativa mejoría en las condiciones de vida: ha mejorado la vivienda, el uso de energía, el acceso al agua potable, a los servicios de educación y de salud y la población, especialmente los niños del campo, está mejor alimentada, pero, en general, la producción de alimentos está estancada.

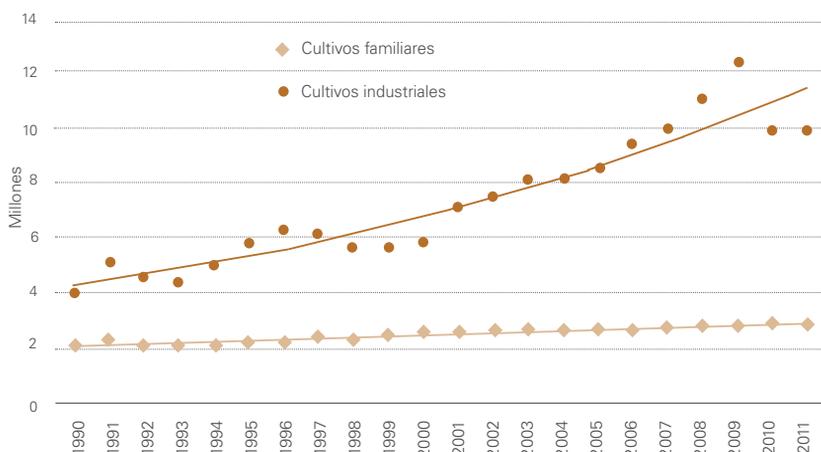
### **1.5 Crecientes impactos ambientales**

A pesar de las profusas declaraciones de respeto a la Madre Tierra y sobre todo de la fuerte campaña internacional del Estado boliviano para abanderarse de la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible desde los valores autóctonos, son innegables los cada vez mayores impactos causados en el medio ambiente, también por los productores campesinos. En los variados casos de especialización que generalmente conducen al monocultivo (soya, quinua, coca, café, lechería...), se percibe un deterioro (empobrecimiento) de los medios de producción, especialmente de los recursos tierra, bosque y agua, por deforestación, sobre uso, erosión, compactación, uso indiscriminado de maquinaria e insumos químicos de diversa naturaleza. No solo la agroempresa sino también la agricultura campesina afecta su propio medio ambiente, aunque en proporción mucho menor que los grandes propietarios de tierras (FAN 2015). Toda especialización productiva agropecuaria –si no toma los recaudos necesarios– pero especialmente los monocultivos, afectan negativamente el medio natural al reducir drásticamente la diversidad genética. Esos cambios en el paisaje se observan también en Los Yungas, en el altiplano y en los valles donde la agricultura familiar es dominante, y no solamente en los llanos del oriente donde se ha instalado la agricultura en gran escala centrada en las exportaciones de soya transgénica y sus derivados.

## 1.6 Disminución del aporte de los campesinos a la provisión de alimentos

A primera vista resulta contradictorio que las transformaciones en el agro y las mejorías descritas en párrafos anteriores –algo circunstanciales<sup>16</sup> en los ingresos familiares, en la disminución de los índices de extrema pobreza rural y en general en las condiciones de vida, ocurren de forma paralela a un estancamiento persistente del aporte de la agricultura de base campesina al Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario nacional (Gráfico 1).

**Gráfico 1**  
**Producción Agrícola TM**



Fuente: Elaboración propia con datos del INE y CAO 2013.

16 La continuidad de las transferencias sociales y bonos públicos depende exclusivamente de la persistencia de los altos precios internacionales de las materias primas que Bolivia exporta, especialmente del gas. Por eso, si la súbita declinación del precio del petróleo a inicios del año 2015 se mantiene, significaría que el ciclo de auge económico ha terminado y que a partir del año 2016 y siguientes se tendrán que recortar substancialmente los gastos e inversiones públicas, lo que seguramente llevará consigo grandes contracciones no solo económicas sino incluso turbulencias políticas (Méndez 2015).

Parte de la explicación podría ser que el crecimiento demográfico de la población rural se anula con el aumento de las tasas de migración campo-ciudad y los agricultores familiares que se quedan en el campo obtienen ingresos adicionales mediante la especialización productiva, pero principalmente mediante bonos públicos y remesas familiares y otras actividades productivas urbano-rurales no agrícolas. Los campesinos que persisten en una economía de subsistencia en base a una precaria diversificación productiva en áreas alejadas y con baja dotación de activos y sin acceso al riego, serían los más pobres y tendrían menores niveles de consumo, aunque –en este caso– probablemente su dieta esté basada en alimentos tradicionales, algunos de ellos con mayores cualidades nutritivas (Jaldín 2014)<sup>17</sup>.

Son pocos los estudios específicos que miden o cuantifican el valor de las transferencias directas de dinero a los pobres rurales mediante bonos en las últimas dos décadas y los montos de dinero que envían los emigrantes ex campesinos a sus familias mediante remesas desde las ciudades o desde el exterior. Algunos estudios apoyan la idea de que las sumas serían muy significativas<sup>18</sup>. Esas remesas y

---

17 Jaldín (2014, 107, 133) señala que “en Bolivia hay situaciones en las que la agricultura todavía está en manos de productores que cultivan pequeñas extensiones de tierra con prácticas tradicionales, con inserción al mercado, con utilización de recursos limitados, con un bajo o casi nulo nivel de mecanización y orientada a la producción de alimentos principalmente para el hogar y los mercados locales”...“la producción diversificada basada en la agricultura campesina se ha mantenido en Villa Serrano (en los valles de Chuquisaca)... aunque con estructuras y formas cambiantes de expansión de las relaciones de mercado en zonas próximas a los centros urbanos”...“la diversificación de actividades económicas y productivas se evidencia como una estrategia central de estas familias estudiadas” .

18 Silvia Escobar afirma que la masa monetaria de las remesas que envían los trabajadores bolivianos en el extranjero representan el 25% de la masa salarial. Todo un record a nivel latinoamericano que muestra la alta dependencia de estas fuentes de ingreso que son fruto de la sobre explotación de los bolivianos en el exterior y de la falta de empleo de calidad en el país. Los bonos estatales destinados a niños, mujeres y ancianos serían el 1% del PIB mientras que las remesas alcanzarían al 5% del PIB. Según esta investigadora del CEDLA esto debiera ser causa de vergüenza nacional y demuestra la inconsistencia del

los bonos, sumados a los múltiples proyectos del Fondo Indígena<sup>19</sup>, además de la creciente cobertura del reciente Seguro Agrario<sup>20</sup>, estarían también explicando esta relativa mejoría en los ingresos de las familias rurales y en las condiciones de vida en el campo. Todo parece indicar que se trataría de distintas combinaciones del conjunto de los factores anteriormente mencionados en un periodo de extraordinaria bonanza económica nacional durante la última década.

Estos cambios estarían acelerando una creciente mercantilización y especialización productiva de la agricultura campesina e indígena que conduce a la disminución de la importancia numérica del campesinado como una clase social empobrecida y contestataria que demanda nuevas tierras colectivas, que confronta con el Estado y que aspira a un nuevo modelo comunitarista basado en el intercambio y la reciprocidad del Vivir Bien. Al contrario, muchos campesinos que diversificaban sus cultivos, se están transformando y convirtiendo dificultosamente y con mucho esfuerzo en agricultores familiares especializados, más o menos rentables y organizados en gremios y corporaciones (OECA), que demandan la certificación de la propiedad privada de sus tierras y su reconocimiento como actores económicos protagónicos. Los campesinos e indígenas tradicionales

---

modelo de desarrollo que se aplica sin cambios en el país desde hace muchos años. Sería muy útil un análisis desagregado de esta información, por áreas rurales y urbanas y por tipo de unidades productivas (apuntes del Taller “Análisis contextual para una agenda post 2015 en Bolivia” UNITAS, octubre 2014).

- 19 El 12 de febrero del 2015 la Contraloría General del Estado evidenció daño económico al Estado mayor a 71 millones de bolivianos (10 millones de dólares) en el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarias y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC) por “irregularidades” en 153 proyectos aprobados en la gestión 2010–2011.
- 20 Durante el transcurso del año 2014 el Instituto Nacional del Seguro Agrario (INSA) indemnizó a 22.000 productores agrícolas por más de 18 millones de bolivianos. Ese mismo período dio cobertura de seguro contra riesgos climáticos a 4.627 comunidades por una superficie de 175.815 hectáreas, de las cuales más de 19 mil se perdieron por siniestros (*Audiencia final de Rendición de cuentas*. Obtenido de <http://www.insa.gob.bo/index.php/prensa-menu/197-el-insa-realizo-su-rendicion-de-cuentas-de-la-gestion-2014>)

consagrados (atrapados) a la subsistencia mediante el trabajo comunitario en tierras de propiedad colectiva y al autoconsumo de cultivos diversificados serían cada vez menos, pero serían además los más pobres.

En general los campesinos, pero especialmente los de subsistencia están débilmente cohesionados como fuerza social organizada y sus instituciones de representación (CSUTCB, Interculturales, CI-DOB, CONAMAQ, CNMCIOB-BS) ya no están tan cohesionadas y homogéneas como antes. Otros gremios, los cooperativistas mineros, transportistas, los agricultores familiares quineros, soyeros y cocalleros, tienen más poder social, económico y político que los campesinos o indígenas productores diversificados de alimentos. La creciente representación parlamentaria de estos gremios de productores especializados, así como las ventajas económicas obtenidas para su sector en sus demandas ante el Estado durante la última década, sería una muestra de ello.

En este contexto –favorecido por el alto precio del gas de petróleo y de los minerales que generó durante una década muy elevadas rentas para el Estado y las consecuentes políticas redistributivas– los campesinos e indígenas se interpelan ante una compleja disyuntiva: invertir esos ingresos adicionales circunstanciales en sus predios para garantizar mejores condiciones productivas agropecuarias de manera sostenible en el tiempo o buscar opciones de empleos más rentables fuera del campo. Pareciera que una mayoría está optando por aprovechar al máximo esta oportunidad para intentar dejar de ser agricultores marginales e incorporarse a la creciente urbanización, mercantilización y, en definitiva, al capitalismo y rentismo imperantes en el país. Esto tendría como consecuencia que muchos campesinos y agricultores familiares dejan de trabajar la tierra y esa tarea estaría cada vez más en manos de las empresas de las tierras bajas y de los agricultores familiares especializados que han hecho de la producción de alimentos y materias primas agropecuarias un negocio más o menos rentable, aunque muy riesgoso e incierto.

La idea de que la economía campesina y los agricultores familiares ya no son los principales proveedores de alimentos para la población boliviana es apoyada por otros estudios (Ormachea 2009, Pérez 2008, Prudencio 2009 y 2014). La paradoja es que el rol de proveedor de alimentos está cada vez más en la empresa agroindustrial del oriente boliviano, gracias a persistentes políticas públicas de subsidios, exenciones impositivas, un contexto macroeconómico favorable, su articulación con la agro–empresa transnacional y a su propia capacidad de emprendimiento.

Estos recientes cambios hacen necesario trabajar en una tipología actualizada de agricultores familiares que ayudaría a diseñar políticas públicas diferenciadas y específicas para cada uno de estos tipos de unidades de producción familiar campesina. No todos los agricultores familiares tienen las mismas oportunidades, ni las capacidades, ni el acceso a recursos de tierra y agua, para aumentar sus rendimientos, mejorar su desempeño productivo, sus ingresos y su alimentación y nutrición. Además, no todos los campesinos pueden ni quieren seguir siéndolo eternamente.

## **2. Tipología de agricultores familiares: ideas preliminares**

Las siguientes reflexiones tienen el propósito de animar un debate sobre una actualizada comprensión de los efectos de la diferenciación interna entre distintos tipos de campesinos según su grado de inserción al mercado tanto nacional como global, así como de su condición económica. Encontramos que –para ayudar al diseño de políticas públicas específicas– la siguiente caracterización en tres tipos sería útil.

### **2.1 Los pequeños productores de *commodities* subordinados al agronegocio**

Los pequeños productores de soya son quienes producen *commodities* agrícolas, es decir materias primas agropecuarias que –cumpliendo estándares de calidad y sanidad internacionalmente acordados– son transadas en el mercado mundial globalizado independientemente de su origen o nacionalidad. Sus precios se

cotizan en las bolsas internacionales y su comercio se pacta mediante sofisticados procedimientos. Pertenecen a esta categoría principalmente los cultivos de granos o cereales como el trigo, la soya, el girasol, el maíz, el arroz, y más recientemente la chíá. Desde hace un par de décadas Bolivia exporta crecientes cantidades de granos de soya y derivados. Una pequeña parte de esta soya es producida por unos 12 mil agricultores familiares de origen campesino en el departamento de Santa Cruz.

En las tres últimas décadas hemos observado cómo importantes sectores de campesinos, en ciertos enclaves territoriales, llegan a convertirse en productores de *commodities*. Conglomerados sociales que originariamente eran campesinos-indígenas quechuas o aymaras (colonizadores migrantes al área rural de Santa Cruz) se han transformado de productores de alimentos diversificados para la subsistencia y el mercado nacional en productores de *commodities* para el mercado globalizado. Su transformación de campesino diversificado a agricultor está determinada por fuerzas de mercado que los inducen—atraen a esos cambios. El papel que juegan las políticas públicas nacionales en esa conversión es determinante. Pero también la importancia de las condiciones generadas por la crisis del capitalismo y las grandes transnacionales del agro negocio en un contexto mundial de alza de los precios de las materias primas de origen agropecuario (2008-2014). Durante ese tránsito, han ocurrido transmutaciones en las formas de organización social de estos ex campesinos, en sus formas de acceso a la tierra, al capital, la mano de obra, la ciencia y la tecnología, los conocimientos y sus aspiraciones de modernidad.

Para que estos campesinos se conviertan en productores de *commodities* han ocurrido cambios en su entorno, en sus costumbres, en sus valores y en sus comportamientos. Ahora ocupan un lugar—aunque marginal y subordinado— en la cadena o en el clúster de la soya. Por eso este tipo de productores que dejaron de ser campesinos tradicionales desde el momento en que la tasa de ganancia aumentó significativamente, también dejaron sus formas de organización, de producción, y en general de su comportamiento social y económico. Sin

embargo, dado su origen indígena, son agricultores familiares que mantienen formas híbridas de organización sociopolítica que conviven tensamente entre la organización tradicional del *ayllu*, el sindicalismo agrario y el de su corporación empresarial (Confederación Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente, CAPPO).

En el contexto descrito, para muchos campesinos la consolidación de las relaciones mercantiles en el campo devienen una meta a alcanzar, y determinados conglomerados sociales de campesinos –dadas ciertas condiciones que describiremos a continuación– lograron aferrarse a nichos–momentos–oportunidades mediante la especialización productiva para poder generar rentas extraordinarias y acumular capital, aunque no necesariamente de manera sostenible. Ciertamente no es una opción posible para todos los campesinos, sino para quienes reúnen ciertas condiciones materiales y asumen el riesgo de depender plenamente del mercado y de sus fluctuaciones a cambio de la posibilidad de rápida acumulación de ganancias que sobrepasan con creces los bajos ingresos de la agricultura tradicional diversificada, salvo excepciones de algunos productores agroecológicos. Como todo proceso de generación de excedentes y de acumulación, esta *commodificación* de la agricultura campesina generará mayores rentas en algunos sectores y menores en otros, provocando diferenciaciones entre el campesinado –muchas veces conflictos y exclusiones– que tendrá efectos perversos en las relaciones de reciprocidad y de organización dentro de sus comunidades, colonias o poblados (Castañón 2014).

Si bien –generalmente– no son los campesinos los que han generado las condiciones para que estas oportunidades se presenten, son ellos los que las aprovechan en base a su esfuerzo y a sus capacidades de adaptación (condiciones objetivas y subjetivas). En el caso de los cultivadores de soya el elemento central que determina cambios en su conducta productiva es el precio en el mercado globalizado de las *commodities* de origen agrícola que ellos producen, y de sus posibilidades de acceder al mismo<sup>21</sup>.

---

21 Somos conscientes del enfoque ecléctico en nuestro análisis, precisamente

Como todo agente económico, campesino o no campesino, urbano o rural, endógeno o globalizado, indígena o no indígena, en un contexto de predominio de las relaciones mercantiles, una vez que los productores de *commodities* entran en relaciones de intercambio monetario no pueden salir fácilmente; su conducta económica estará determinada por un intento de maximizar sus ganancias con los menores esfuerzos productivos, aún a pesar de afectar–deteriorar el medio ambiente del que dependen para generar sus excedentes. Posiblemente, si los precios internacionales se derrumbaran, ya no podrían volver a reproducir las condiciones anteriores de sus estrategias de vida basadas en la diversificación productiva, sino que estarían obligados a vender su fuerza de trabajo a las empresas o a ser expulsados del área rural para engrosar las filas, no de los proletarios urbanos sino de los amplios sectores del autoempleo precario e informal urbano–rural.

Pero no se trata solamente de que los campesinos más aptos aprovechen esas oportunidades sino que desde los escritorios de las grandes compañías transnacionales que planifican la expansión planetaria del agronegocio de *flex crops*, se les asigna a los campesinos y agricultores familiares nuevos espacios y roles (residuales) para su inclusión como parte subordinada, pero parte al fin, de la cadena: es la agricultura por contrato. Esto les permite tener ingresos y utilidades significativamente mayores que las que tenían antes. Los pequeños agricultores (ex campesinos) que se incorporaron a las cadenas del agronegocio, lo hacen porque –al final– salen ganando, por lo menos en el corto plazo. Si no, no lo harían. Pero al hacerlo, al menos un sector de estos actores, se descampesiniza, cambia su naturaleza de clase y transforma su comportamiento socioeconómico y político, su identidad y valores hasta entonces constituidos en diferentes etapas civilizatorias y circunstancias recientes (relaciones feudales en el inicio de la república, Reforma Agraria de 1953, Participación Popular de 1994, Proceso de Cambio durante el gobierno de Evo Morales de la última década 2006–2014).

---

porque creemos que una sola aproximación académica es incapaz de explicar la complejidad de los cambios ocurridos.

Eso está ocurriendo justamente ahora con muchos pequeños productores familiares de soya. No controlan ni siquiera una parte marginal del agronegocio, pero se benefician de una porción accesorio que –dados sus muy bajos anteriores ingresos–, significan mejoras sustantivas en sus condiciones de vida y así amplían notablemente las posibilidades de inclusión de sus hijos a sistemas educativos urbanos, lo que –según ellos mismos manifiestan– les permitirá salir de la pobreza estructural que persiste en el campo.

Por lo menos, esa es su apuesta y por eso han asumido tantos riesgos y han quemado sus naves y no tienen vuelta atrás. Al contrario, como no tienen certeza de los términos de su permanencia dentro del marco del agronegocio, intensifican el uso de casi todos sus factores productivos, incluso dañando los nutrientes de sus suelos para obtener la mayor tasa de ganancia en el menor tiempo posible. En muchos casos deforestando sin control e incluso forzando los ciclos agrícolas con la utilización de semillas transgénicas, sobredosis de fertilizantes y herbicidas químicos, eliminación de rotación de cultivos y prácticas de descanso de los suelos, utilización inadecuada de maquinaria y abandono de abonos naturales (Fundación TIERRA 2013).

Dadas la debilidad del Estado y las fuertes tradiciones de autogobierno local comunal, los productores familiares de *commodities* combinan estructuras sindicales de organización –para acceder a servicios públicos y controlar la calidad de las prestaciones de educación, salud, seguridad ciudadana– con estructuras funcionales corporativas de carácter gremial: asociaciones de productores de soya que giran en torno a cómo lograr el mejor acceso a los mercados de bienes y de insumos para la producción y comercialización de sus mercancías, así como también se constituyen en entidades de presión a las empresas acopiadoras, proveedoras de insumos, comercializadoras y financiadoras, para obtener las mejores condiciones posibles de acceso a sus bienes y servicios. Sabemos que el sindicato es más una forma de autogobierno local para asuntos sociales, políticos y reivindicativos ante el Estado, mientras que las asociaciones de productores tienen fines casi exclusivamente

orientados a lograr mayores niveles de eficiencia, rentabilidad e ingresos. Ambas formas coexisten aunque muchas veces compiten y se superponen.

Aquellos productores de origen campesino que han logrado insertarse exitosamente en la producción de *commodities*, argumentan que algunos de sus vecinos –miembros de sus colonias o comunidades– no han tenido éxito porque no han sabido gestionar su negocio, no se han esforzado lo suficiente, no han tenido visión de negocio, han despilfarrado sus ingresos y no los han reinvertido. Estos agricultores familiares exitosos están orgullosos de ser parte del agronegocio, aunque no lo admitan explícitamente. Saben que sus ganancias están muy por debajo de las empresas grandes y medianas pero, a su vez, sus ingresos están arriba de la media de la de otros campesinos y eso justifica su esfuerzo y producción para el mercado.

## **2.2 Los pequeños productores orientados preferentemente al mercado interno.**

Se trata de productores agropecuarios de origen campesino indígena, que habitualmente viven en comunidades o poblados rurales pero también en ciudades intermedias que mediante la participación en el mercado interno y su especialización han logrado ciertos márgenes de ganancia, renta y acumulación. Estos pequeños productores de alimentos o agricultores familiares (quineros, lecheros, ganaderos, horticultores, fruticultores, floricultores) están presentes en toda la geografía nacional, especialmente allí donde existe suficiente y adecuada dotación de factores productivos: tierra, agua y acceso a caminos y demás servicios. A esta categoría también pertenecerían los productores de hoja de coca de Los Yungas y del Chapare, con sus respectivas organizaciones sindicales y productivas y de comercialización, aunque en este caso la rentabilidad del cultivo de la hoja de la coca está directamente relacionada con la estabilidad de la demanda de cocaína en el mercado globalizado. Todos producen exclusivamente para el mercado, especialmente interno, con excepción de la quinua y

de la hoja de coca transformada en droga, que se exportan. La actividad productiva agropecuaria es central y determinante en sus ingresos familiares. Son agricultores a tiempo completo.

Lo que determina la consolidación de este tipo de productores es que ofrecen productos en cantidad y calidad que satisfacen la demanda de los consumidores y consigue competir con los productos importados de países vecinos.

Desde hace más de dos décadas muchos de los pequeños productores de alimentos se han venido organizando y han constituido una vasta red de Organizaciones Económicas Campesinas (OECA)<sup>22</sup>. Están dispersos por casi todo el país estructurados en torno a cadenas, complejos productivos o nichos de competitividad local. La mayoría de las OECA están restringidas al mercado nacional, pero otras –seguramente las más exitosas en términos del volumen de sus negocios y en su naturaleza ecológica– colocan sus productos en mercados externos buscando insertarse en relaciones de precios y de mercados justos. Se trata por lo general de productores de quinua, cacao, café, algunas frutas (bananos, uvas...), productores de leche, de camélidos y ganado vacuno, o productos recolectados como la castaña y el asaí. En general sus predios están ubicados en lugares que tienen acceso carretero (o fluvial) más o menos permanente y sus emprendimientos son el resultado de largos procesos de maduración –generalmente décadas– desde etapas muy incipientes con técnicas precarias hasta lograr niveles de especialización productiva que requiere del conocimiento de tecnologías más adecuadas y modernas: semillas mejoradas, sistemas de riego más o menos sofisticados, maquinaria e implementos agrícolas, ensacadoras, procesadoras primarias, fertilización natural o química, y en algunos casos son especialistas en producción agroecológica.

---

22 Las memorias e informes de estas agrupaciones informan que en Bolivia existirían cerca de 112 mil familias de agricultores familiares registrados en 942 OECAS, asociados en redes por productos. Uno de sus principales reclamos es que necesitan ser excluidos del régimen impositivo universal argumentando que sus ganancias son muy bajas (CIOEC 2013).

Casi la totalidad de su producción son alimentos de consumo humano y está orientada al mercado especialmente urbano nacional y para ello han constituido redes familiares ampliadas de productores, acopiadores y comercializadores. Luego de largos años de cabildeo han logrado ser incorporados como sujetos de algunas políticas públicas proactivas<sup>23</sup> y son sujetos preferentes de créditos que obtienen de múltiples instituciones privadas y públicas especializadas en prestar servicios de apoyo financiero a los pequeños productores rurales, aunque pagan tasas de interés mucho mayores que las de los grandes productores.

Estos productores familiares de origen campesino son también típicos pequeños productores capitalistas que sobreponen sus intereses de origen étnico o de clase campesina, a la de productores mercantiles exitosos basados en su esfuerzo y trabajo generalmente de tipo familiar, aunque muchas veces también contratan jornaleros según las temporadas o promueven especies de cooperativas. No producen *commodities* para el mercado exterior, pero si mercancías para el mercado interno o productos *gourmet* para consumidores de altos niveles de ingresos. Por eso muchas veces sus organizaciones matrices corporativas de representación compiten con la clásica y tradicional organización sindical tan común en el campo desde los años 1950 del siglo pasado.

Los emprendimientos de estos pequeños productores familiares, sus predios y talleres artesanales, están generalmente ubicados dentro de territorios más o menos dinámicos, en los que también hay otras actividades y servicios rurales como el altiplano norte en el departamento de La Paz, o los valles meso térmicos en Santa Cruz, o el valle bajo en Cochabamba, o algunos enclaves en el norte amazónico, o en los valles de Tarija, o en Los Yungas y el Chapare. En estas regiones o territorios locales hay servicios financieros (bancos), de comunicación y muchas veces internet, talleres mecánicos, restaurantes y bares, tiendas de proveedoras de insumos, transportistas y rescatadores, mercados de alimentos, escuelas y hospitales o centros de salud y poblados relativamente prósperos.

---

23 Ley N° 144 de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria.

En algunos casos todos estos servicios se han ido constituyendo en los territorios locales justamente como resultado de los iniciales emprendimientos de estos pequeños productores de origen campesino. Han sido los pioneros del desarrollo local.

Al igual que los productores de *commodities* (soya) los productores mercantiles (coca, quinua, leche, cacao...) ya sea para el mercado interno o externo, también han optado por la especialización según ventajas comparativas y competitivas y –dado que no producen sus propios alimentos– deben comprarlos en el mercado (Urioste 2014). Son productores de alimentos–mercancías especializados que trabajan a tiempo completo en la agricultura–ganadería–recolección y que venden sus productos para generar ingresos y –entre otras cosas– comprar sus alimentos. Son consumidores netos de alimentos producidos por la agroindustria del oriente: azúcar, arroz, aceite, harinas, cereales, fideos, refrescos, pollos.

Estos campesinos familiares exitosos están bien organizados, tienen representación social y política. En algunos casos logran donaciones, subsidios, financiamientos especiales, seguros agrícolas, apoyo y asistencia estatal, gracias a su representación gremial-corporativa.

### **2.3 Los productores de subsistencia**

Posiblemente este estrato o tipo de campesinado –a diferencia de los países vecinos– en Bolivia es todavía el más numeroso, pero también es el más pobre y postergado. Como hemos visto en el capítulo anterior, los índices de extrema pobreza y desnutrición de Bolivia se concentran en esta población que por lo general vive en comunidades tradicionales regidas mayormente por usos y costumbres. Este grupo poblacional está ubicado en las áreas más lejanas y aisladas de la región alto andina en tierras de occidente, y sus predios han quedado reducidos a minifundios fragmentados por efecto del sostenido crecimiento poblacional, que encuentra en la expulsión migratoria un camino para más o menos equilibrar la relación hombre–tierra, recursos humanos y recursos naturales.

Este sector (tipo) de campesinos minifundistas sin acceso a sistemas de riego, ubicado en zonas alejadas de las ciudades y con pocas vías de comunicación, en regiones de altas montañas con muy pocas tierras con algún potencial marginal para la agricultura o la ganadería, es el principal expulsor de migraciones del campo a las ciudades y al extranjero.

Aunque las informaciones censales son contradictorias, el reciente censo de población y vivienda establece que la población rural de Bolivia habría aumentado en 300 mil personas entre los dos censos de 1991 y 2012 (INE 2012). En términos generales se podría afirmar que, en las últimas tres décadas, la población rural está estancada en unos tres millones de habitantes, mientras la población urbana crece aceleradamente. En el año 2012 la población rural representa el 35 por ciento de la población total del país<sup>24</sup>.

Es necesario un estudio en profundidad de los datos de los dos nuevos censos (de población y agropecuario) para confirmar si efectivamente esta población –en base al lento crecimiento vegetativo y las elevadas tasas de migración– se ha estancado en las últimas décadas. Todo parece indicar que –dada la precariedad de las condiciones de vida y de producción– estas familias de campesinos de subsistencia se ven obligadas u optan voluntariamente por el multitiempo y la multiresidencia. Muchos ya no pueden seguir siendo agricultores a tiempo completo porque –dado el deterioro de su base material– con solo unas pequeñas parcelas a secano, su producción agropecuaria es insuficiente y ante tan altos riesgos climáticos no logran alimentarse adecuadamente. No logran ser autosuficientes. Aunque quisieran no pueden ejercer su derecho a la soberanía alimentaria. Además, la aspiración de educar a sus hijos fuera del área rural, en los institutos y universidades de las ciudades, les obliga a generar ingresos monetarios adicionales de otras fuentes como el trabajo temporal de jornaleros, ayudantes de albañil, artesanos,

---

24 El Censo de Población y Vivienda de 2012 estableció que Bolivia tiene un poco más de 10 millones de habitantes de los cuales el 35 por ciento vive en poblados menores de 2 mil habitantes.

comerciantes, transportistas, empleados públicos en las alcaldías, contratistas de obras, el contrabando y otras actividades, además de la precaria agricultura a secano. Esta es una característica de la nueva ruralidad no solo de Bolivia sino de América Latina.

Estos campesinos, generalmente pobres, tienen sus formas tradicionales de organización y representación en *ayllus*, comunidades y sindicatos. Tienen sus *mallkus*, *curacas*, secretarios generales y capitanes, pero son muy débiles sus relaciones con los órganos de decisión del Estado. Aún en esta última década de proceso de cambio con privilegiada representación indígena, estos campesinos empobrecidos en realidad continúan excluidos del poder, que ha sido apropiado por los gremios exitosos (cooperativistas mineros, cocaleros, transportistas, quinueros, entre otros). Muchas de las políticas públicas no les llegan y sus escasos productos tienen bajos rendimientos y no logran venderse a precios que generen algunas rentas o incipientes utilidades. Dada una muy escasa dotación de tierras poco productivas, sin riego, ni caminos que los conecten a centros mayores, casi aislados del mundo, están atrapados en su pobreza y no pueden salir de su precariedad, a pesar de sus notables y esforzadas estrategias de sobrevivencia.

En realidad –después de medio siglo de tensiones de sus formas de organización y producción comunitarias en un contexto de relaciones dominantes de producción capitalista– a nuestro juicio no parece que persista alguna forma o modo de producción pre colonial de raíz étnica indígena que encarne un modelo de diversificación productiva que genere condiciones óptimas para Vivir Bien<sup>25</sup>. En otras palabras, la mayoría de los campesinos tradicionales de Bolivia no viven bien, viven en condiciones de extrema pobreza, desnutrición crónica, alta mortandad infantil y sus esfuerzos para vivir mejor son sobrehumanos, pero la mayoría de las veces resultan frustradas. Con solo un pedazo de tierra erosionada y fragmentada a grandes

---

25 Desde el inicio de esta gestión de gobierno (2006) predomina un discurso neo ambientalista de base indigenista de respeto a la Madre Tierra y la propuesta de un modelo que no busque la acumulación capitalista sino el Vivir Bien.

altitudes en las que las heladas y sequías e inundaciones son cada vez más frecuentes, no consiguen escapar de la extrema pobreza. En muchos casos su única opción es la emigración ya sea temporal o definitiva. Sus comunidades no forman parte de territorios dinámicos, sino de áreas o regiones muy postergadas y alejadas del resto.

Pero al mismo tiempo, muchos de sus familiares ya no son campesinos, sino residentes, viven en algunas de las ciudades o en poblados urbanos menores. Por eso, la multiresidencia es ahora una característica que hace difícil determinar con precisión cual población es urbana y cual es rural o cual es ambas cosas al mismo tiempo.

Situación similar viven los indígenas de tierras bajas que cada vez acuden en menor medida a la caza, pesca y recolección para alimentarse cotidianamente. Al contrario, muchos de los indígenas que ahora tienen títulos de propiedad de sus territorios, no viven en ellos, sino en los márgenes de los mismos cerca de los poblados y capitales de provincia. Muchos indígenas de las tierras bajas se ven obligados a vender su fuerza de trabajo como peones asalariados a las empresas madereras –o a alquilar parte de sus territorios a estas empresas–, constructoras de carreteras, y a las empresas petroleras y mineras que explotan recursos en las proximidades o dentro de sus mismos territorios. De igual forma que en el caso de los campesinos diversificados pero empobrecidos, la principal motivación de los jefes de familia indígenas es lograr educar a sus hijos para que puedan dejar el campo o el bosque con opciones de empleo en las ciudades, para que sus hijos no sufran como ellos (Eyzaguirre 2014).

La conquista de la titulación de los territorios indígenas (Ley INRA 1996, y Ley de la Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria 2006) no ha sido acompañada de políticas públicas para apoyar una adecuada gestión de esos territorios y un uso sostenible de sus recursos naturales. Igual que los campesinos de altiplano y valles después de la Reforma Agraria de 1953, los indígenas que recuperaron sus territorios ancestrales han sido ahora abandonados a su suerte. No existen suficientes incentivos, estímulos y po-

líticas públicas que refuercen sus capacidades para que ellos produzcan sus alimentos tradicionales y satisfagan sus necesidades nutricionales. Como ya lo señalamos, nuestros estudios muestran que muchos indígenas de Bolivia –igual que una gran parte de los campesinos– consumen habitualmente alimentos producidos por la agroindustria y para poder comprarlos, tiene que vender su fuerza de trabajo (Eyzaguirre 2014).

### **3. Necesidad de políticas diferenciadas**

No estamos haciendo referencia a la necesidad de políticas diferenciadas entre la agro empresa por un lado y los campesinos por el otro. La existencia de varios tipos de pequeños agricultores sugiere que dentro del estrato “campesino indígena” se apliquen políticas públicas específicas y diferenciadas de desarrollo sostenibles para cada tipo de campesinado o de agricultor familiar. Sus necesidades son distintas y las políticas para estimular su desarrollo deben ser también diferentes. Las necesidades de un pequeño productor de soya no son las mismas que las de un productor de quinua, o de leche, como tampoco son las de los productores de subsistencia.

#### **3.1 Para los productores de *commodities***

Sugerimos establecer regulaciones estatales específicas para controlar la expansión indiscriminada de cultivos de materias primas agrícolas para la exportación, de modo que la expansión de la frontera agrícola para las *commodities* no dañe al medio ambiente, no destruya los bosques y no postergue la seguridad alimentaria con soberanía. Es tarea del Estado promover la agricultura familiar especializada (o diversificada) con criterios ambientales y agroecológicos sostenibles. Será necesario aplicar controles sociales y regulaciones que atenúen la diferenciación interna y los impactos ambientales. También será necesario que el Estado garantice que el actual rol subordinado de los pequeños productores de soya no se convierta progresivamente en una forma de despojo de la tierra y de la renta por parte de los grandes emprendimientos.

### **3.2 Para los agricultores familiares especializados**

Los agricultores especializados necesitan estímulos financieros, exenciones tributarias, compras públicas a precios justos, pero también políticas orientadas a la sostenibilidad ambiental de su base material de recursos naturales y a la construcción de modelos agroecológicos que prioricen variedades de cultivos nativos de alto valor. Estos productores especializados tienen que prestar especial atención a la conservación de su medio ambiente, su entorno productivo y la capacidad de sus suelos y agua. Particularmente necesaria es una política que por lo menos atenúe los efectos perversos de la política macroeconómica antiinflacionaria, de manera que los productores familiares tengan estímulos de mercado, de precios, de mercados seguros. Las experiencias de compras estatales de alimentos a los agricultores familiares están en Bolivia notablemente rezagadas en comparación a los avances que se han logrado en países como Brasil (programa hambre cero), Colombia, Ecuador o Perú. Un requisito para ello, es realizar un censo de todas las unidades de producción familiar que registre el nombre de cada productor(a) y determine específicamente sus principales actividades productivas, sus derechos propietarios, su residencia principal y una aproximación de sus ingresos familiares. Con ese censo de UPA se podrá armar un registro biométrico completo y construir matrices según tipos, regiones, productos, especialidades y necesidades que permitan planificar acciones de apoyo específicas para cada estrato<sup>26</sup>.

### **3.3 Para los campesinos de subsistencia y pueblos indígenas**

En el caso de las comunidades campesinas tradicionales de valles, altiplano y llanos (pueblos indígenas), las políticas públicas no solamente

---

<sup>26</sup> El exitoso registro biométrico de los productores de hoja de coca del Chapare en Cochabamba, impulsado por la actual gestión gubernamental, es una herramienta muy útil no solo para controlar y frenar la expansión de un cato de coca por familia, sino para la planificación de un conjunto de actividades productivas, para el desarrollo alternativo y la diversificación productiva y económica de las familias y la región. Este registro biométrico debería expandirse a todo el país rural.

deberían estar orientadas a ofrecer más y mejores servicios en salud, educación y bonos sociales focalizados en niños, madres y ancianos, sino que el foco de atención debería estar centrado en lograr mayor inversión pública para cambiar las condiciones económico productivas en sus territorios locales, especialmente mediante la implementación de sistemas de riego, caminos y acceso a fuentes de energía (electricidad y gas). Mientras no cambie la base material de sus condiciones productivas (riego, caminos, energía, conocimientos), será muy difícil que puedan escapar a la extrema pobreza y desnutrición crónica. Mayores inversiones en el agro necesitan de una priorización del gasto público por encima de las obras políticamente visibles (edificios municipales, canchas de fútbol, tinglados, tractores). Son más necesarias las inversiones mancomunadas (gobiernos central, departamental y local), en infraestructura productiva con perspectivas ciertas de convertir la agricultura campesina e indígena en una agricultura bajo riego y con caminos de tránsito permanente.

El Estado no puede olvidar su responsabilidad institucional al haber titulado casi 32 millones de hectáreas de territorios en favor de pueblos indígenas a los cuales la CPE les otorga el derecho de gestión de sus recursos naturales y de autogobierno. Los territorios indígenas son una nueva entidad política administrativa del Estado Plurinacional de Bolivia y gozan de una autonomía que, sin embargo, no se les permite ejercer. Por ello deberían contar con suficiente presupuesto público para realizar inversión local en infraestructura productiva y capacitación popular indígena en gestión territorial, bajo principios de respeto a la libre determinación y autogobierno, y a la consulta previa, libre e informada, en casos de inversiones públicas susceptibles de afectar los territorios indígenas.



## Capítulo 3

# El papel de la agricultura campesina e indígena para la seguridad y soberanía alimentaria

Luego de la caracterización de los principales cambios y dinámicas que afectan a la agricultura campesina, en esta sección vamos a centrar nuestra atención en el papel que tienen los campesinos e indígenas para contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria. Para ello vamos a examinar a los pequeños productores en una doble dimensión, en calidad de productores agropecuarios y, a la vez, de consumidores de alimentos. Al igual que en otras secciones de este trabajo, la información primaria proviene de los cinco estudios de caso y la encuesta que recoge información de 247 hogares campesinos sobre la situación de seguridad alimentaria, indicadores de consumo y acceso a ingresos y a alimentos.

El solo plantear cuál es el papel de las familias campesinas para la seguridad y soberanía alimentaria puede resultar algo ocioso cuando la idea predominante ha sido que –sin lugar a dudas– ellos juegan un rol clave al producir una parte importante de los alimentos consumidos, que las técnicas que emplean no dañan el medio ambiente y, además, que la producción campesina beneficia a la mayoría de la población rural. Esto resulta más creíble cuando se utiliza el término de ‘agricultura familiar’ que, a diferencia de ‘agricultura campesina’, incluye unidades productivas que, aunque son a pequeña escala y operadas por unidades familiares, ante todo son de tipo capitalista. Así, el concepto de “agricultura familiar” justifica afirmaciones tales como que este sector productivo aun provee la mayor parte de los alimentos consumidos. Sin embargo, tal como hemos expuesto en el anterior capítulo, una mirada más detallada de cómo está compuesta la producción familiar nos anima a concluir que los campesinos más bien tienen una participación cada vez menor en la provisión de alimentos para el mercado interno y

externo. No es casual que, en la práctica, las políticas agrarias, subvenciones y otras facilidades que otorga el Estado para garantizar la seguridad alimentaria de los bolivianos están dirigidas a fortalecer el sector agroindustrial, sin importar mucho la contradicción que ello conlleva con los postulados y discursos pro-campesinistas de soberanía alimentaria, producción agroecológica o economía comunitaria.

## **1. El nuevo contexto político-económico**

El reciente retorno del Estado en varios países de Latinoamérica (2000-2010), considerado por muchos como los primeros pasos postneoliberales, trajo consigo visiones de desarrollo más proclives a promover la economía de los sectores populares subalternos. Mucha tinta corrió en muy corto tiempo sobre las nuevas visiones civilizatorias que supuestamente estarían gestándose, casi todas inspiradas en las formas y modos de vida de campesinos e indígenas que tendrían potencial para instaurar economías comunitarias alternativas al capitalismo. El término “Vivir Bien”, se hizo muy popular a pesar de su conceptualización ambigua e imprecisa y fue utilizado ampliamente para la adopción de varios principios constitucionales. “Madre Tierra” es otro concepto igualmente popular que enarbola planteamientos anticapitalistas, otorgando derechos a la naturaleza para contrarrestar los efectos negativos (sobre todo de tipo ambiental) del modelo desarrollista dominante. Ambos términos tienen en común su relación estrecha con la agricultura y sociedad campesina e indígena, con las cualidades atribuidas a la misma en el sentido de que no está orientada hacia la acumulación ilimitada ni depreda los recursos naturales al ritmo que lo hace la sociedad capitalista.

Aunque no está libre de críticas, el gobierno de Evo Morales desafió y confrontó la creencia neoliberal de que los subsidios estatales no eran deseables porque causan ineficiencia y distorsiones económicas, además de corrupción en el manejo de los recursos públicos y, por supuesto, incrementos innecesarios en el gasto público. Varios programas productivos fueron implementados desde 2006

para que los pequeños productores tuvieran mejor acceso al crédito, seguro agrícola, a los servicios agropecuarios, riego, fertilizantes, semillas seleccionadas y otros. Esto ocurrió también en un contexto favorable de crecimiento sostenido de los precios internacionales de materias primas y petróleo, que en nuestro caso se tradujo en mayores ingresos públicos por la exportación del gas<sup>1</sup>.

Es difícil señalar cual hubiese sido el desenlace de estos esfuerzos iniciales ya que hacia finales de 2010 e inicios de 2011 la política agropecuaria cambió de rumbo ante los conflictos económicos y sociales acaecidos frente a la medida gubernamental –conocida como el “gasolinazo” de 2010– de incrementar el precio interno de los combustibles. En mucho, la medida estaba orientada a reducir el gasto público en subvenciones al precio del diésel que beneficiaba mayormente al sector agrícola mecanizado del oriente. Dado que Bolivia depende de importaciones de diésel, la subida del precio internacional de petróleo había afectado seriamente al presupuesto público. El anuncio de la subida de los precios de los combustibles desató una ola masiva de protestas que no duró más de cuarenta y ocho horas pero fue suficiente para que el gobierno anunciara la anulación de las medidas que había adoptado cinco días atrás. Este evento tuvo repercusiones hasta entonces invisibles en cuanto a la cuestión de inseguridad alimentaria: inmediatamente se produjo escasez, especulación y elevación de los precios de alimentos. Si algo desató la protesta social fue el efecto inmediato e inevitable de la disposición gubernamental sobre los precios de alimentos. De forma paralela, el sector empresarial del oriente exhibió su indudable capacidad de control del mercado interno de alimentos al paralizar las cadenas de suministro con el objetivo político de que la

---

1 El año 2005 la renta petrolera por concepto de actividades de exploración y explotación alcanzaba la suma de 685 millones de dólares americanos. Los cambios legales introducidos por el gobierno de Evo Morales para aumentar la participación estatal y la elevación de los precios internacionales permitieron generar una renta de 1.472 millones al año siguiente (2006) y el 2010 los ingresos por este concepto alcanzaron 2.092 millones de dólares americanos. Es significa un crecimiento de 205 por ciento o, lo que es lo mismo, se triplicó en cinco años (Chávez 2013).

población se vuelque a las calles, las medidas de reducción del subsidio al diésel se anulen y así mantener los privilegios económicos del sector.

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) fue una de una veintena de empresas públicas que se creó durante los primeros años del gobierno de Morales con el objetivo de promover la producción, transformación, comercialización y estabilización de los precios de alimentos. Luego de los sucesos de 2011, sus operaciones se centraron todavía más en el agro del departamento de Santa Cruz, llegando a ejecutar en esta región hasta el 87 por ciento de su presupuesto (Córdova y Jansen 2013). Esto no necesariamente implica una transferencia directa de fondos al sector agroindustrial dado que la inversión pública de EMAPA estuvo dirigida a productores de las zonas de colonización (Cuatro Cañadas, Yapacaní, Mineros, San Pedro, San Julián y otros). Sin embargo, dado su condición de pequeños productores acoplados de forma subordinada a la lógica de producción sojera y oleaginosas, el apoyo estatal acabó siendo una apuesta pragmática para reforzar el modelo del agronegocio cruceño a fin de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del país.

De esta manera, los proyectos iniciales de promover las lógicas y técnicas (compatibles con el medio ambiente) de producción campesina y comunitaria fueron diferidos y posiblemente abandonados de forma definitiva. Esto significa que el retorno del Estado hacia el sector agropecuario tiene sus propias características y complejidades. Por un lado, la incursión explícita del Estado a partir del año 2006 en la producción de alimentos refleja una ruptura innegable con la lógica neoliberal de no otorgar subvenciones<sup>2</sup> y de no interferir en los precios de mercado para que la regulación más bien esté sujeta a las leyes del libre mercado. A partir de 2006, el Estado no

---

2 Paradójicamente, las premisas de libre mercado de no intervención ni subvención convivieron en la práctica con permanentes transferencias de fondos públicos a sectores empresariales vinculados al poder político. Un caso concreto es el precio subvencionado del diésel que principalmente sirve para abaratar los costos de producción para el agro mecanizado desde el año 1997.

solo invierte más en la agropecuaria sino que implanta progresivamente mecanismos de regulación de precios y cupos de exportación de alimentos. Asimismo el Estado se constituye en un aliado promotor del modelo agroindustrial que principalmente produce materias primas para la exportación. En otras palabras, la política vigente no tiene coherencia con los planteamientos de soberanía alimentaria en base a la producción tradicional de los campesinos e indígenas y en base a la promoción de productores a pequeña escala. Finalmente, las políticas públicas favorables a la agro empresa (caminos, electrificación, saneamiento de tierras, condescendencia con el uso de transgénicos) generan relaciones y alianzas políticas que refuerzan más la dependencia alimentaria de los bolivianos de la producción agroindustrial, en desmedro del sector campesino e indígena.

### **1.1. El contexto global de la crisis alimentaria**

El éxito del modelo agroexportador cruceño tiene estrecha relación con el *boom* internacional de producción de materias primas agrícolas (Pérez 2007, Colque 2014). Esto significa que el reciente desarrollo del agro boliviano está conectado al crecimiento de la demanda global por alimentos y materias primas agrícolas. En el caso boliviano se trata del crecimiento del clúster agroindustrial de soya y otras oleaginosas que se exportan mayormente en calidad de productos no procesados o semi-procesados pero no como alimentos procesados o industrializados. El precio internacional de la soya es cada vez más atractivo desde hace varios años ante el crecimiento de la demanda global, el auge de la economía de países emergentes como China y los usos alternativos que tienen los productos agrícolas en calidad de biocombustibles o alimentos para la industria de producción de carnes y derivados. Todo esto también es conocido en algunos debates como el consenso de los *commodities* (Svampa 2013, Katz 2008).

Dependiendo de los precios volátiles de materias primas, esta dinámica extractivista no es nueva para América Latina pero acentúa la dependencia de la extracción y exportación de materias primas que abarcan tanto recursos no renovables (minería, hidrocarburos)

como aquellos considerados renovables (extractivismo agrario y forestal). Pero fundamentalmente se trata de procesos económicos liderados por capitales transnacionales e inversiones orientadas a controlar la renta extractivista antes que procesos de transformación productiva o la industrialización de esas materias primas. Las inversiones en compras de tierras se centran en expandir los cultivos ‘promisorios’ como caña de azúcar, palma aceitera, maíz y soya. También las empresas transnacionales controlan decisivamente los procesos de acopio y transporte.

Es evidente que el extractivismo no afecta ni beneficia por igual a todos los países de la región (Veltmeyer 2015). Brasil es uno de los productores de soya y biocombustibles más importantes del mundo con aspiraciones de constituirse en el nuevo polo hegemónico en el Sur, seguido muy de cerca por Argentina. Por tanto, su relación con los vecinos pobres como Bolivia tiene connotaciones propias. En términos de la economía agroindustrial, los gigantes vecinos tienen una influencia muy importante sobre el curso del negocio sojero y las políticas públicas agropecuarias que el Estado boliviano adopta con asistencia técnica de Brasil (Córdova y Jansen 2013). Esto no necesariamente implica que Brasil sea el principal importador de nuestras materias primas agrícolas debido a que el tamaño del agro boliviano es marginal en comparación con las operaciones que tiene el sector agroindustrial brasileiro. Bolivia es receptora de capital, tecnología y conocimiento que desarrollan los países vecinos para la expansión del agronegocio. En estas circunstancias las lógicas económicas que se imponen más bien tienen el propósito de expandir inversiones y operaciones de capital transnacional hacia nuevos territorios y sectores económicos a fin de mercantilizar más tierras y recursos naturales.

## **1.2. Dependencia alimentaria del comercio exterior**

Uno de los argumentos que sigue siendo utilizado en la discusión de políticas de seguridad alimentaria de parte de los gremios de empresarios es que el comercio exterior de alimentos –libre de restricciones– garantizará un mayor nivel de acceso y disponibilidad

de alimentos para la población boliviana. El argumento es que una mayor especialización en la producción genera mejores oportunidades económicas en el mercado internacional, por tanto asegura un mayor nivel de ingresos para la economía interna y mayores posibilidades de acceso al conjunto de alimentos que se requiere. Esta proposición fue proclamada por sus defensores bajo el slogan de “exportar o morir” para presionar a los distintos gobiernos a liberalizar el comercio internacional en el sector agropecuario. Precisamente, uno de los resultados de esta política es el *boom* del sector sojero y de oleaginosas, la llegada de capitales transnacionales al sector y la consecuente implantación del modelo agroextractivista.

Varios autores explican que las exportaciones funcionan como salvavidas, pero con limitaciones y bajo ciertas circunstancias (Chang 2009). En efecto, una mayor especialización en un determinado ramo aumenta la competitividad y esa ventaja diversifica las fuentes de divisas, por tanto, cualquier país tendría mayor capacidad de importar alimentos a precios más competitivos frente a los precios de los productos nacionales. Pero esta situación solo se presenta en el largo plazo cuando los países alcanzan un determinado grado de desarrollo económico, es decir con industrias propias y un sector manufacturero consolidado. Por el contrario, en países pobres como Bolivia, la dependencia de divisas generadas por la exportación de materias primas implica un alto riesgo debido a que una caída de los precios internacionales –así sea por corto tiempo– podría afectar seriamente la capacidad de importación de alimentos y provocaría cambios negativos en la nutrición particularmente de los niños, con consecuencias irreversibles. Una excepción sería que el Estado tenga muy altos niveles de reservas internacionales netas (RIN), como ocurre en Bolivia, “ahorros” que pueden ser usados en compras de alimentos, durante períodos más o menos largos. Sin embargo, estas políticas continuarán debilitando el aparato productivo de alimentos diversificados hasta su desmantelamiento.

También habría que añadir que la población más vulnerable como los campesinos e indígenas de tierras altas –excepto algunos sectores como los quinueros– no juegan papel alguno para la exportación.

Los productos tradicionales como la papa, maíz y algunos granos tienen muy baja productividad, no son atractivos para la exportación, ni existen servicios e infraestructura adecuada para acceder a precios viables al mercado exterior. La inseguridad alimentaria es mayor aún para este sector tomando en cuenta que no es el sector prioritario ni estratégico para las políticas públicas y asignación de recursos públicos que más están guiadas por la idea de potenciar ciertos rubros de exportación. Si esto continúa, obviamente se acabará minando todavía más las potencialidades productivas del sector campesino e indígena, con el consiguiente riesgo de generar problemas mucho más serios para un sector rural ya empobrecido y dependiente de las importaciones de alimentos (Prudencio 2014).

El deterioro de la agricultura campesina e indígena que es la base material de la población rural pobre se traduce en el permanente flujo migratorio campo-ciudad que además ocurre en un contexto de limitado e incipiente desarrollo de sectores económicos no agrarios. Aquí es más perceptible que el bajo o nulo desarrollo industrial del país hace casi imposible la absorción de la fuerza laboral expulsada de las zonas rurales más pobres que no pueden especializarse ni embarcarse en la economía de la exportación. Por tanto, la pobreza se reproduce en los ámbitos urbanos y se refleja en la urbanización de periferias donde el migrante apenas crea sus propias fuentes de empleo informal y precario y no tiene acceso suficiente a los servicios básicos y –en muchas situaciones y momentos– está obligado a mantener sus lazos sociales y económicos con la agricultura campesina para subvencionar parte de su alimentación. Estos temas, a pesar de la gravedad que revisten, no han sido parte importante de los debates y del análisis de las recientes políticas agropecuarias que más bien tienden a resolver inestabilidades de corto plazo pero con altos costos sociales para los grupos más vulnerables.

### **1.3. Políticas de mitigación y gasto social en el sector rural**

El quiebre del sistema político boliviano ocurrido en 2006 (la emergencia de un gobierno hegemónico con propuestas de transformación y cambio con alto contenido social), junto al crecimiento significativo

en los ingresos públicos por la venta del gas, han permitido implementar políticas de inversión social para reducir los niveles de pobreza extrema y mitigar los efectos de las políticas de ajuste económico que fueron puestas en marcha a mediados de los años noventa. En esencia, son bonos y transferencias directas de recursos públicos a familias pobres (Renta Dignidad, Juancito Pinto, Juana Azurduy), recursos públicos para proyectos agropecuarios (riego, seguro agrícola, asociaciones de productores) e incremento en el presupuesto de los gobiernos municipales. Este mayor gasto social ha traído consigo importantes resultados en términos de mejoramiento de los índices de escolaridad, reducción de la extrema pobreza y mayor acceso a servicios de salud, entre otros.

En el sector productivo y al margen de que las mayores inversiones se concentran en Santa Cruz, existe una diversidad de programas agropecuarios orientados a mejorar la agricultura campesina e indígena. Todos apuntan en mayor o menor grado a subvencionar los servicios de extensión rural para incrementar los niveles de productividad y producción orientada al mercado. En muchos casos son programas fragmentados y sectoriales que funcionan a modo de pequeños proyectos gestionados al estilo de las organizaciones no gubernamentales (ONG) para potenciar algunos nichos productivos (Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria, PASA; EMPODERAR-PAR, Alianzas Rurales, Desarrollo Integral con Coca (DICOCA), SUSTENTAR; Manejo de Recursos Naturales y otros). También están algunos proyectos autogestionados por organizaciones campesinas e indígenas y promovidos con recursos provenientes del Fondo Indígena para financiar nuevas iniciativas productivas, compras de insumos y generación de capital de arranque para proyectos comunitarios.

Sin embargo, este tipo de intervenciones estatales deben ser valorados con cautela debido a que conllevan varias limitaciones de carácter estructural. Una ya mencionada es, en efecto, el hecho que se trata de presupuestos comparativamente mucho menores frente a las subvenciones y apoyos que por otro lado el gobierno otorga al sector agroindustrial. Mencionemos otras.

Primero, la contradicción persistente es, por un lado, la apuesta gubernamental por potenciar el modelo productivo de agronegocio para garantizar la seguridad alimentaria y, por otro lado, los numerosos y dispersos programas productivos a pequeña escala entre los productores campesinos e indígenas para alivianar los efectos del modelo dominante. El problema de fondo es que se trata de compensaciones temporales y sin perspectivas reales de consolidar un modelo de producción de alimentos basado en la agricultura campesina e indígena. Segundo, los pequeños proyectos productivos están guiados por los nichos de mercado y por la ‘viabilidad’ de ciertos enclaves territoriales. Básicamente la demanda internacional por determinados productos define las inversiones e iniciativas productivas priorizadas, las ventajas competitivas son determinantes para la inversión pública, al igual que el enfoque empresarial de los proyectos productivos. Tercero, cada vez es más evidente que a nivel gubernamental no hay un consenso respecto al papel de los agricultores campesinos e indígenas como la base en torno a la cual construir la seguridad alimentaria nacional.

Lo que persiste –como ocurría en años anteriores a 2006– es una combinación contradictoria por un lado entre programas de apoyo al agronegocio y a los pequeños productores conectados al mismo y por otro lado programas de carácter social para la mitigación de los efectos negativos del modelo económico de carácter extractivista sobre los pequeños productores rurales que aún viven de la agricultura tradicional y de ingresos extraprediales provenientes de la economía informal.

## **2. Campesinos y su condición de productores primarios**

La evidente inclinación del Estado (2006-2015) a favorecer la producción agroindustrial de alimentos y de materia prima agrícola de exportación –casi siempre vinculada a cultivos genéticamente modificados– menoscaba el potencial del campesino reduciéndolo a productores primarios de algunos alimentos marginales. En la práctica este sector rural no juega un rol importante en la cadena de

transformación de alimentos y su comercialización. Un caso excepcional es el sector lechero de familias campesinas que crían ganado con este propósito, transforman la leche y están conectados a las redes de distribución de alimentos lácteos y derivados. Pero la situación más común es que existen muchos campesinos dedicados a la producción primaria de cultivos tradicionales y pocos agricultores familiares a cultivos con mayor valor de mercado como la soya, quinua o coca.

### **2.1. Pequeños sojeros, cocaleros y agricultores de subsistencia**

El caso de los pequeños productores familiares sojeros de Cuatro Cañadas evidencia que si bien es un sector rentable conectado al agronegocio, los campesinos colonizadores se limitan a vender los granos cosechados a los acopiadores e intermediarios, quienes los almacenan en silos de escala industrial, los semi-procesan y transportan al mercado externo. En el ciclo de mayor actividad agrícola, la campaña de verano, el 90 por ciento de los campesinos siembra soya mientras que durante el ciclo menor, la campaña de invierno, la mayor parte de las tierras están dedicadas a otros cultivos: 50 por ciento para sorgo, 25 por ciento para maíz y 20 por ciento a girasol (Castañón 2014). En todos los casos se trata de productos primarios que los campesinos venden en grano al sector empresarial encargado de su transformación y comercialización. Muchos son los casos de agricultura por contrato, en que las empresas proveedoras de insumos –que les otorgan créditos en especie a los pequeños productores: semillas, fertilizantes, herbicidas, maquinarias y equipos– toman control sobre toda la cosecha. Aunque el negocio sojero genera movimientos económicos muy significativos, la mayoría de estos pequeños productores tienen que dedicarse también a generar ingresos por otros medios complementarios, ya sea alquilando parte de sus tierras o empleando temporalmente su fuerza laboral en áreas urbanas de la región cruceña (Ibíd).

El sector de campesinos productores de coca tampoco escapa a este circuito reducido aunque en este caso tiene sus particularidades

dado que la hoja de coca destinada al acullico no es objeto de industrialización o procesamiento, aunque sí en el mercado ilegal, cuando se transforma en droga. El caso de Yanacachi en Los Yungas de La Paz muestra que la especialización de los campesinos cocaleros conlleva dedicación a tiempo completo desde la preparación de suelos, almácigos, transplantado, cuidados fitosanitarios y otros hasta llegar a la etapa final de secado de la hoja de coca y embolsado en taques para su venta en los almacenes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) (Urioste 2014). La coca que obtiene el campesino que está destinada al acullico, prácticamente no requiere ningún procesamiento posterior. Pero cuando la hoja de coca es desviada al mercado ilegal de producción de cocaína se convierte en el principal insumo o materia prima para la producción de este estupefaciente. Aunque en el país ha habido y todavía existen intentos de parte del Estado de industrialización de la hoja de coca para combatir su uso ilegal y crear un mercado alternativo de productos alimenticios y medicinales en base de este arbusto, estos esfuerzos no han prosperado ni alcanzado niveles expectables. Esto muestra que no toda la producción campesina es ni tiene que ser objeto de procesamiento o industrialización para ser rentable.

Para cerrar los ejemplos, tomemos el caso de Villa Serrano en los valles de Chuquisaca que podría resultar representativo de los agricultores campesinos orientados a la diversificación de su producción agropecuaria. Aún mantienen técnicas de rotación y diversificación de cultivos para obtener una variedad de alimentos, pero además el maní o el ají que se produce en la zona puede fácilmente intercambiarse por otros productos tradicionales como la papa, maíz o trigo que se produce en otras comunidades aledañas (Jaldín 2014). No todo lo producido es destinado al autoconsumo sino que son cultivos que se trazan en mercados locales o regionales entre campesinos y población urbana cuya alimentación en algún grado depende de ciertos productos de origen campesino. Dato que el procesamiento o la transformación no son necesarios, este tipo de productos que están destinados mayormente al consumidor final.

## 2.2. Los obstáculos para el procesamiento de alimentos

¿Por qué la producción campesina está circunscrita al sector primario? Es importante señalar que esta no es una situación nueva sino histórica al menos desde la época de la Reforma Agraria de 1953. El procesamiento de alimentos se puede asociar a un campo limitado de prácticas tradicionales como el deshidratado de la papa (chuño, tunta) y otros tubérculos, secado de carne ovina, bovina y de camélidos, usos múltiples del maíz incluyendo producción de chicha o de forrajes cuyo fin es la crianza de ganado. Lo que sí ha cambiado de forma muy notoria es la presencia creciente de alimentos procesados por la agroindustria del oriente en la canasta alimentaria de los consumidores finales, incluyendo la canasta alimentaria campesina. Estos productos provienen del sector agroindustrial y también llegan vía importaciones de alimentos (legal o ilegal) desde países con mayor tradición como productores de alimentos procesados, enlatados y frescos como Perú, Chile y Brasil. En consecuencia, lo que destaca con mayor fuerza es la relación muy estrecha entre el campesinado y la producción primaria con participación marginal en el mercado nacional de alimentos.

Ingresar en el terreno de la transformación de alimentos es un reto económico y técnico por demás complicado para los campesinos. Experiencias de algunos esfuerzos gubernamentales y de organizaciones no gubernamentales pueden proveer valiosa información para el análisis, aunque este trabajo no tiene ese alcance. Sin embargo, para ilustrar tomemos algunas experiencias conocidas y comunes de los últimos años.

Además de la lechería (quesos, yogures caseros, helados), un esfuerzo recurrente ha sido el procesamiento de productos cárnicos para elevar el valor agregado de la actividad pecuaria campesina. Lo usual es la venta del ganado en pie y en realidad los intermediarios son quienes proveen ganado a los mataderos de los centros urbanos, mismos que distribuyen la carne a los mercados de consumo final y al mercado intermedio de procesadores de carne. A fin de que el campesino participe en una parte significativa de esta

cadena, con el apoyo estatal y de algunas ONG se han instalado mataderos rurales, organizando tanto a ciertos grupos de campesinos para su manejo y administración como a campesinos ganaderos para que sean proveedores estables de ganado. Sin embargo, este tipo de centros de transformación no se han caracterizado por su sostenibilidad a menos que tengan algún tipo de subvención o apoyo externo. La historia más común es que los mataderos rurales son abandonados al poco tiempo de iniciado su funcionamiento debido a varios problemas técnicos, logísticos y administrativos que no se han evaluado ni estudiado cuidadosamente. También el esfuerzo de llevar el control del negocio cárnico más cerca del campesinado ha tenido otro tipo de implicaciones operativas como la necesidad de reorganizar o crear nuevos canales de comercialización para llegar hasta los consumidores finales. Como es de esperar, ello tiene más complicaciones que posibilidades de consolidación, dado que este tipo de iniciativas sigue siendo marginal o puntual.

Otra experiencia de transformación de alimentos está relacionada con el procesamiento de frutas y elaboración de alimentos envasados (mermeladas, jugos, miel) para promocionar la economía de los campesinos de los valles interandinos. Muchos de estos productos se comercializan con el sello de productos orgánicos o ecológicos sin aditivos, conservantes y químicos que no son recomendables para la nutrición adecuada. Generalmente su nicho de mercado son los consumidores *gourmet* que valoran este tipo de productos y tienen mayor capacidad adquisitiva que el promedio. Esto significa que tienen una participación marginal y hasta circunstancial en el mercado. Una razón es que este tipo de iniciativas en realidad están retando y disputando el lugar que retienen algunos alimentos importados. Y dado que también es común que sean importación de contrabando, se venden a precios altamente competitivos anulando cualquier esfuerzo por incentivar la industria local y nacional. Desde luego que existen algunos casos de industrias nacionales con cuotas relevantes de participación en el mercado nacional pero no son representativas de cadenas de transformación que tengan por distintivo el estar conectados de forma directa o estrecha al pequeño productor rural.

### 2.3. Articulación al mercado

En suma, en líneas arriba hemos planteado que quienes se dedican a la agricultura campesina e indígena no trascienden la dinámica primaria de preparación de campos de cultivo, siembra y cosecha. Los principales productos agrícolas y pecuarios que obtienen se almacenan, venden y consumen principalmente sin que hayan sido transformados en calidad de alimentos procesados o industrializados. Como hemos ilustrado, esto no quiere decir que el procesamiento esté del todo ausente en la economía campesina sino que es una parte más bien de alcances limitados.

Sobre todo los casos de soya y coca –también se puede decir lo mismo de la quinua, pequeños cañeros y otros que no han sido parte de los estudios de caso de este trabajo– revelan que los productores primarios pueden estar articulados estrechamente al mercado, es más, pueden producir casi de forma exclusiva para el mercado y con tasas de rentabilidad por encima del promedio del sector. El procesamiento en sí no hace falta porque de lo que se trata es de suministrar materia prima al sector agroindustrial nacional o internacional. Es materia prima que no está limitada al sector productor de alimentos procesados sino que cada vez tiene más usos múltiples y flexibles en el sector industrial (biocombustibles, cosméticos, aceites industriales, estupefacientes en el caso de la coca) y producción de distintas variedades de carne a mayor escala. En otras palabras, son productos intermedios para distintos fines articulados casi siempre al sector (agro) industrial y más recientemente a las cadenas de supermercados.

Algunos productos de origen campesino, aunque no sean rentables, también circulan en circuitos reducidos de mercados locales y regionales. Ciertos tubérculos, granos, frutas y hortalizas son producidos por los campesinos para su consumo propio y los excedentes se destinan al mercado. En este caso, no hace falta que tengan la condición de materias primas para la articulación al mercado debido a que sobre todo son productos que circulan y se intercambian localmente con los consumidores finales, muchos de ellos también campesinos,

población de origen campesino y sectores empobrecidos. La articulación no está guiada por la renta que se puede obtener sino más bien por la necesidad y el interés de diversificar la canasta básica alimentaria. Esto en parte puede explicar que los cultivos con estas características no se inclinen a la especialización.

Entonces podemos señalar que la articulación de los productores primarios presenta diversidad de situaciones y hasta probablemente sean intereses divergentes. Por un lado, cuando lo que se transa en el mercado es materia prima, el patrón productivo tiende a la especialización, monocultivo y articulación subordinada a los mercados grandes (ampliados) controlados por el capital. Pero si se trata de mercados de bienes o alimentos finales, las formas de producción campesina se mantienen diversificadas, pobremente capitalizadas y sin permitir procesos de acumulación o crecimiento económico familiar. Por tanto, las dinámicas de transformación agraria si bien pueden ser más visibles con la expansión de monocultivos rentables, estos procesos no se extienden hacia toda la cadena productiva ni todos los sectores campesinos. De algún modo la línea de continuidad se mantiene en la “primarización” de la agricultura campesina e indígena que genera excedentes económicos para un sector minoritario en desmedro y deterioro de la mayoría de quienes trabajan directamente la tierra y operan en base a su fuerza de trabajo familiar.

### **3. Campesinos y su condición de consumidores de alimentos procesados**

Según la información primaria recogida, al parecer la calidad de productores primarios de los campesinos está acompañada por su condición cada vez más notoria de consumidores de alimentos procesados. Desde luego en distintos grados y niveles, los estudios de caso muestran el peso manifiesto y creciente que los productos provenientes del sector agroindustrial tienen en la canasta alimentaria. Este peso es perceptible en términos de cantidad, frecuencia de consumo, niveles de gastos y diversidad.

Alimentos como el azúcar, arroz, fideos, panes, aceites, refrescos azucarados e incluso carnes, ocupan un lugar cada vez más importante en la seguridad alimentaria de las familias rurales. Los negocios y ferias locales se caracterizan por constituirse en mercados que están al alcance de las familias campesinas para el suministro de este tipo de productos. Son considerados bienes de primera necesidad desde hace varios años tanto según la percepción de los propios campesinos e indígenas como según los indicadores del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la canasta alimentaria. Según la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 2007, en el grupo de alimentos, más del 50 por ciento de los gastos de hogares se concentra en la adquisición de siete alimentos: pan corriente, carne de res con hueso, papa, carne de pollo (entero), carne de res sin hueso, arroz y bebidas gaseosas<sup>3</sup>. Si extendemos la lista a los primeros 15 productos con mayor importancia en el gasto de los hogares, los alimentos que siguen son aceite, fideo, azúcar granulada, leche pasteurizada, tomate, cebolla, carne de res molida y huevo de gallina. De ahí resulta evidente la importancia que tienen los alimentos procesados o provenientes del sector agroindustrial, incluyendo las industrias cárnicas y aves.

Como es de esperarse, la composición de la canasta alimentaria tiene una correlación directa con la capacidad adquisitiva de los productores dado que a mayores ingresos corresponde una mayor tasa de acceso, gasto y consumo de alimentos procesados. Pero incluso entre la población rural más pobre y alejada se observa que la penetración de alimentos de origen industrial en la canasta alimenticia es considerable, en algunos casos con tendencia a desplazar a los productos de origen campesino. Varias particularidades deben tomarse en cuenta en el análisis porque no siempre se puede reemplazar alimentos de origen campesino por alimentos industriales o a la inversa. Por ejemplo, el azúcar es un endulzante que no tiene sustituto como tal excepto edulcorantes como la "stevia" que a futuro quizá podría producirse y consumirse con más frecuencia en algunas regiones rurales del

---

3 El resto de los gastos se destinan a 107 productos de un total de 114 productos que tiene el listado de la canasta IPC de 2007 del INE.

país. El consumo extendido de otros productos como el arroz, el pan, los fideos o el aceite de soya o girasol es muy probable que continúe con tendencia ascendente debido a que facilitan la preparación de alimentos, además de introducir sabores de mayor preferencia para los consumidores, por ejemplo a través de las frituras.

### **3.1 El peso creciente de los alimentos procesados en la canasta alimenticia rural**

Los datos provenientes de la encuesta aplicada en cinco municipios confirman que los cambios en la composición de la canasta básica están definidos por una mayor importancia de los alimentos procesados en los hogares campesinos e indígenas. Una inquietud que requiere respuestas es obviamente el por qué algunas familias campesinas consumen más alimentos procesados y cómo este cambio afecta su seguridad y soberanía alimentaria.

Comenzando por los casos más conectados al mercado de alimentos, tenemos a los hogares de campesinos colonizadores de Cuatro Cañadas en la zona de expansión de Santa Cruz. Como ya se señaló arriba y en los estudios de caso, se trata de campesinos que utilizan casi toda la tierra, capital y fuerza laboral para producir soya por su alta rentabilidad. Esto significa que son altamente dependientes del mercado para proveerse de alimentos, incluso de productos que técnicamente podrían producirlos en sus parcelas. El cambio se resume en que en esta región el abastecimiento propio de alimentos ha sido abandonado y prácticamente todo lo que consumen se compra en el mercado (89,6 por ciento para ser más precisos). En términos de capacidad adquisitiva no tienen grandes dificultades debido a los ingresos estables que tienen por la venta de la soya. Los hogares más pobres tienen menores niveles de consumo de carnes, frutas, leguminosas y lácteos. Un dato llamativo es que tanto hogares con mayor capacidad adquisitiva como los más pobres tienen en común el consumo deficitario de lácteos, que afecta los niveles de nutrición. El consumo de la papa como alimento básico es muy visible pero expresa también diferenciaciones sociales ya que para los hogares pobres es un producto más bien suntuario (Castañón 2014).

Los campesinos cocaleros de Yanacachi en Los Yungas del Sur también acabaron consolidando un modelo similar a Cuatro Cañadas. Compran el 85 por ciento de los alimentos que consumen y el resto son alimentos nativos como la yuca, waluza, racacha, plátanos y zapallos cultivados en pequeñas huertas familiares. La producción propia de alimentos ha dejado de ser una prioridad y es considerada como una labor marginal de la que deben ocuparse solo las mujeres ya que la mayor parte de la fuerza de trabajo está destinada a la producción de la coca o a la minería y en otros casos a la floristería. La dieta diaria del campesino cocalero está compuesta por azúcar, aceites, papa, cebolla, pan, arroz, fideos, refrescos y pollo. Probablemente son productores con un nivel de autoabastecimiento algo mayor en relación a sus pares de Cuatro Cañadas pero su mayor dependencia del mercado de coca y alimentos implica también mayor consumo de alimentos industriales. Los mercados locales de alimentos se caracterizan por la presencia de comerciantes especializados en la venta de alimentos procesados mientras que los productos tradicionales de origen campesino (yuca, racacaha, waluza, plátano) tienen menor presencia e importancia económica. Además de los mercados locales, otro mercado de alimentos de importancia es la ciudad de La Paz donde se aprovisionan al por mayor especialmente de alimentos secos posibles de almacenar por periodos prolongados (arroz, fideos, aceites) (Urioste 2014, 2013).

El estudio sobre la seguridad alimentaria de Rurrenabaque en el norte amazónico de La Paz introduce nuevos elementos de valoración. Los campesinos de esta región no están en la situación de los dos casos mencionados ni se parecen a los otros dos casos de autoabastecimiento que veremos más adelante (Villa Serrano y TCO Guaraní). Más bien se trata de una economía campesina con fuentes de ingresos diversificados y capacidad adquisitiva aceptable. Es importante no perder de vista que el 63 por ciento de sus ingresos provienen casi por igual de la venta de productos agrícolas (27,3 por ciento), venta de ganado (20,8 por ciento) y jornales (14,8 por ciento) (Pérez 2014). Alimentos básicos como carnes, huevos o incluso lácteos son relativamente accesibles debido a los precios también relativamente bajos por la importancia que tiene

la ganadería en la región o porque los grupos de campesinos vulnerables tienen acceso a carne de monte. Otros productos como tomate, papa, pan son consumidos mayormente por los campesinos “acomodados” mientras que los “vulnerables” optan por sustituirlos por alimentos localmente producidos como la yuca y el plátano. Por supuesto que los productos procesados como el arroz, azúcar y aceites son componentes importantes de la canasta alimentaria de los hogares de esta región pero el consumo más bien diversificado en los términos arriba mencionados limita el consumo extendido de este tipo de alimentos. Es decir, no solo consumen productos procesados. En consecuencia, es una situación regional de mayor seguridad alimentaria, a base de ingresos diversificados y consumo de alimentos también variados, unos producidos localmente y otros comprados.

El caso de Villa Serrano en los valles de Chuquisaca es la situación típica de las comunidades campesinas de la región andina que viven en contextos de pobreza y a base producción para el autoabastecimiento. Sin embargo, no se trata de economías paralizadas en el tiempo con una situación económica y alimentaria similar a los años setenta y ochenta del siglo pasado. Si bien compran alimentos como azúcar, arroz, aceite, fideos, carne roja o plátanos; muchos otros productos provienen de la producción propia e intercambio en mercados campesinos regionales y locales. Este caso muestra la importancia del acceso a los distintos pisos ecológicos intermediados por ferias y mercados campesinos. Así, mientras unos producen maíz, cítricos y hortalizas en las zonas templadas, otros producen papa, trigo o crían animales en las zonas altas. El gasto en alimentos procesados es mayor cuanto más conectados estén a los mercados de los centros urbanos, algo que les permite en paralelo más ingresos por empleos temporales. Esto se revierte en las comunidades más alejadas que disminuyen el gasto en alimentos comprados, acuden más a la producción propia y local diversificada pero también los niveles de inseguridad alimentaria aumentan. Las familias pobres que dependen menos de productos procesados tienen una dieta pobre en azúcares, carnes, frutas, leguminosas y lácteos (Jaldín 2014).

Por último, el caso de los indígenas de la TCO Guaraní de Machare-tí, expone una situación similar a Villa Serrano pero en el contexto del Chaco boliviano. Es una realidad muy particular y distinta de las otras porque el 77 por ciento de los alimentos consumidos provienen de fuentes externas pero se basa en ingresos monetarios muy bajos que provienen de la combinación de venta de excedentes agrícolas y fuerza de trabajo en actividades eventuales, generalmente como peones. El mercado no es espacio de intercambio entre campesinos, (como en Villa Serrano) sino que los indígenas guaraníes adquieren alimentos industriales. Paradójicamente, la dependencia del mercado incluso alcanza a productos tradicionales de la región como el maíz cuya producción propia es insuficiente de modo que tienen que comprar cerca de un tercio de los requerimientos de maíz en los mercados regionales. Los niños y jóvenes están expuestos al consumo de alimentos procesados como gaseosas, galletas, bebidas lácteas y similares en bolsitas o el pollo frito. El consumo de leguminosas apenas alcanza al 2 por ciento y de lácteos al 1 por ciento (Eyzaguirre 2014).

### **3.2 Origen de los alimentos procesados**

En base a lo revisado hasta ahora es posible concluir que los alimentos procesados de mayor importancia para los productores campesinos e indígenas son el azúcar, arroz, aceites y fideos. También están el pan, carne de pollo y bebidas gaseosas.

Aunque el valorar el origen de estos alimentos escapa a los alcances de este trabajo, es importante esbozar algunas reflexiones. No basta señalar que provienen del sector agroindustrial cruceño o se importan de otros países sino que hace falta al menos indagar sobre la diversidad de su origen y formas de procesamiento. Hemos afirmado que el sector agroindustrial boliviano crece, se transforma y tiene dinámicas que responden a la lógica del comercio internacional de materias primas agrícolas en condiciones de agroextractivismo. Sin embargo, como un subproducto de este proceso, el desarrollo agroindustrial también abastece y controla el mercado nacional o interno de alimentos a pesar de que no es su prioridad en términos

de ganancias económicas. De hecho, tiene relación más directa con temas de legitimidad y poder político porque el discurso de la élite del agro es que ellos en su condición de principales productores son quienes garantizan la seguridad y soberanía alimentaria de los bolivianos.

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria del INE de 2008, el 89,9 por ciento de caña de azúcar se produce en Santa Cruz y es allá donde están ubicados los principales ingenios o plantas azucareras. En Bolivia, la superficie sembrada alcanzó a 159 mil hectáreas y la producción a 8,3 millones de toneladas en la campaña agrícola 2012-2013 (INE 2009.). Esto significa que Bolivia tiene capacidad de autoabastecerse de este producto e incluso produce importantes excedentes para la exportación<sup>4</sup>. A inicios de 2011, el quintal de azúcar (46 kilogramos) se vendía entre 130 y 140 bolivianos pero hacia fines de ese mismo año alcanzó a 300 bolivianos en medio del conflicto por el “gasolinazo”. Después de este periodo, hacia 2014 el precio se estabilizó en 210 bolivianos aproximadamente. Esto significa que en el mercado interno se comercializa a un precio equivalente a 656 dólares americanos por tonelada, es decir, muy por encima del precio internacional que en 2014 alcanzó 440 dólares americanos por tonelada (50 por ciento más). Por eso no es casual que el gobierno haya dejado de subvencionar el precio del azúcar y que ahora los empresarios no puedan exportar cantidades significativas. Sin embargo, la Unión Agroindustrial de Cañeros SA (UNAGRO SA) sigue negociando reprogramaciones de créditos que tienen con el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) y se presentan ante la opinión pública como quienes se comprometen con el país y garantizan la provisión de azúcar para el 2015 y 2016 (Paredes 2015).

El arroz también se produce principalmente en Santa Cruz (82,6 por ciento, INE 2009). La superficie cultivada no supera las 200 mil hectáreas y es uno de los cultivos de “crecimiento lento”. El arroz era producido mayormente por pequeños productores en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Beni y en el norte de La Paz,

---

4 En años recientes se ha estado exportando alcohol metílico que luego –en los países de destino- es convertido en etanol para combustibles de automóviles.

pero en los últimos años se está convirtiendo en una producción a mayor escala, es decir se produce en unidades de superficies mayores a las 50 hectáreas y está siendo progresivamente apropiado por la agro empresa. Los colonizadores japoneses han jugado un rol pionero en la expansión de este cultivo a escala comercial. Tienen una relación histórica con las zonas de colonización, cooperativas de productores y diferentes programas oficiales de fomento implementados para alcanzar niveles de autoabastecimiento sostenibles (Ortíz y Soliz 2007). La mayoría de los ingenios arroceros son pequeños aunque también existen medianas plantas de procesamiento que acopian arroz de los productores y lo procesan para el mercado interno. En suma y entre los productos procesados de mayor consumo, el arroz ante todo proviene de una agricultura a pequeña y mediana escala que no está controlado por el capital transnacional como sucede en el sector de oleaginosas. Mediante EMAPA, el gobierno tiene un papel activo de acopio y venta a precios subvencionados para mantener precios internos bajos. Sin embargo, este control del precio es considerado como una política de desincentivo por parte de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (FENCA).

El aceite que consumen los hogares campesinos e indígenas proviene del sector oligopólico de industrias oleaginosas que a su vez está estrechamente vinculado a la producción y exportación de soya. Las principales industrias oleaginosas que controlan el negocio de la soya, también controlan la producción de aceite comestible de soya y girasol para el mercado interno (Colque 2014). Así, Industrias de Aceites S.A. (FINO) y ADM SAO son las dos empresas productoras de aceites más importantes (70 por ciento del mercado nacional) y están controladas por capitales transnacionales casi en su totalidad. Industrias Oleaginosas S.A. (IOL) es otra empresa aceitera controlada por capitales de la familia Marinkovic (Ibíd)<sup>5</sup>. En los últimos

---

5 Dentro del Cono Sur, Bolivia es el país que mayor proporción de soya procesada exporta, en forma de aceite semi refinado o crudo a países de la CAN, mientras que Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay exportan casi toda su soya en grano o poroto.

años, el gobierno nacional estableció regulaciones mediante certificados de exportación a fin de garantizar el abastecimiento interno a precios accesibles.

Para cerrar cabe mencionar el caso de la harina de trigo por su importancia para la producción de pan y fideos, es decir, para la disponibilidad de alimentos que son básicos en la canasta alimentaria de familias rurales y urbanas. Bolivia históricamente es dependiente de la importación de trigo para el abastecimiento interno. Como resultado de políticas públicas, acuerdos y estímulos con los gremios de productores del oriente (ANAPO) en los últimos años la superficie cultivada aumentó sostenidamente, de 87 mil hectáreas en 1990 a 188 mil hectáreas en 2011, lo que representa un crecimiento promedio de 5,5 por ciento por año (INE 2012). En términos de producción, aumentó de 61 mil toneladas a 238 mil toneladas (13,8 por ciento anual) en el mismo periodo. Sin embargo, a pesar de estos cambios en superficie cultivada y producción, Bolivia todavía importa trigo para satisfacer la demanda alimentaria. Según ANAPO, el consumo interno alcanza a 750 mil toneladas por lo que el déficit a cubrir alcanzaría a unos 550 mil toneladas por año (Arias 2014). La harina de trigo importada proviene principalmente de Argentina mientras que el trigo en grano de Estados Unidos. Una de las razones para que la producción interna no cubra la demanda del mercado interno son los altos niveles de productividad y rentabilidad que alcanza este producto en otros países que, sumada a las condiciones agroecológicas desfavorables del país, se convierte en un obstáculo estructural para reducir sustancialmente la dependencia del mercado externo. En todo caso, la Agenda Patriótica 2025 contempla la meta de lograr autosuficiencia en la producción de trigo dentro de 10 años.

Hemos visto que los principales alimentos procesados son producidos por la industria alimenticia boliviana que en las últimas décadas (desde 1985 vía DS 21060) se ha capitalizado a partir de la apertura de la economía nacional al comercio internacional. Una mayor oferta alimentaria se supone que influye significativamente en la composición de la canasta alimentaria incluso en las regiones

más alejadas del país. Las grandes empresas controlan las plantas de aceite comestible, los ingenios azucareros, las destilerías, las cervecerías y otros. Procesan soya, girasol, algodón, caña de azúcar y otros. La mayoría de la industria alimentaria está principalmente situada en Santa Cruz. Existen también varias unidades empresariales medianas y grandes dedicadas a los subsectores de frigoríficos, fábricas de lácteos (helados, yogures y quesos cada vez de mayor calidad), plantas embotelladoras de refrescos, procesadoras de arroz, fideos, producción de carne de pollo, carne roja y otros que se comercializan especialmente en grandes y modernos supermercados, además de las ferias rurales, desayunos y meriendas escolares. Es en este contexto de cambios recientes que debemos entender las transformaciones de la agricultura campesina e indígena.

### **3.3 ¿Aumentar la capacidad adquisitiva de campesinos e indígenas?**

Esta pregunta es una de las cuestiones centrales que está presente en el debate sobre cómo garantizar la seguridad alimentaria de pequeños productores de origen campesino e indígena. En este marco, por seguridad alimentaria entenderemos la habilidad de un hogar para adquirir los alimentos que se requieren aunque su efectiva adquisición depende del acceso suficiente a otros bienes y servicios básicos como vivienda, educación, transporte o servicios básicos (Pinstrup-Andersen 2009). La idea dominante –particularmente en las agencias multi y bilaterales– es que lo importante es mejorar los ingresos económicos de las familias a través de su inserción al mercado y la mercantilización de la tierra y cultivos campesinos porque ello permitirá disponer de ingresos monetarios mayores para adquirir, también vía mercado, todos los alimentos que se requieren. Esto en la práctica sucede en muchas circunstancias y contextos y particularmente cuando las economías nacionales están subordinadas a un contexto mayor que opera de acuerdo a las reglas de juego del libre mercado. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Están también quienes creen que exponer al mercado a los grupos vulnerables como los campesinos, en realidad deteriora su base productiva, provoca inserciones desiguales al mercado y aumenta las desigualdades y diferenciaciones campesinas. Debido a este tipo de

debates la pregunta de cómo aumentar la seguridad alimentaria de los grupos vulnerables sigue siendo válida para los estudios en curso y para futuras investigaciones.

Aumentar la capacidad adquisitiva de campesinos e indígenas ciertamente otorga mejores condiciones económicas que permiten adquirir alimentos procesados o primarios, así como otros bienes. En esta situación, no importa mucho la creciente dependencia de productos procesados e industrializados ya que a mayores ingresos correspondería también una mayor capacidad adquisitiva. Esto ha sido evidenciado en los estudios de caso cuando las familias encuentran un nicho de mercado que les permite producir en condiciones extraordinarias (soya, coca, quinua). Por tanto, dirigen sus recursos y esfuerzos a producir de forma especializada una determinada materia prima agrícola. En estos casos la dedicación a tiempo completo es una exigencia y necesidad para optimizar los niveles de producción y así participar en mejores condiciones. Debido a esa alta especialización, los alimentos consumidos son comprados en lugar de ser producidos para el autoabastecimiento y se manifiesta una tendencia a sustituir los productos de origen campesino por productos procesados.

Una manera alternativa y complementaria de generar ingresos es la venta de la fuerza de trabajo y especialmente ocurre cuando la agricultura no está en condiciones de generar productos de alto valor comercial o exportables. De alguna manera el empleo eventual de campesinos e indígenas sería parte de las estrategias de pluriactividad que a veces son vistas como un hecho positivo aunque también pueden ser signo de deterioro de las sociedades campesinas. Excepto el sector de pequeña agricultura especializada comercial, los ingresos por empleo de mano de obra forman parte de las fuentes de ingresos de la mayoría de los hogares rurales. Cuando se constituye en una forma más de ingresos, al parecer favorece a una mayor seguridad alimentaria de los hogares pero cuando es la principal fuente de ingreso (por ejemplo, el caso de la venta de la fuerza de trabajo de los indígenas guaraníes de la TCO Macharetí), más bien sería señal de vulne-

rabilidad alimentaria en términos de baja capacidad adquisitiva y supremacía de productos procesados en la composición de la canasta alimentaria, asociada a situaciones de pobreza o extrema pobreza.

Esta breve problematización puede ayudar a explorar múltiples respuestas y según cada contexto. El plantearse aumentar la capacidad adquisitiva puede ser una respuesta pero es problemático proponerla como la única opción para garantizar la seguridad alimentaria de los campesinos e indígenas. Visto de otra manera, el papel de la agricultura campesina e indígena necesita ser discutido también en relación con la habilidad de adquirir alimentos de los hogares rurales. En adelante, vamos a avanzar hacia la discusión de cuáles podrían ser las posibilidades y límites para la seguridad y soberanía alimentaria.

#### **4. Posibilidades y límites para la seguridad y soberanía alimentaria de base campesina e indígena**

Para una discusión prospectiva sobre el papel de la agricultura campesina e indígena puede resultar valioso comenzar por situar lo que sucede con la sociedad rural y agraria en un contexto mayor. Esto conlleva revisar las proposiciones de los años sesenta y setenta que asociaban la seguridad alimentaria nacional con el 'autoabastecimiento', es decir, producir a nivel de cada Estado-Nación los alimentos que requiere su población. En Bolivia, esta intención estaba ya presente en la Reforma Agraria de 1953 y los programas de desarrollo agropecuario subsecuentes para la "sustitución de la importación de alimentos" (Sanabria 1993, Urioste y Pacheco 2001). Uno de los argumentos centrales para el autoabastecimiento fue la convicción –totalmente comprensible– de que la sobre dependencia alimentaria de otros países implicaba altos grados de vulnerabilidad ante posibles cambios repentinos en los precios internacionales de los alimentos e inestabilidad en el suministro de los mismos por factores climáticos. También estaba de por medio la intención de desvincularse de la marcada dependencia de los

países desarrollados para apostar por un modelo de crecimiento más endógeno. Desde esos años y hasta hoy muchos de los países en vías de desarrollo como el nuestro continúan dependiendo de la importación de alimentos que provienen de países desarrollados, mientras que en muy pocos casos ocurre lo contrario. La alta dependencia de harina de trigo que proviene de Argentina y trigo en grano que se importa desde Estados Unidos es una muestra palpable de ello. En esta situación, los productores nacionales de trigo tienen dificultades de producir eficientemente de manera tal que su producto esté disponible en el mercado nacional a precios más competitivos frente a los precios internacionales. De ahí se puede concluir preliminarmente que la meta de autosuficiencia no siempre es posible dado el orden mundial, el acceso a tierras, suelos, climas adecuados y los procesos de desarrollo diferenciados entre las distintas economías nacionales que –además– en última instancia acaban definiendo relaciones desiguales de intercambio.

A nivel interno de cada país, esta cuestión de autoabastecimiento ha sido objeto de renovadas discusiones a partir de las propuestas de soberanía alimentaria promovidas por redes de carácter global como Vía Campesina. En Bolivia, el concepto de soberanía alimentaria formó parte de los debates de la Asamblea Constituyente (2006-2008) para contrarrestar las propuestas asociadas al concepto dominante de seguridad alimentaria. Probablemente estos debates han tenido lugar debido a las críticas permanentes a este último concepto que es presentado como neutral por sus defensores pero por otros es asociado a las políticas de libre mercado (Lee 2007, Patel 2009, McMichael 2005). Sin embargo, la propuesta de soberanía alimentaria, más que señalar cómo se puede alcanzar el autoabastecimiento, sigue siendo un planteamiento de carácter político asociado con la visión de alcanzar una agricultura sostenible, producción agroecológica, socialmente justa y orientada al abastecimiento a nivel nacional y local. Para todo esto, se entiende que la agricultura campesina e indígena debería jugar un rol clave. Pero, ¿hasta qué punto esto es posible? Veamos algunas posibilidades y limitaciones planteadas de forma preliminar.

Primero, la agricultura campesina e indígena –con sus cada vez más notorias diferenciaciones internas– todavía ocupa a un tercio de la población boliviana que tiene una larga tradición de producción a pequeña escala, manejo rotativo de parcelas, uso de semillas propias, abonos orgánicos y otros. A pesar de las altas tasas de migración, el área rural tiende a mantener una población estable, al menos en términos absolutos. Esto significa que por cada dos habitantes que viven en las ciudades, uno vive en el campo, de modo que el campesino no tiene la presión de producir para una población muy grande aunque el consumo nacional de alimentos tiende a incrementarse. Esta posibilidad de que una población importante dedicada a la agricultura a pequeña escala juegue un papel central para el abastecimiento de alimentos confronta varios obstáculos que hoy explican su situación de marginalidad y subordinación al agronegocio. Una restricción es la escasa disponibilidad de tierras arables de alto rendimiento, sistemas de riego y otros recursos elementales para la agricultura en cualquier otra parte del mundo. Las notables restricciones de acceso a tierra verazmente productiva son un obstáculo que afecta a la mayoría de los campesinos e indígenas debido a que muchos de ellos viven en tierras altas, montañosas, aisladas, susceptibles a heladas y sequías y no tienen riego. Las limitaciones todavía son mayores debido a que la inversión pública privilegia la agricultura a gran escala en lugar de fortalecer la economía de los pequeños y medianos porque es la manera más pragmática para no desabastecer el mercado interno antes que apostar por la riesgosa o estratégica posibilidad de cambiar la matriz agro-productiva de Bolivia.

Segundo, aunque en algunas zonas del país los productores están en efecto cambiando el uso de la tierra para optar por cultivos comerciales que no son necesariamente alimentos, en muchas otras regiones los agricultores están dedicados a una agricultura diversificada, produciendo principalmente alimentos y manteniendo mecanismos de intercambio y abastecimiento vía ferias, mercados locales y regionales. Esta heterogénea orientación del uso de la tierra sería estratégica para alcanzar mayores niveles de seguridad y soberanía alimentaria no solamente en el plano local sino nacional, más aun

cuando las fuerzas económicas del mercado global obligan a cambios en el uso de suelos para favorecer sistemas de monocultivos comerciales de materias primas agropecuarias. También existe un marco legal que reconoce la función social de la tierra como una combinación de producción agropecuaria y gestión sostenible del medioambiente. Pero al mismo tiempo no se puede desconocer la fuerza que tienen las decisiones de campesinos e indígenas de no producir para el abastecimiento interno y local, no producir alimentos o no hacerlo bajo técnicas sostenibles o a base de abonos orgánicos. Estas decisiones en mucho responden a los esfuerzos de los productores por contrarrestar las presiones externas, elevar la productividad y la monetización de la producción agrícola. Sin duda estas experiencias ponen en cuestión cualquier proyecto de producción de alimentos a pequeña escala. Acaso la respuesta de interés colectivo sería ¿obligar a los campesinos a producir alimentos en contra de su voluntad? ¿quién puede obligarlos? ¿es democrático y justo hacerlo? Este es un debate irresuelto pero necesario de retomar en el futuro.

Tercero, tal como Chayanov estudió en su tiempo, la pequeña agricultura requiere de formas de cooperación para escalar hacia economías regionales. Esto no es del todo inexistente entre los campesinos e indígenas, al contrario, muchos viven asociados en comunidades y en algunas regiones incluso existen asociaciones de productores y otras formas de cooperación. Las formas asociativas y solidarias también han sido valoradas positivamente en la CPE de 2009 como economías comunitarias. Sin embargo, es más común encontrar formas simples de cooperativismo como asociaciones de productores individuales que están activos para la comercialización de sus productos y en algunos casos para la compra de insumos agrícolas. Las formas de cooperación más complejas incluyen inversiones conjuntas en maquinarias móviles como tractores o activos inmóviles como sistemas de riego o infraestructura productiva de tipo comunitario. La pregunta es si esto es suficiente para la seguridad y soberanía alimentaria de base campesina e indígena. Es muy probable que éstas sean formas embrionarias de cooperativismo y que en la práctica no existen esfuerzos sistemáticos tanto desde el

sector público como las propias organizaciones agrarias por encontrar formas más integrales de cooperación. Para lograr mayores beneficios y empoderamiento social y económico de los campesinos e indígenas habría que pensar en cómo gestionar los tres recursos elementales para la producción: tierra, capital y fuerza laboral. Por ejemplo, Agarwal (2014) menciona que mancomunar las tierras de cultivo sigue siendo una opción viable para alcanzar 'economías de escala', diseminar riesgos entre varios productores y facilitar la experimentación y diversificación. Pero la propiedad privada de la tierra y su uso familiar prácticamente se han impuesto en la ruralidad boliviana contemporánea, aunque en el marco de controles y regulaciones sociales que se ejercen desde instancias de gobierno comunal.

Cuarto, las políticas públicas de nutrición y alimentación saludable tienen potencial para conferir un rol más protagónico a la pequeña agricultura. Con excepciones, los productos de origen campesino e indígena están íntimamente asociados a alimentos orgánicos y saludables por las técnicas de producción utilizadas y porque no son alimentos procesados de forma industrial o son procesados de forma artesanal. Por tanto es lógico suponer que un mayor consumo de este tipo de alimentos por parte de la población puede favorecer el aumento de la producción y productividad en unidades productivas pequeñas y medianas. Los alimentos de este tipo tienen por mercado las zonas marginales y populares a precios relativamente bajos en relación a los mercados formales de alimentos. Además, los alimentos comercializados con el sello de productos orgánicos tienen llegada a segmentos específicos entre la población con ingresos medios y altos aunque con una participación visiblemente baja dentro del total de la oferta alimentaria. Una limitación para la mayor expansión del consumo de alimentos de origen campesino e indígena son los hábitos alimentarios de los consumidores y la disponibilidad o acceso fácil a alimentos procesados como los *fastfood* o *junkfood* (comida rápida o comida chatarra). Pero la puesta en marcha de forma más decisiva de programas de promoción de nutrición y alimentación saludable podría sin lugar a dudas crear condiciones favorables desde el lado de la demanda de alimentos.

En suma, en la práctica es posible encontrar algunos canales concretos para viabilizar la propuesta de muchos sectores de enfrentar la crisis alimentaria a través de una promoción mucho más sistemática de la agricultura a pequeña escala mediante políticas públicas específicas para cada sub tipo de agricultura familiar e inversiones estatales mucho más relevantes en sistemas de riego, caminos vecinales, sistemas de acopio y compras públicas. En otras palabras, se puede encontrar modelos productivos ubicados en un punto intermedio entre el concepto de seguridad alimentaria y el paradigma de soberanía alimentaria. Para ello aquí hemos esbozado algunos temas como la persistencia de una importante población rural involucrada en la agricultura a pequeña escala, su vocación a producir alimentos, las necesidades de mayor cooperativismo y cambios en la demanda alimentaria. Como se mencionó, son temas complejos que requieren mayor problematización y análisis en profundidad.

## **Conclusión**

En este capítulo se ha problematizado sobre el papel de campesinos e indígenas en su doble dimensión como productores y consumidores de alimentos y su relación con las preocupaciones de seguridad y soberanía alimentaria. Hemos comenzado señalando que el retorno del Estado y su afán por romper con la lógica neoliberal (2006-2014) no cuaja del todo y no ha logrado poner en marcha un modelo alternativo viable. Para ello hemos revisado el contexto político-económico, la crisis alimentaria y su relación con la producción de materias primas agrícolas exportables y la persistencia de la política de “exportar o morir” como parte de los debates de seguridad alimentaria. También hemos destacado las recientes iniciativas y políticas de mitigación y gasto social mediante diversos bonos que beneficiaron a los pobladores rurales empobrecidos pero al mismo tiempo hemos mostrado sus limitaciones para cambiar la base productiva de este sector.

Basándonos en el trabajo de campo se ha destacado las condiciones de productores primarios tanto de quienes producen con orientación al mercado como de quienes optan por una producción

mayormente orientada al autoabastecimiento, que generalmente son los más pobres. Se han destacado los obstáculos que confronta el pequeño productor para dar mayor valor agregado a sus productos y así articularse en condiciones más ventajosas al mercado de alimentos. Al abordar estos puntos se ha visto que existe una suerte de división de trabajo entre los pequeños y medianos productores primarios y los agroindustriales que acopian, transforman y procesan alimentos. También se ha visto que la mayor presencia de alimentos procesados en la canasta básica ocurre de forma acelerada en los últimos tiempos y afecta incluso a las comunidades más pobres y remotas. Sin embargo, no es un proceso uniforme debido a que la mayor presencia de alimentos procesados está condicionada por la disponibilidad de altos ingresos económicos, o por la alta dependencia de los campesinos e indígenas pobres de ingresos generados por la venta de su fuerza de trabajo.

El cambio en la canasta alimentaria rural es perceptible en términos de cantidad, frecuencia de consumo, niveles de gasto y diversidad de productos. Para una mayor comprensión del origen de los alimentos procesados, hemos esbozado algunas características de la producción de los alimentos industrializados más consumidos como serían el azúcar, arroz, aceites, pan y otros. Esta revisión ha permitido aclarar algunos aspectos básicos como quién transforma los alimentos, quién o quienes se benefician de esta actividad y cuál es la relación con las importaciones y exportaciones de alimentos. Una deducción posible de todo esto es que la industria alimenticia boliviana no exporta de manera sustancial alimentos procesados por una serie de factores como la baja productividad y competitividad, relaciones desiguales de intercambio y escalas de producción nacional que apenas satisfacen la demanda del mercado interno.

De forma exploratoria y para una discusión prospectiva, en la última parte de este capítulo hemos abordado las posibilidades y limitaciones de un proyecto de seguridad y soberanía alimentaria más centrado en la agricultura campesina e indígena, reconociendo sus particularidades, diferenciaciones y tipologías específicas, así como sus limitaciones y grandes desafíos. Hemos introducido algunos

elementos de discusión para preguntarnos si es suficiente aumentar la capacidad adquisitiva de los campesinos e indígenas, es decir sus ingresos monetarios, sin que importe mucho que pierdan el control sobre los alimentos que consumen. En este marco, hemos tenido que retomar la cuestión del autobastecimiento no tanto en su primera versión histórica de “sustitución de importaciones” para la seguridad alimentaria nacional sino como una posibilidad de acercarnos hacia el debate de cómo cambiar la matriz agro-productiva para transitar desde los sistemas extractivos que se imponen hoy en día, hacia una agricultura más sostenible, con mayor producción agroecológica, socialmente justa y más centrada en la agricultura a pequeña escala.

## Capítulo 4

# Conclusiones y recomendaciones

Esta sección final está dedicada a presentar algunas de las principales conclusiones con respecto al estado de situación de la agricultura campesina e indígena y su relación con la seguridad y soberanía alimentaria. También está dedicada a ensayar algunas recomendaciones para políticas públicas que podrían resultar útiles a la hora de discusión de estrategias de promoción de la agricultura a pequeña escala, reducción de la pobreza rural o reconsideración de la política agropecuaria dominante que por ahora deposita la seguridad y soberanía alimentaria casi exclusivamente en manos del sector agroindustrial.

### **1. La sociedad rural de campesinos e indígenas**

Una de las razones fundamentales para retornar a los estudios sobre la sociedad rural contemporánea, particularmente de la agricultura campesina e indígena, es que la población rural sigue en peor situación socioeconómica que el resto de los bolivianos, tiene menor y decreciente participación en los beneficios que genera el crecimiento económico y el desarrollo del agro, por tanto, la brecha de desigualdad se amplía. Y, ante todo, su rol económico e histórico en calidad de productores agropecuarios está debilitado al extremo que están a punto de ser privados de su derecho de participar activamente en la vida económica nacional.

Esta afirmación podría parecer exagerada sobre todo si nos fijamos en los indicadores de pobreza recientes que muestran que más gente del campo tiene acceso a mejores ingresos, servicios de salud, educación y asistencia técnica para la producción agropecuaria. En efecto, hemos visto que en 2001 el 84,1 por ciento de la población rural es-

taba en situación de pobreza pero para el año 2012 la cifra se redujo a 71,5 por ciento. Esto es 12,6 puntos porcentuales de reducción pero en áreas urbanas la pobreza se redujo del 44,4 por ciento a 32,1 por ciento (12,3 puntos). Estos cambios favorables no cierran la brecha campo-ciudad que se mantiene por encima de 39 puntos porcentuales. Las reducciones de pobreza están explicadas por el incremento significativo en el gasto social y la ampliación de los servicios básicos y públicos. Pero lo que nos obliga a ser cautelosos es que estas mejoras en las condiciones socioeconómicas básicas no se sustentan en un aparato productivo dinámico y controlado por los propios campesinos e indígenas. Apenas son perceptibles los cambios en cuanto a extensiones de tierras cultivadas, volúmenes de producción campesina e indígena y rendimientos agrícolas.

El mundo rural de los campesinos e indígenas también es más heterogéneo que en el pasado. Si bien la gran mayoría de las familias siguen en situación de pequeños productores orientados a la subsistencia y autoabastecimiento, no se puede ignorar que una parte de esta sociedad rural está embarcada en iniciativas agropecuarias más o menos consolidadas y que tienen un lugar en el mercado. La lista es larga e incluye productores de hoja de coca, pequeños sojeros, quinueros del altiplano, floricultores de las zonas semi-cálidas, lecheros cerca de las principales ciudades, productores de café, sorgo, arroz, entre otros. Hemos mostrado esta realidad diversa a partir de una tipología de productores que hemos ensayado en este trabajo: i) los pequeños productores de *commodities* subordinados al agronegocio, ii) los pequeños productores orientados preferentemente al mercado interno y iii) los productores de subsistencia. Esta tipología más que reproducir la clasificación clásica de campesinos ricos, medianos y pobres, más bien se aproxima a un esfuerzo por entender la realidad campesina e indígena en conexión con la agricultura a gran escala. Dicho de otra forma, serían productores consolidados, intermedios y periféricos.

Las diferenciaciones campesinas ocurren en el contexto de expansión de la agricultura comercial de exportación y también reflejan la emergencia de unidades productivas agropecuarias en diferentes

regiones del país. Hasta antes de la consolidación de las zonas de colonización de los años sesenta y setenta del siglo pasado, la sociedad rural estaba constituida básicamente por los habitantes de tierras altas (valles y altiplano) pero esto ha cambiado substancialmente en las últimas dos o tres décadas. La importancia de agricultores campesinos e indígenas en las áreas de colonización que comienzan en el norte de La Paz y llegan hasta las zonas de expansión del departamento de Santa Cruz es cada vez más evidente en términos de población, unidades productivas agropecuarias y participación económica. Son asentamientos contemporáneos que tienen cierta correlación con la emergencia de unidades productivas con mayor dinámica económica. Como casos estudiados que corresponden a estas regiones hemos presentado concretamente la situación de los productores de hoja de coca de Yanacachi (Los Yungas), los productores agropecuarios de Rurrenabaque (Beni) y los pequeños sojeros colonizadores de Cuatro Cañadas (Santa Cruz). Estos casos representan dinámicas locales dentro de las cuales la renta agraria es mayor y tiende a crecer en relación con otras regiones rurales. Sin embargo, tampoco son zonas donde todos tienen mejores condiciones económicas, menor incidencia de pobreza e igual grado de seguridad alimentaria. Particularmente en la zona de expansión sojera, los procesos de diferenciación campesina son más evidentes entre los pequeños productores y en relación con el sector empresarial.

## **2. Urbanización y migración**

La migración del campo a la ciudad no es un fenómeno reciente sino que es parte del crecimiento urbano que comienza a surgir con fuerza en las últimas cinco décadas. El crecimiento demográfico casi nulo que hoy caracteriza al sector rural comienza a mediados de los años setenta del siglo pasado. En la parte andina la imposibilidad de acceso a nuevas tierras ha sido una causa estructural para la expulsión de las nuevas generaciones y una forma de escapar de la pobreza extrema. En la década de los ochenta la nueva política económica de liberalización ha creado circunstancias más adversas para la agricultura campesina e indígena. Es la época en que comienzan a surgir

nuevas formas de migración de tipo transnacional hacia los países vecinos como Argentina, Brasil, Chile e incluso a España y otros.

Se ha podido constatar que la pronunciada migración genera dificultades y nuevos desafíos para los campesinos e indígenas que viven en sus comunidades. Una de las batallas que tienen los comunitarios es mantener el funcionamiento de los centros educativos de primaria debido a que la reducción en el número de alumnos es un motivo de primer orden para la intervención del Ministerio de Educación y posterior reducción de profesores y recursos asignados. Por esa razón es común que el número de niños y niñas registrados en los diferentes cursos de primaria sea mayor que el número real de estudiantes. También las comunidades rurales tienen presión de los gobiernos locales para mantener un número estable de miembros activos, lo cual es especialmente decisivo para la asignación de presupuestos públicos de coparticipación tributaria. Por esta razón las actuales listas de afiliados en las comunidades campesinas e indígenas tienen al menos dos categorías de miembros: los “estantes” que efectivamente viven en la comunidad y de forma estable y los “residentes” que es la población migrante que ahora vive en las ciudades pero que todavía conserva algunos lazos materiales, sociales y económicos con sus comunidades de origen. Por tanto para los registros oficiales como el censo de población, la población registrada es mayor a la población estante.

Algunos estudiosos han propuesto identificar en el censo de población a los habitantes con “doble residencia” a fin de conocer con mayor precisión las nuevas dinámicas rurales-urbanas. Esta propuesta no ha prosperado ni fue tomada en cuenta en el último censo de 2012 pero ello no invalida la constatación empírica de que existe un número importante de bolivianos que viven entre el campo y la ciudad, algo que por supuesto tiene relación con nuevas dinámicas económicas que combinan la agricultura con empleos informales, temporales o precarios. Al parecer la multiresidencia no ocurre a nivel de hogares sino solo algunos de sus miembros con los que tienen movilidad espacial precisamente por el carácter precario de las fuentes de ingresos rurales y urbanas. En otros estudios de caso

hemos constatado que la feminización de la agricultura campesina e indígena es un fenómeno visible, puesto que las mujeres son quienes se quedan en sus comunidades cumpliendo roles reproductivos, productivos y comunitarios mientras que los hombres se desenvuelven en un espacio social, económico y político mucho más extendido (Colque y Soria Galvarro 2014). En estas condiciones, la seguridad y soberanía alimentaria dependen de múltiples estrategias económicas que se complementan para la mayoría de los campesinos e indígenas.

### **3. Seguridad y soberanía alimentaria**

Con base en el análisis de la información primaria, los estudios de caso y la revisión de información secundaria, podemos señalar que, en general, hemos encontrado una realidad rural donde no existen situaciones de extrema inseguridad alimentaria, hambre y desnutrición. A pesar de que varios factores inhiben el crecimiento de la agricultura campesina e indígena, se observa que una reasignación dinámica de tierra, trabajo y capital dentro del propio sector agrario o hacia otros rubros productivos ha mejorado la habilidad de los hogares campesinos e indígenas de adquirir los alimentos básicos que necesitan. Esta situación alimentaria más favorable también ha sido consecuencia de políticas públicas de mitigación de la pobreza mediante mayor gasto social, inversión pública y presupuestos municipales. Las transferencias directas como los bonos anuales para la población vulnerable son beneficios que reciben directamente los hogares rurales. Pero también las inversiones públicas y municipales han generado empleos directos en obras de infraestructura, servicios y otros, aunque para un sector minoritario.

El mayor grado de seguridad alimentaria es perceptible en términos de cantidad, diversidad de alimentos consumidos y niveles de gastos. Utilizando metodologías de evaluación de seguridad alimentaria del Programa Mundial de Alimentos (PMA 2009) hemos visto que el consumo en términos de cantidad cumple con los estándares mínimos (mayor a 1.600 Kcal/cápita/día) en la mayoría de los hogares campesinos e indígenas aunque en regiones como el

Chaco (Macharetí) dos de cada diez personas estarían por debajo de los mínimos aceptables. Los problemas alimentarios refieren a la calidad de la dieta en términos de variedad de alimentos y valores nutricionales. Es una deficiencia común a todas las regiones y principalmente se refleja en la ausencia del consumo de lácteos, leguminosas, frutas y verduras. La baja calidad nutricional de la dieta obedece a ciertos factores que varían según la capacidad adquisitiva de las familias. Dentro de las familias con ingresos altos aumenta el consumo de carnes y alimentos procesados o industrializados pero con una baja incidencia en el aumento de consumo de bienes deficitarios. Por ejemplo, en zonas tropicales las familias con ingresos altos sustituyen el consumo de yuca por papa -alimento no tradicional de la región, más costosa y de mayor prestigio- es decir tubérculos con similares cualidades nutritivas. Entre las familias pobres el consumir alimentos con calidad y variedad adecuada está limitado por su baja capacidad adquisitiva y porque los productos de autoabastecimiento están pobremente diversificados.

Los niveles de gasto en alimentos se han estimado según el Indicador de Acceso a Alimentos (IAA) que hemos adoptado para valorar la confiabilidad y sostenibilidad de las fuentes de suministro de alimentos (compra, producción propia, intercambio) y de fuentes de ingresos (venta de productos, fuerza de trabajo). En este trabajo hemos abordado ampliamente las implicaciones que tiene una creciente orientación de la agricultura campesina e indígena a la producción especializada y comercial. Por un lado genera una alta capacidad adquisitiva por ingresos provenientes de la producción especializada para el mercado, por tanto, las posibilidades de acceso a alimentos son mayores. También estos cambios traen consigo mayor dependencia de alimentos procesados e industrializados y grados significativos de uniformización o estandarización de los alimentos consumidos y adquiridos fuera del predio. Sin embargo y por otro lado, la dependencia de un rubro productivo especializado y de los precios de mercado implica pérdida de control sobre los alimentos que consumen. En esta situación, se convierten en familias no productoras de alimentos sino de insumos agropecuarios que tienen múltiples usos en

la industria alimenticia y otros sectores económicos. Las familias rurales pobres aunque alcanzan un nivel de gasto alimentario que no las condena al hambre y desnutrición severa, tienen fuentes de ingresos poco confiables y sostenibles debido a que la pluriactividad y diversidad productiva es señal de precariedad e inestabilidad económica. No hemos encontrados ejemplos y casos donde la pluriactividad reporte ingresos o calidad de canasta alimentaria iguales o mayores que la agricultura especializada en producción de soya o coca.

A lo largo de este trabajo hemos usado el término “seguridad y soberanía alimentaria” para poner de relieve que la habilidad de adquirir alimentos es un asunto complejo y conceptualmente irresuelto porque varias preguntas quedan sin responder. ¿En qué términos se debe entender el tener disponibilidad y acceso a alimentos?, ¿en términos de capacidad adquisitiva monetaria, precios o capacidad de autoabastecimiento de trabajadores del campo? El concepto de soberanía si bien sigue siendo asociado popularmente a la idea de autoabastecimiento y promueve una mayor politización de la cuestión de quién producirá los alimentos y cómo nos alimentaremos a futuro, también ayuda a visualizar un norte que queremos muchos: agricultura sostenible, producción agroecológica y socialmente justa. Al respecto, los hallazgos no son muy alentadores para quienes depositan sus esperanzas en la agricultura campesina e indígena como el fundamento de un nuevo régimen agrario y sustento de la seguridad alimentaria nacional. En términos de volúmenes de producción y participación en el mercado de alimentos, este sector más bien pierde impulso y es desplazado por la agricultura a gran escala que se gesta y se expande en las tierras bajas. Los hogares rurales han introducido en su canasta básica alimentos de origen industrial y alimentos procesados (azúcar, arroz, fideos, aceites, pan, refrescos y otros) de un modo tal que representan en términos de valor más de la mitad de los productos básicos consumidos. Esto ocurre no solamente entre las familias rurales acomodadas sino entre las unidades productivas agropecuarias parcialmente mercantiles y también entre los productores de periferia o subsistencia.

Si bien los campesinos e indígenas no sufren hambre ni desnutrición severa, este trabajo advierte sobre la fragilidad y vulnerabilidad de la actual situación alimentaria dadas las trayectorias y dinámicas agrarias dominantes que privan al campesino e indígena de su derecho a participar activamente en el desarrollo económico y social del país. Los estándares mínimos y aceptables que se perciben en la alimentación no tienen por base material una agricultura vigorosa y operada por las unidades productivas agropecuarias de tipo familiar que analiza este trabajo. Una consecuencia de este estado de situación es la dependencia creciente de recursos externos para la seguridad alimentaria de los pobres rurales. Por ahora estos recursos externos provienen de varios canales y casi todos relacionados con la mayor captación de recursos a nivel nacional por la creciente actividad extractiva y crecientes precios internacionales que han perdurado hasta ahora y en la última década (2006-2014). En consecuencia, uno de los desafíos a futuro es cómo disminuir la dependencia de recursos externos para los pequeños agricultores campesinos e indígenas.

#### **4. ¿Fin de la agricultura campesina e indígena?**

Hemos empezado señalando que la marginalización de la agricultura campesina e indígena ocurre en medio de un crecimiento sostenido aunque modesto de la agricultura boliviana desde inicios de los noventa del siglo pasado. Los campesinos e indígenas no han sido excluidos por completo de este proceso sino que el rasgo dominante es su posición cada vez más periférica en calidad de actores económicos. Esto expone a la mayoría de la población rural a una situación tal que no puede gozar de sus derechos económicos y sociales sin la asistencia externa en forma de transferencias, bonos, pequeñas subvenciones o acceso asistido a nichos de mercado. Una de las implicaciones que no se puede soslayar es que la seguridad y soberanía alimentaria no podría alcanzarse sin depender de los recursos externos y condiciones de mercado que están fuera del control local. En otras palabras es una población relegada. Aquí surge una pregunta que no se puede esquivar: ¿este es el principio del fin o directamente el fin del campesinado como clase social y actor productivo relevante?

Responder a esta interrogante escapa a los propósitos de este trabajo pero en términos analíticos constituye un elemento de referencia a no perder de vista para recapitular y redondear algunas conclusiones sobre el contexto o entorno político-económico en el que se debe entender la sociedad rural de los más pobres.

El crecimiento desigual entre la agricultura campesina e indígena y la agricultura comercial (mediana y grande) toma la forma de un modelo agrario bifurcado y territorializado. El punto de bifurcación se inicia con la Reforma Agraria de 1953 y se cristaliza en los años noventa del siglo pasado cuando comienza el *boom* de la soya y oleaginosas. No ha sido un proceso agrario inclusivo en términos de redistribución de tierras, creación de nuevas unidades agropecuarias en las zonas con mayor potencial productivo o guiados por la necesidad de consolidar una estrategia nacional de seguridad y soberanía alimentaria. La agricultura comercial ha adoptado un modelo productivo basado en capital y tecnología (maquinarias agrícolas, semillas genéticamente modificadas, agroquímicos, sistemas de monocultivos) que requiere muy poca mano de obra. En contraste, la agricultura campesina e indígena no ha sufrido cambios sustanciales en las técnicas de producción empleadas, tamaño de capital invertido ni en la intensidad del empleo de la fuerza laboral. Estas realidades han coexistido pero cada una por rumbos distintos.

En medio de estos dos sistemas dominantes está una gama amplia de sistemas productivos que emergen en algún punto y momento. Algunos tienen su origen en los procesos de diferenciación campesina, se conectan a los eslabones agroindustriales, se posicionan en ciertos nichos de mercado y tienen opciones de consolidarse como unidades mercantiles exitosas. Otros emergen directamente de la agricultura comercial y esto probablemente es más visible cuando los capitales transnacionales pasan a dirigir los complejos o cadenas agroalimentarias sobre todo para controlar la renta agraria generada por la exportación de materias primas agrícolas. En este proceso, muchos propietarios de grandes extensiones de tierra pasan a beneficiarse solo de una parte de la renta de la tierra (alquiler, arrendamiento) y pierden control sobre la renta mayor generada por el

proceso productivo, transformación y transporte a mercados internacionales. Es decir, las unidades productivas agropecuarias no son estáticas en tamaño, importancia o quién usufructúa las mismas.

Por otro lado, el modelo agroalimentario que rige está fundada o tiene su razón de ser en políticas de liberalización de la economía. El comercio exterior del sector agrario no se caracteriza por políticas proteccionistas o de regulación de las exportaciones e importaciones. Es cierto que desde el 2006 ha habido algunos intentos por establecer cuotas y gravámenes para garantizar el abastecimiento del mercado interno de alimentos. También es cierto que el gobierno ha creado empresas públicas como la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) para promover la producción, transformación, comercialización y estabilización de los precios. Sin embargo, estas políticas no han cambiado la desigual correlación de fuerzas en el escenario internacional ni el papel que juega el agro boliviano en el contexto internacional. El sector de la agricultura comercial tiene por papel central el producir y exportar productos agropecuarios con bajo valor agregado, el sector mayoritario de campesinos e indígenas produce alimentos tradicionales no transables y el país se abastece vía importaciones de trigo y alimentos procesados.

Bajo este entendido y en el marco de los alcances de este trabajo podemos señalar que la marginalización de los campesinos e indígenas no es un hecho coyuntural ni puntual sino que persistirá al menos en el mediano plazo. En términos analíticos, la desaparición del campesinado como forma de producción depende, más que de transformaciones agrarias, de la vigencia sostenida de una economía de tipo extractivista o el desarrollo del capitalismo con sectores industriales y de servicios dinámicos en tal grado que sean sectores económicos capaces de absorber la fuerza de trabajo rural. Pero estos y otros posibles escenarios no llaman la atención ni son parte de discusiones bolivianas. Por eso mismo las respuestas a los problemas del campesinado son ambiguas. En un primer momento (2006-2009) el gobierno de Evo Morales parecía inclinarse hacia la recuperación de saberes y valores comunitarios de los campesinos e indígenas para sentar las bases de formas de producción poscapitalistas. Pero como se explicó en este trabajo, el

2010 y 2011 se produjo un cambio de rumbo en la política estatal que más bien parece inclinarse por la postura de que la desaparición del campesinado y de las penosas formas de vida rural no son malas noticias sino condiciones necesarias para el desarrollo capitalista.

Para concluir y después de haber ofrecido algunos rasgos y argumentos de la marginalización campesina e indígena, corresponde proponer algunas recomendaciones para políticas y acciones de lucha contra el deterioro de la base productiva, la alta dependencia de recursos externos y la fragilidad de la seguridad y soberanía alimentaria de los pobres rurales.

## **5. Recomendaciones**

### **5.1 La necesidad de reorientar la agenda agropecuaria nacional**

Es necesario reconocer que los esfuerzos recientes (2006-adelante) de los responsables de formular y aplicar políticas públicas han demostrado ser insuficientes y no son satisfactorios en términos de alcanzar mayor inclusión social y revitalización de la agricultura campesina e indígena. Por tanto, a partir de un diagnóstico certero es necesario valorar avances, pero sobre todo las falencias que se han encontrado para la aplicación, en los últimos años, de los distintos planes y programas. A nuestro juicio es necesario privilegiar la superación de dos grandes obstáculos: la disminución del rol productivo del sector campesino e indígena y la desigualdad entre los actores productivos del sector agropecuario.

Para esto hace falta no sólo evaluar la situación agraria en función de los indicadores socioeconómicos y de vulnerabilidad en la seguridad y soberanía alimentaria de los pobladores rurales sino identificar los componentes o factores que coadyuvan o limitan alcanzar mejores condiciones de vida en el campo. Por otro lado, en este trabajo hemos planteado que los mayores gastos sociales y políticas de asistencia que mejoran la situación de los pobres rurales, pueden estar ocultando el frágil estado de situación de la base productiva campesina e indígena. Un diagnóstico complaciente y tardío de la lentitud con que se desenvuelve el aparato productivo agropecuario campesino

puede generar mayores costos sociales y exponer a los más pobres a una mayor dependencia de factores externos en el futuro.

## 5.2 Dinámicas diferenciadas, políticas diferenciadas

Es importante estimular el desarrollo campesino e indígena según sus dinámicas y particularidades y para ello es necesario prestar la atención debida a políticas diferenciadas según tipos específicos de agricultores campesinos. Debe quedar claro que no todos se encuentran en la misma situación ni tienen las mismas necesidades.

Para el sector de los agricultores familiares productores de *commodities* conviene establecer algunas regulaciones que les protejan de los riesgos que implica embarcarse en una dinámica económica dominada por la agricultura comercial a gran escala y los capitales transnacionales. Esto es particularmente válido para las zonas de expansión del departamento de Santa Cruz donde conviven pequeños agricultores de las zonas de colonización y grandes productores. Estas políticas debieran contemplar resguardos para evitar una expansión indiscriminada de la frontera agrícola a costa de bosques y cultivos diversificados. Es importante que el Estado garantice que el actual rol subordinado de los pequeños productores de soya no se convierta progresivamente en una forma de despojo directo e indirecto de la tierra.

Para el sector de pequeños productores insertados al mercado se requieren estímulos financieros, políticas tributarias diferenciadas, compras públicas a precios justos y promoción de políticas orientadas a la sostenibilidad ambiental y modelos agroecológicos de producción de cultivos nativos de alto valor. Pero especialmente hacen falta políticas y programas que atenúen los efectos negativos de la política macroeconómica antiinflacionaria y de la todavía vigente libertad de importaciones de alimentos. Las experiencias de compras estatales de alimentos están rezagadas en relación a los logros de países de la región como Brasil, Colombia, Ecuador o Perú. Por tanto hacen falta programas públicos con mayor presupuesto y alcance.

Para los campesinos e indígenas en situación de vulnerabilidad, esto es la mayoría de los pobladores rurales, las políticas públicas para mejorar los servicios en salud, educación y bonos sociales focalizados (niños, madres y ancianos) siguen siendo importantes. Sin embargo, el foco de atención que debería recibir mayor atención y prioridad es cambiar sustancialmente las condiciones económico-productivas locales. Los programas clásicos de sistemas de riego, caminos departamentales y acceso a fuentes de energía (electricidad y gas) son válidos pero hacen falta otras perspectivas desde donde valorar nuevas oportunidades productivas. Una de ellas es la todavía dubitativa reorientación del gasto público municipal y de programas como Bolivia Cambia Evo Cumple, o Mi Agua, actualmente más centrados en obras de infraestructura políticamente visibles (edificios municipales, canchas de fútbol, tinglados, agua potable) hacia proyectos y programas productivos de largo aliento: efectivo registro de todas las UPA que permita su categorización, renovados sistemas de riego que ahorren agua y multipliquen la eficiencia de su uso, caminos vecinales de tránsito permanente, asistencia técnica de calidad ofertada directamente a las familias rurales, provisión de semillas y abonos, sistemas de acopio y mercadeo, activas compras estatales, mayor protagonismo de gobernaciones y alcaldías, efectivo control al contrabando de internación de alimentos, disminución de las importaciones de alimentos. En definitiva promover que la actividad productiva de las familias rurales sea rentable y sostenible.

### **5.3 Un papel productivo explícito para la agricultura campesina e indígena**

Entre los que formulan políticas públicas y entre los propios productores existe un convencimiento explícito de que la actividad agropecuaria a pequeña escala es el modo de vida de la mayoría de los campesinos e indígenas pero esta convicción no se traduce en acción o en el diseño de una política de Estado que otorgue un papel productivo explícito a quienes trabajan la tierra a pequeña escala, practican el manejo rotativo de parcelas, utilizan semillas propias y abonos orgánicos. En la práctica, la regla que se aplica es simple pero errónea: pequeños

programas y proyectos para las pequeñas unidades productivas agropecuarias.

Para que los agricultores a pequeña escala tengan un papel productivo explícito se debe asignar un lugar privilegiado o una cuota significativa de participación a la producción de origen campesino e indígena dentro del mercado nacional y regional de alimentos. Esto no será posible desde su actual posición marginal y subordinada sino en el marco de una estrategia de mediano y largo plazo de transformación de la matriz agro-productiva y agro-alimentaria. Tampoco se debe asumir *a priori* que los campesinos e indígenas tienden a producir alimentos sino que es necesario reconocer que en varios contextos y regiones muchos ya decidieron no producir alimentos, o no hacerlo bajo técnicas tradicionales. Producir cultivos más rentables así sea a costa de altos costos ambientales y con uso indiscriminado de agroquímicos es una realidad en muchas regiones rurales y en parte es una elección democrática y colectivamente defendida por campesinos e indígenas, que necesita ser discutida, internalizada y modificada, mediante estímulos públicos.

#### **5.4 Cooperación a escala regional**

El asociativismo y las distintas formas de cooperación entre pequeños productores no son nuevos en Bolivia pero se han quedado ancladas en formas simples o embrionarias. Esto puede resultar difícil de aceptar para muchos en un medio como el nuestro donde conceptualmente se valora y se aprecia de sobremanera las formas comunitarias que estarían vigentes en casi todas las regiones rurales. No obstante que este es un tema aún en debate, es recomendable adoptar formas de cooperativismo que superen las actuales prácticas de asociativismo que privilegian solamente estrategias de comercialización, compras conjuntas de insumos o inversiones en pequeñas infraestructuras productivas que benefician a pocas familias.

Si bien la comunidad campesina e indígena, como unidad mínima de organización, es una forma de protección social de los intereses de los más pobres, por otro lado también obstaculiza el escalamiento de programas y proyectos productivos. Como se puede constatar

en campo, los sistemas de riegos fragmentados incluso a nivel de las comunidades son una consecuencia directa de la falta de confluencia de intereses de un mayor número de productores. La idea de cooperación a mayor escala también podría aplicarse para crear mercados regionales de alimentos. Al menos esto es lo que podría concluirse a partir de estudios de caso como el del municipio de Rurrenabaque, pero para ello se requiere la concurrencia eficaz de los aparatos públicos en los niveles nacional, departamental y local, así como de los propios productores organizados.

## 5.5 Políticas de nutrición y alimentación saludable

Si es cierto que la pequeña agricultura campesina está asociada estrechamente a la producción de alimentos orgánicos y saludables, sería correcto señalar que elevar el consumo de este tipo de alimentos podría mejorar la dieta alimentaria en términos de calidad y variedad de la canasta básica. Hemos visto que si bien en términos de cantidad consumida (Kcal/cápita/día) en Bolivia se cumplen los estándares mínimos de alimentación, la mayor deficiencia de la dieta rural está en la baja calidad y variedad que caracteriza a la mayoría de los alimentos consumidos en los hogares del campo sin que sea muy relevante si estas familias tienen altos o bajos niveles de ingresos económicos. Esto probablemente también sucede a nivel de los centros urbanos.

Un aumento en el consumo de alimentos naturales y diversificados de origen campesino e indígena crearía incentivos para mejorar los niveles de producción y productividad en el sector. Pero también sabemos que una limitación de fondo para la expansión de este tipo de consumo sigue siendo la composición de la oferta de alimentos dominada por suministros alimenticios procesados y de origen industrial que son de más fácil acceso y menos perecibles. La disponibilidad y el acceso a precios relativamente bajos a alimentos preparados como los *junk food* inhibe la puesta en marcha de programas de nutrición y alimentación saludable e impide una mayor valorización de cultivos tradicionales y diversificados. Cambiar esos malos hábitos de consumo es una tarea urgente de las instituciones públicas y de la propia sociedad, especialmente mediante campañas en las escuelas y centros laborales.



# Bibliografía

- Agarwal, B. (2014). «Food sovereignty, food security and democratic choice: critical contradictions, difficult conciliations». *Journal of Peasant Studies* 41 (6), 1247-1268.
- Ayo, D. (2014). <http://www.nuevacronica.com> Obtenido de <http://www.nuevacronica.com/sociedad/por-que-la-propuesta-de-garcia-linera-es-un-fracaso-cinco-razones/>
- Bernstein, H. (2010). «Class dynamics of agrarian change», *Agrarian Change and Peasant Studies*. La Haya, Holanda.
- CAO. (2012). *Números de Nuestra Tierra*. Santa Cruz: Bolivia. Cámara Agropecuaria del Oriente.
- Castañón, E. (2014). *Cuando la soya se impone, transformaciones en las comunidades campesinas y sus implicaciones alimentarias*. *Cuestión Agraria*, 1 (1), 27-53. La Paz, Bolivia: Fundación TIERRA.
- CELADE. (2014). *Centro Latinoamericano de Demografía*. Obtenido de <<http://celade.cepal.org/redatam/index.es.html>>
- Chang, H. (2009) «Rethinking public policy in agriculture: lessons from history, distant and recent», *The Journal of Peasant Studies*, 36 (3), 477-515.
- Chávez, G. (2013). *Ingresos fiscales por explotación de hidrocarburos en Bolivia*. BID.
- Colque, G. (2014). *Expansión de la frontera agrícola: Luchas por el control y apropiación de la tierra en el oriente boliviano*. La Paz, Bolivia: TIERRA.

- Colque, G. y Soria Galvarro, F. (2014). *Inclusión en contextos de exclusión. Acceso de las mujeres campesinas e indígenas a la tierra*. La Paz, Bolivia: TIERRA.
- Córdova, D., y K. Jansen. (2013) «The Return of the State: Neocollectivism, Agrarian Politics and Images of Technological Progress in the MAS Era in Bolivia.» *Journal of Agrarian Change*.
- CSCIB. (2014). *Comunidades departamento de La Paz*. Obtenido de <<http://www.cscbbol.org/node/2>>
- Eyzaguirre, J. (2014). *Dependencia y autoabastecimiento alimentario en la TCO Guaraní de Macharetí*. *Cuestión Agraria*, 1 (1), 77-103. La Paz, Bolivia: Fundación TIERRA.
- FAN. (2015). *Impactos de la deforestación 2015*. Columna de opinión institucional de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). Página Siete, 9 de febrero de 2015.
- Fundación TIERRA. (2014) *Cuestión Agraria. Revista Boliviana de Estudios Agrarios y Rurales*. Seguridad y soberanía alimentaria entre campesinos e indígenas. La Paz, Bolivia.
- Fundación TIERRA. (2013). *¿Comer de nuestra tierra? Estudios de caso sobre tierra y producción de alimentos en Bolivia*. La Paz, Bolivia.
- Gobierno de Bolivia. (2011). *Ley N° 144 de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria*.
- INE. (2009). *Encuesta Nacional Agropecuaria 2008*. La Paz, Bolivia: INE.
- INE. (2014) *BOLIVIA características de población y Vivienda Censo Nacional de Población y Vivienda 2012*. La Paz, Bolivia: Instituto Nacional de Estadística.
- INE. (2014b). *Un Pincelazo a las estadísticas con base al Censo Nacional Agropecuario 2013*. La Paz, Bolivia: INE.
- INE. (2015). *Censos Bolivia*. Obtenido de <<http://censosbolivia.ine.gob.bo>> (último acceso 15 de febrero de 2015)

- INE. (2015). *Comercio Exterior de Bolivia*. Obtenido de INE: <<http://www.ine.gob.bo:8082/comex/Main>> (último acceso 5 de marzo de 2015)
- INSA. (2015). *Audiencia Final de Rendición de Cuentas*. Obtenido de <http://www.insa.gob.bo/index.php/prensa-menu/197-el-insa-realizo-su-rendicion-de-cuentas-de-la-gestion-2014>.
- Jaldín, R. (2014). *La persistencia de la agricultura campesina y sus implicaciones alimentarias en Villa Serrano*. *Cuestión Agraria*, 1 (1), 105-136. La Paz, Bolivia: Fundación TIERRA.
- Katz, C. (2008). "El agro-capitalismo de la soja", *Anuario EDI*, n 4, Buenos Aires.
- Lee, R. (2007). *Food Security and Food Sovereignty*. *Centre for Rural Economy Discussion Paper Series No. 11*.
- Mansilla, HCF. (2014). *Una mirada crítica sobre el indianismo y la descolonización*. La Paz, Bolivia: Rincón Ediciones.
- Marconi, R. (2014). *El milagro de la inclusión financiera. La industria microfinanciera de Bolivia (1990-2013)*. La Paz, Bolivia: Hivos, PIEB, Academia Boliviana de Ciencias Económicas.
- McMichael, P. (2005). *Global Development and the Corporate Food Regime*. En F. Buttel, y P. McMichael (eds), *New Directions in the Sociology of Global Development* (Vol. 11, 269-303). Amsterdam: Elsevier.
- Medeiros, G. (2009). *El Sector Agropecuario*. La Paz, Bolivia: UDAPE.
- Méndez, A. (2015). Artículo de opinión. *Página Siete*, La Paz, Bolivia. Febrero de 2015.
- Ministerio de Comunicación. (2014). *Informe de la Gestión 2013 del Presidente Evo Morales Ayma al pueblo boliviano*. Obtenido de <http://comunicacion.gob.bo/sites/default/files/media/publicaciones/Discurso%20Presi.pdf>

- Ministerio de Planificación del Desarrollo. (2006). *Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien – Lineamientos Estratégicos*. Obtenido de <http://www.planificacion.gob.bo/sites/folders/documentos/plan.pdf>
- Müller, R., Pacheco, P., y Montero, J. (2014). *El contexto de la deforestación y degradación de los bosques en Bolivia*. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- Ormachea, E. (2009). *Soberanía y Seguridad Alimentaria en Bolivia. Políticas y estado de situación*. La Paz, Bolivia: CEDLA.
- Ortíz, A. y Soliz, L. (2007). *El arroz en Bolivia*. Cuadernos de investigación N° 67. La Paz, Bolivia: CIPCA.
- Patel, R. (2009). «Food sovereignty.» *Journal of Peasant Studies*, 36 (3), 663-706.
- Pérez, M. (2008). *Efectos de la liberalización comercial en la seguridad alimentaria de los pequeños productores de Bolivia*. La Paz, Bolivia: CIOEC, AIS, Secretariado Rural, AIPE.
- Pérez, M. (2014). *Mercado o seguridad alimentaria, dilema de los pequeños productores agrícolas de Rurrenabaque*. *Cuestión Agraria*, 1 (1), 137-162. La Paz: Fundación TIERRA.
- Pérez, M. (2007). *No todo grano que brilla es oro. Un análisis de la soya en Bolivia*. La Paz, Bolivia: CEDLA.
- Pinstrup-Andersen, P. (2009). "Food security: definition and measurement." *The Science, Sociology and Economics of Food Production and Access to Food*. (1:5-7).
- PMA. (2009). *Manual para la Evaluación de la Seguridad Alimentaria en Emergencias*. Roma, Italia: Programa Mundial de Alimentos (PMA), Servicio de Análisis de la Seguridad Alimentaria.
- PROAGRO. (2010). *Inventario Nacional de Presas en Bolivia 2010*. Cochabamba, Bolivia: Ministerio del Medio Ambiente y Agua. Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego.

- Prudencio, J. (2013). *Mitos y Debates. Análisis del tema agroalimentario en Bolivia*. La Paz, Bolivia: Agrónomos y Veterinarios sin Frontera.
- Prudencio, J. (2009). *Agricultura y pobreza en Bolivia. Los impactos del Programa de Ajuste Estructural en el sector agrícola boliviano*. La Paz, Bolivia: ABDES.
- Prudencio, J. (2014). “Renunciar a la seguridad y soberanía alimentaria por comercializar más?...o la subordinación del sistema alimentario boliviano a las exportaciones”. (Análisis del “Plan del Sector. Desarrollo agropecuario 2014-2018. Hacia 2025”), Mimeo. La Paz, Bolivia.
- Rivera, S. (2014). “El indianismo de este gobierno es de caricatura”. Entrevista a Silvia Rivera, premio nacional de ciencias sociales. *Página Siete*. 12 de octubre de 2014.
- Sanabria, H. (1993). *The Coca Boom and Rural Social Change in Bolivia*. United States: The University of Michigan Press.
- Spedding, A. (2011). *Descolonización. Crítica y problematización a partir del contexto boliviano*. La Paz, Bolivia: ISEAT.
- Svampa, M. (2013) *Consenso de los Commodities y lenguajes de valoración en América Latina*. Obtenido de: [http://www.unesco.org/uy/shs/red-bioetica/fileadmin/shs/redbioetica/Consenso\\_de\\_Commodities.pdf](http://www.unesco.org/uy/shs/red-bioetica/fileadmin/shs/redbioetica/Consenso_de_Commodities.pdf)
- Urioste, M. y Kay, C. (2005). *La reforma agraria inconclusa, alivio de la pobreza sin desarrollo rural*. La Paz, Bolivia: Fundación TIERRA.
- Urioste, M. (2013). La dependencia campesina del mercado urbano de alimentos: Yanacachi, monocultivo de coca y extracción de oro. En Informe 2012 *¿Comer de nuestra tierra? Estudios de caso sobre tierra y producción de alimentos en Bolivia*, (133-192). La Paz, Bolivia: Fundación TIERRA.
- Urioste, M. (2014). *En el campo, los productores de mercancías prefieren comprar sus alimentos*. *Cuestión Agraria*, 1 (1), 55-76. La Paz, Bolivia: Fundación TIERRA.

Urioste, M., Barragán, R., y Colque, G. (2007). *Los nietos de la reforma agraria, tierra y comunidad en el altiplano de Bolivia*. La Paz, Bolivia: Fundación TIERRA.

Urioste, M., y D. Pacheco. (2001). *Las tierras bajas de Bolivia a fines del siglo XX*. La Paz, Bolivia: PIEB.

Veltmeyer, H. (2015). *El extractivismo agrario en tiempos de crisis del capitalismo*. Memoria Seminario: Recientes transformaciones agrarias en Bolivia. La Paz: Fundación TIERRA (en imprenta).

# **ANEXOS**



## 1. Evolución de la Población Urbana y Rural por regiones ecológicas de Bolivia (2001-2012)

Región	Número de municipios		Población total			Población urbana			Población rural			Representatividad rural	
	2001	2012	2001	2012	Variación	2001	2012	Variación	2001	2012	Variación	2001	2012
La Paz	41	47	1.154.471	1.428.985	23,8%	718.330	985.723	37,2%	436.141	443.262	1,6%	14,0%	13,6%
Oruro	30	30	328.018	421.445	28,5%	213.321	283.737	33,0%	114.697	137.708	20,1%	3,7%	4,2%
Potosí	9	9	40.777	58.098	42,5%	10.551	18.134	71,9%	30.226	39.964	32,2%	1,0%	1,2%
<b>Altiplano</b>	<b>80</b>	<b>86</b>	<b>1.523.266</b>	<b>1.908.528</b>	<b>25,3%</b>	<b>942.202</b>	<b>1.287.594</b>	<b>36,7%</b>	<b>581.064</b>	<b>620.934</b>	<b>6,9%</b>	<b>18,7%</b>	<b>19,0%</b>
Chuquisaca	27	28	524.136	573.929	9,5%	218.126	283.123	29,8%	306.010	290.806	-5,0%	9,8%	8,9%
Cochabamba	44	46	1.440.447	1.741.025	20,9%	852.535	1.194.652	40,1%	587.912	546.373	-7,1%	18,9%	16,7%
La Paz	38	39	1.189.789	1.280.997	7,7%	833.816	824.395	-1,1%	355.973	456.602	28,3%	11,4%	14,0%
Oruro	5	5	64.433	73.142	13,5%	22.789	33.020	44,9%	41.644	40.122	-3,7%	1,3%	1,2%
Potosí	29	31	668.236	769.995	15,2%	228.532	318.278	39,3%	439.704	451.717	2,7%	14,1%	13,8%
Santa Cruz	20	20	250.032	332.822	33,1%	100.659	189.685	88,4%	149.373	143.137	-4,2%	4,8%	4,4%
Tarija	9	9	283.943	351.406	23,8%	167.012	220.119	31,8%	116.931	131.287	12,3%	3,8%	4,0%
<b>Valles</b>	<b>172</b>	<b>178</b>	<b>4.421.016</b>	<b>5.123.316</b>	<b>15,9%</b>	<b>2.423.469</b>	<b>3.063.272</b>	<b>26,4%</b>	<b>1.997.547</b>	<b>2.060.044</b>	<b>3,1%</b>	<b>64,2%</b>	<b>63,0%</b>
Beni	19	19	362.521	422.008	16,4%	249.152	308.690	23,9%	113.369	113.318	0,0%	3,6%	3,5%
Chuquisaca	1	1	7.386	7.418	0,4%	-	-	0,0%	7.386	7.418	0,4%	0,2%	0,2%
Cochabamba	1	1	15.264	21.736	42,4%	3.874	6.260	61,6%	11.390	15.476	35,9%	0,4%	0,5%
La Paz	1	1	5.625	9.362	66,4%	-	4.030	100,0%	5.625	5.332	-5,2%	0,2%	0,2%
Pando	15	15	52.525	110.436	110,3%	20.820	53.831	158,6%	31.705	56.605	78,5%	1,0%	1,7%
Santa Cruz	36	36	1.779.439	2.324.940	30,7%	1.444.989	1.970.894	36,4%	334.450	354.046	5,9%	10,8%	10,8%
Tarija	2	2	107.283	132.112	23,1%	80.724	94.391	16,9%	26.559	37.721	42,0%	0,9%	1,2%
<b>Llanos</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>2.330.043</b>	<b>3.028.012</b>	<b>30,0%</b>	<b>1.799.559</b>	<b>2.438.096</b>	<b>35,5%</b>	<b>530.484</b>	<b>589.916</b>	<b>11,2%</b>	<b>17,1%</b>	<b>18,0%</b>
<b>Bolivia</b>	<b>327</b>	<b>339</b>	<b>8.274.325</b>	<b>10.059.856</b>	<b>21,6%</b>	<b>5.165.230</b>	<b>6.788.962</b>	<b>31,4%</b>	<b>3.109.095</b>	<b>3.270.894</b>	<b>5,2%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: elaboración propia en base a información del INE 2014.

## 2. Evolución de la pobreza por regiones (2001-2012)

Región <sup>1</sup>	Población pobre			Población de pobre urbana			Población pobre rural		
<i>La Paz</i>	912.424	750.141	-17,8%	496.044	394.180	-20,5%	416.380	355.961	-14,5%
<i>Oruro</i>	212.578	190.290	-10,5%	106.241	78.138	-26,5%	106.337	112.152	5,5%
<i>Potosí</i>	31.483	33.802	7,4%	6.154	9.117	48,2%	25.330	24.685	-2,5%
<b>Altiplano</b>	<b>1.156.485</b>	<b>974.233</b>	<b>-15,8%</b>	<b>608.439</b>	<b>481.435</b>	<b>-20,9%</b>	<b>548.046</b>	<b>492.798</b>	<b>-10,1%</b>
<i>Chuquisaca</i>	364.216	311.692	-14,4%	97.022	95.017	-2,1%	267.194	216.676	-18,9%
<i>La Paz</i>	633.964	500.739	-21,0%	310.330	156.176	-49,7%	323.634	344.562	6,5%
<i>Cochabamba</i>	786.541	788.112	0,2%	324.285	394.486	21,6%	462.256	393.626	-14,8%
<i>Oruro</i>	53.341	42.097	-21,1%	16.753	14.165	-15,4%	36.588	27.932	-23,7%
<i>Potosí</i>	600.530	460.360	-23,3%	199.925	111.327	-44,3%	400.605	349.033	-12,9%
<i>Tarija</i>	145.180	118.761	-18,2%	58.060	55.224	-4,9%	87.119	63.537	-27,1%
<i>Santa Cruz</i>	151.668	163.626	7,9%	49.623	80.014	61,2%	102.045	83.612	-18,1%
<b>Valles</b>	<b>2.735.441</b>	<b>2.385.387</b>	<b>-12,8%</b>	<b>1.055.999</b>	<b>906.409</b>	<b>-14,2%</b>	<b>1.679.442</b>	<b>1.478.977</b>	<b>-11,9%</b>
<i>Chuquisaca</i>	6.293	5.104	-18,9%	0	0	0,0%	6.293	5.104	-18,9%
<i>La Paz</i>	5.095	7.238	42,1%	0	3.116	0,0%	5.095	4.122	-19,1%
<i>Cochabamba</i>	12.629	14.553	15,2%	3.205	4.191	30,8%	9.424	10.362	10,0%
<i>Beni</i>	275.358	237.989	-13,6%	179.111	160.555	-10,4%	96.247	77.434	-19,5%
<i>Pando</i>	38.016	64.901	70,7%	9.561	20.014	109,3%	28.455	44.887	57,7%
<i>Tarija</i>	53.783	49.066	-8,8%	40.358	35.213	-12,7%	13.425	13.853	3,2%
<i>Santa Cruz</i>	625.044	781.652	25,1%	395.686	570.958	44,3%	229.358	210.694	-8,1%
<b>Llanos</b>	<b>1.016.219</b>	<b>1.160.503</b>	<b>14,2%</b>	<b>627.922</b>	<b>794.047</b>	<b>26,5%</b>	<b>388.297</b>	<b>366.455</b>	<b>-5,6%</b>
<b>Total</b>	<b>4.908.144</b>	<b>4.520.123</b>	<b>-7,9%</b>	<b>2.292.360</b>	<b>2.181.892</b>	<b>-4,8%</b>	<b>2.615.784</b>	<b>2.338.231</b>	<b>-10,6%</b>

<sup>1</sup> Las regiones están clasificadas de acuerdo a la predominancia del tipo de ecoregión a nivel de cada unidad territorial municipal, por ello en un mismo departamento se pueden presentar las tres eco regiones, es el caso del departamento de La Paz y Cochabamba, similar situación para los otros departamentos que abarcan hasta dos eco regiones.

Fuente: elaboración propia en base a información del INE 2014.

### 3. Evolución de las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) y superficie cultivada

Año	1950			1984 <sup>2</sup>			2013		
Región <sup>1</sup>	Superficie ha	Número de UPA	Promedio UPA/ha	Superficie ha	Número de UPA	Promedio UPA/ha	Superficie ha	Número de UPA	Promedio UPA/ha
<i>La Paz</i>	188.127	7.352	25,6	7.342	3.209	2,3	306.597	245.645	1,2
<i>Oruro</i>	22.826	1.239	18,4	51.801	22.187	2,3	111.168	62.798	1,8
<i>Potosí</i>	137.683	15.683	8,8	133.247	80.429	1,7	159.711	124.078	1,3
<b>Altiplano</b>	<b>348.636</b>	<b>24.274</b>	<b>14,4</b>	<b>192.390</b>	<b>105.825</b>	<b>1,8</b>	<b>577.476</b>	<b>432.521</b>	<b>1,3</b>
<i>Chuquisaca</i>	82.439	7.634	10,8	144.135	52.193	2,8	139.470	73.512	1,9
<i>Cochabamba</i>	125.703	31.996	3,9	116.148	79.574	1,5	202.404	181.671	1,1
<i>Tarija</i>	25.867	9.864	2,6	68.617	21.655	3,2	124.535	41.546	3,0
<b>Valles</b>	<b>234.009</b>	<b>49.494</b>	<b>4,7</b>	<b>328.900</b>	<b>153.422</b>	<b>2,1</b>	<b>466.409</b>	<b>296.729</b>	<b>1,6</b>
<i>Santa Cruz</i>	58.242	9.485	6,1	297.252	42.434	7,0	1.641.965	115.055	14,3
<i>Beni</i>	10.559	2.686	3,9	31.223	9.202	3,4	49.350	20.796	2,4
<i>Pando</i>	2.812	438	6,4	9.962	3.717	2,7	12.280	7.540	1,6
<b>Llanos</b>	<b>71.613</b>	<b>12.609</b>	<b>5,7</b>	<b>338.437</b>	<b>55.353</b>	<b>6,1</b>	<b>1.703.595</b>	<b>143.391</b>	<b>11,9</b>
<b>Bolivia</b>	<b>654.258</b>	<b>86.377</b>	<b>7,6</b>	<b>859.727</b>	<b>314.600</b>	<b>2,7</b>	<b>2.747.480</b>	<b>872.641</b>	<b>3,1</b>

<sup>1</sup> Es una división convencional de acuerdo a la predominancia de las ecoregiones en los departamentos, que no necesariamente refleja una estricta división agroproductiva.

<sup>2</sup> En 1984 no se registraron datos en el altiplano del departamento de La Paz y del Chapare de Cochabamba. De acuerdo a estimación de la población rural en este periodo se establecen alrededor de 500.000 UPA.

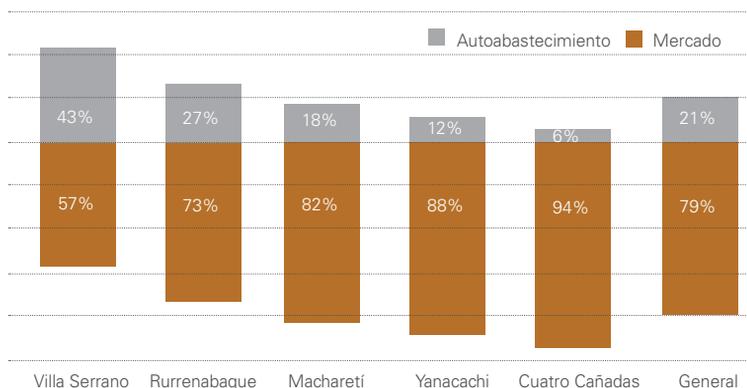
Fuente: INE 2014.

#### 4. Exportaciones agroalimentarias en Valor (2006 -2007) en millones de dólares

Origen	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Soya/aceite</i>	136,2	159,3	212,9	214,8	208,7	278,1	450,5	541,9
<i>Frutas</i>	81,2	87,8	101,1	87,1	119,7	172,3	172,0	161,4
<i>Girasol/aceites</i>	36,2	65,5	135,2	102,8	106,1	69,5	89,9	136,6
<i>Quinua</i>	9,0	13,4	23,3	43,4	47,2	63,7	81,0	153,7
<i>Azúcar</i>	18,5	32,5	49,8	76,9	45,4	0,9	24,6	77,2
<i>Leguminosas</i>	10,3	21,6	42,6	35,5	36,9	29,0	42,2	43,5
<i>Café</i>	14,2	14,4	15,0	17,0	16,0	26,3	18,7	15,6
<i>Sésamo/aceites</i>	13,7	11,6	11,4	17,0	11,9	15,2	8,7	13,5
<i>Leche y derivados</i>	8,3	8,3	2,9	7,8	14,5	8,9	16,2	32,9
<i>Preparados alimenticios</i>	2,3	3,6	7,3	3,5	4,4	7,2	10,5	9,1
<i>Macarrones/fideos/ pasteles</i>	0,7	2,3	1,8	1,3	4,0	6,2	5,0	8,8
<i>Cacao</i>	1,7	1,8	2,1	1,9	4,0	2,7	2,5	1,9
<i>Arroz</i>	1,7	0,8	0,0		2,6	0,8	1,9	1,2
<i>Papas/tubérculos</i>	0,5	0,4	2,0	1,7	3,2	0,1	0,1	0,1
<b>Total</b>	<b>334,5</b>	<b>423,4</b>	<b>607,5</b>	<b>610,5</b>	<b>624,4</b>	<b>680,9</b>	<b>923,7</b>	<b>1197,2</b>

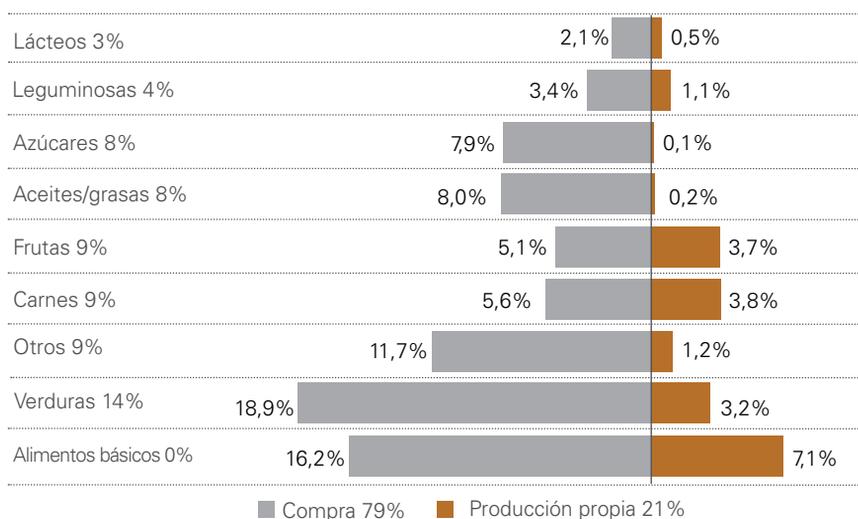
Fuente: elaboración propia en base a datos del INE 2015.

## 5. Origen de los alimentos consumidos por familias campesinas e indígenas según estudios de caso



Fuente: elaboración propia en base a información de encuestas sobre seguridad alimentaria realizadas por TIERRA en 2013.

## 6. Fuentes de suministro de alimentos por grupo alimentario (agregado cinco estudios de caso)



Fuente: elaboración propia en base a información de encuestas sobre seguridad alimentaria realizadas por TIERRA en 2013.

## 7. Situación seguridad alimentaria en los estudios de caso

	Calificación	Cuatro Cañadas	Yanacachi	Machareti	Villa Serrano	Rurrenabaque
<i>Consumo alimentario</i> <sup>1</sup>	<i>Pobre</i>	0,0%	0,0%	10,3%	2,0%	0,0%
	<i>Al limite</i>	4,1%	0,0%	20,5%	9,0%	0,0%
	<i>Aceptable</i>	95,9%	100,0%	69,2%	89,0%	100,0%
	<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<i>Acceso alimentario</i> <sup>2</sup>	<i>Malo</i>	35,4%	18,5%	28,2%	24,0%	23,0%
	<i>Regular</i>	64,6%	32,3%	38,5%	74,0%	30,0%
	<i>Bueno</i>	0,0%	49,2%	33,3%	2,0%	47,0%
	<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<i>Seguridad alimentaria</i> <sup>3</sup>	<i>Inseguridad severa</i>	2,1%	0,0%	18,0%	4,0%	0,0%
	<i>Inseguridad moderada</i>	35,4%	18,5%	25,7%	29,0%	23,0%
	<i>Seguros</i>	62,5%	81,5%	56,4%	67,0%	77,0%
	<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: elaboración propia en base a información de encuestas sobre seguridad alimentaria realizadas por TIERRA en 2013.

<sup>1</sup> **Consumo alimentario** Se establece a partir del Puntaje de Consumo Alimentario (PCA), el cual refleja la cantidad y/o calidad de la dieta de las personas, el valor energético y el contenido de macro y micronutrientes de los alimentos que consumen las familias.

<sup>2</sup> **Acceso alimentario** La capacidad de un hogar para adquirir cantidades suficientes de alimentos mediante una combinación de fuentes de suministro: producción, compras, intercambio, asistencia alimentaria, etc. y las fuentes de ingresos: venta de productos agropecuarios, venta de fuerza de trabajo, comercio, etc.

<sup>3</sup> **Seguridad alimentaria** Se establece a partir de la combinación de niveles de consumo alimentario aceptables con buenas fuentes de ingreso. En sentido contrario niveles pobres de consumo alimentario con mal acceso determinará una inseguridad severa.

## 8. Estructura de gastos de las familias campesinas e indígenas en estudios de caso

Rubro	Cuatro Cañadas	Yanacachi	Machareti	Villa Serrano	Rurrenabaque
<i>Alimentos</i>	32,7%	43,0%	41,0%	36,4%	30,3%
<i>Educación</i>	16,4%	15,6%	19,5%	22,9%	14,3%
<i>Vestimenta</i>	4,6%	12,9%	12,8%	10,2%	8,0%
<i>Salud</i>	10,3%	10,0%	12,3%	13,1%	8,0%
<i>Servicios</i>	2,3%	2,3%	4,1%	6,9%	7,3%
<i>Transporte</i>	3,8%	4,9%	3,8%	2,4%	9,3%
<i>Otros gastos*</i>		5,2%			4,9%
<i>Insumos agricultura</i>	20,6%	5,84%	4,4%	3,6%	11,2%
<i>Insumos ganadería</i>	9,3%		2,1%	4,5%	6,7%
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

\* Para el caso de Yanacachi se consigna ahorro y en Rurrenabaque pago de crédito.

Fuente: elaboración propia en base a información de encuestas sobre seguridad alimentaria realizadas por TIERRA en 2013.

## 9. Estructura de ingresos de las familias campesinas e indígenas en estudios de caso

Actividad	Cuatro Cañadas	Yanacachi	Machareti	Villa serrano	Rurrenabaque
<i>Venta de productos agrícolas</i>	24,0%	41,4%*	18,4%	27,6%	27,3%
<i>Venta de productos ganaderos</i>	23,3%		15,3%	23,9%	20,8%
<i>Venta de artesanía , miel y otros</i>		0,7%	8,37%	3,0%	
<i>Alquiler de tierras</i>	14,6%				
<i>Venta de fuerza de trabajo</i>	24,2%	26,9%	48,7%	26,1%	15,6%
<i>Minería</i>		15,6%			
<i>Servicios de transporte</i>	6,2%	2,31%			16,8%
<i>Comercio minorista</i>	6,2%	11,6%	4,36%	7,5%	6,7%
<i>Bonos y remesas</i>	1,5%	0,92%	4,87%	11,9%	12,8%
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

\* Se incluye producción de coca representa el 32%.

Fuente: elaboración propia en base a información de encuestas sobre seguridad alimentaria realizadas por TIERRA en 2013.



# Sobre los autores

## **Gonzalo Colque**

Economista con especialidad en desarrollo rural. Tiene una maestría en estudios agrarios y medioambientales del International Institute of Social Studies (ISS), La Haya-Holanda. Actualmente es Director de Fundación TIERRA. Trabajó por seis años en la Marka de Ayllus y Comunidades Originarias de Jesús de Machaca (MACOJMA). Ha sido miembro del equipo de investigadores jóvenes del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB). Es autor de varios libros, ensayos y artículos académicos.

## **Miguel Urioste**

Miguel Urioste Fernández de Córdova es economista graduado de la Universidad Católica Boliviana (UCB), con estudios de especialización en desarrollo rural y reforma agraria en Bélgica e Inglaterra. Ha publicado varios libros, ensayos y artículos sobre esos temas. Actualmente es investigador en Fundación TIERRA, donde trabaja desde hace 24 años.

## **Jose Luis Eyzaguirre**

Economista con especialidad en Ecología y Conservación de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Trabajó como investigador en economía campesina indígena en el CIPCA y en el Programa de Gestión Territorial Indígena del CIDOB, actualmente es investigador en Fundación TIERRA.





Este trabajo examina algunos elementos claves que explican la “marginalización” de la agricultura campesina e indígena y sus efectos sobre la seguridad y soberanía alimentaria de los pobladores rurales. En contraposición a ciertas ideas dominantes se sostiene que la expansión de las lógicas de libre mercado o la ampliación de la brecha entre pequeños y grandes agricultores son algunos de los factores que acaban relegando al campesinado como clase social y agente económico relevante, sino central, para la producción de alimentos.

Apoyados en las evidencias y argumentos presentados, este texto incluye recomendaciones para políticas públicas que podrían resultar útiles a la hora de la discusión de estrategias de promoción de la agricultura a pequeña escala, reducción de la pobreza rural y de las brechas de desigualdad o la reconsideración de las políticas dominantes en el agro nacional.



**IDRC | CRDI**

International Development Research Centre  
Centre de recherches pour le développement international

**Canada** 

ISBN: 978-99974-821-3-6



9 789997 482136